PÚBLICO

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

DOCUMENTO DE MARCO SECTORIAL DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

DIVISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

FEBRERO DE 2015

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por Andrew Morrison, jefe del equipo de proyecto; Nathyeli Acuña (SCL/GDI), Clara Alemann (SCL/GDI), David Cotacachi (GDI/CEC), Ana Lucia Iturriza (SCL/GDI), Graciela Maldonado (SCL/GDI), Carmen Masters (SCL/GDI), Andrea Monje (SCL/GDI), Darwin Mori (GDI/CPE), Judith Morrison (SCL/GDI), Carlos Perafan (GDI/CPE), Claudia Piras (SCL/GDI), Adam Ratzlaff (SCL/GDI), Julio Rodriguez (SCL/GDI), Vivian Roza (SCL/GDI), Hugo Us (GDI/CGU), Gabriela Vega (SCL/GDI), Bertha Briceño (KNL/KNM), Elba Luna (KNL), Micha Van Waesberghe (KNL/KNM), Diego Buchara (LEG/SGO), Monica Lugo (LEG/SGO), Luis Marquez (MIF/MIF) y Maria Teresa Villanueva (MIF/MSM). Estamos muy agradecidos con los siguientes revisores externos por sus valiosos comentarios: Louise Cord y Jonna Lundwall (Banco Mundial), Gillette Hall (Universidad de Georgetown) y Tianna Paschel (Universidad de Chicago).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

ÍNDICE

I. EL SECTOR DE GÉNERO Y DIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LAS ESTRATEGIAS SECTORIALES DEL BANCO 1

A. El Documento de Marco Sectorial de Género y Diversidad en el contexto de la reglamentación vigente 1
B. El Documento de Marco Sectorial de Género y Diversidad como parte de la Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y la Productividad 2

II. DATOS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS EFICACES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL DESARROLLO CON IDENTIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS AFRODESCENDIENTES 3

A. Mejorar los resultados en materia de educación y salud para los pueblos indígenas y los afrodescendientes 6
B. Fomentar la preservación del patrimonio ambiental y cultural 8
C. Mejorar la salud de la mujer, lo que incluye una vida libre de violencia 10
D. Fomentar la participación de mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas en la fuerza laboral y el emprendimiento 15
E. Mejorar la gobernanza para los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las mujeres y darles más voz 20

III. PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA REGIÓN 23

A. Rezago en los indicadores de capital humano para pueblos indígenas y afrodescendientes 23
B. Acceso limitado para los pueblos indígenas a servicios fundamentales (agua, electricidad) 25
C. Las tierras y la cultura indígenas y afrodescendientes están amenazadas 26
D. Altas tasas de mortalidad materna, embarazo adolescente y violencia contra la mujer 28
E. Avance, pero brechas considerables de participación y remuneración en los mercados laborales por género, raza y etnia 29
F. Voz y agencia limitadas para las mujeres y los pueblos indígenas 33

IV. LECCIONES DE LA EXPERIENCIA DEL BANCO EN ESTE SECTOR 36

A. Informes de OVE 36
B. Resultados de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo 37
C. Lecciones de la experiencia operativa 38
D. Ventajas comparativas del Banco para abordar temas de género y diversidad 41

V. DIMENSIONES DE ÉXITO Y LÍNEAS DE ACCIÓN 45

A. Objetivos y principios 45
B. Dimensiones de éxito, líneas de acción, actividades operativas y de conocimiento 46

ANEXO: CUADROS Y GRÁFICOS

SIGLAS Y ABREVIATURAS

CASEN	Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Chile)
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
ECH	Encuesta Continua de Hogares (Bolivia)
ECV	Encuesta de Condiciones de Vida (Ecuador)
EH	Encuesta de Hogares (Bolivia)
ENAHO	Encuesta Nacional de Hogares (Perú)
ENCOVI	Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Guatemala)
ENIGH	Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (México)
ENNViH	Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (México)
ENV	Encuesta de Niveles de Vida (Panamá)
EPH	Encuesta Permanente de Hogares (Paraguay)
EPSI	Entidades Promotoras de Salud Indígenas (Colombia)
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FMAM	Fondo Mundial para el Medio Ambiente
GDI	División de Género y Diversidad
IAD	Inter-American Dialogue
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
LGBT	Lesbianas, gays, bisexuales y transgénero
LLECE	Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMJ	Sector de Oportunidades para la Mayoría
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONU-Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
ONU-REDD	Programa de Colaboración de las Naciones Unidas de Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OREALC	Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe
OVE	Oficina de Evaluación y Supervisión
PERLA	Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina
PNAD	*Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio* [Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares] (Brasil)
PYME	Pequeña y mediana empresa
REDD	Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal
SCF	Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo
SCL	Sector Social
SDSI	Somos Diferentes, Somos Iguales
SITEAL	Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina
SPH	División de Protección Social y Salud
UIP	Unión Interparlamentaria

UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNIFEM	Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
VCM	Violencia contra la mujer
WDI	Indicadores de Desarrollo Mundial

I. El Sector de Género y Diversidad en el Contexto de las Estrategias Sectoriales del Banco

A. El Documento de Marco Sectorial de Género y Diversidad en el contexto de la reglamentación vigente

1.1 En el presente Documento de Marco Sectorial de Género y Diversidad se identifican esferas fundamentales para el trabajo analítico y operativo del Banco Interamericano de Desarrollo (el BID o el Banco) en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y de desarrollo con identidad (para más información sobre desarrollo con identidad, véase Contexto Institucional para el Desarrollo con Identidad) de los pueblos indígenas y los afrodescendientes (en lo sucesivo, género y diversidad). Aunque hay otros tipos de diversidad importantes en la región, como las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) o las personas con discapacidad, el análisis de este documento sobre temas de diversidad se centra fundamentalmente en los pueblos indígenas y los afrodescendientes por dos motivos: (i) se trata de dos de los mayores grupos de población diversa de la región, puesto que los afrodescendientes y los pueblos indígenas representan el 30% y el 10%, respectivamente, de la población (CEPAL, 2000; PERLA, 2013), y (ii) el Banco tiene compromisos institucionales específicos de largo tiempo atrás con los pueblos indígenas que están codificados en la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765). En este Documento de Marco Sectorial, en consonancia con la Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y la Productividad (documento GN-2588-4), se reconoce que las clasificaciones comunes de indígenas y afrodescendientes tal vez no reflejen por completo las condiciones de diversidad en el Caribe. El trabajo del Banco con respecto a los afrodescendientes se ha centrado en contextos en los que esta población sufre exclusión por motivo de su condición u origen racial o étnico, por lo general no en el Caribe[1].

1.2 El Documento de Marco Sectorial de Género y Diversidad servirá para orientar el diálogo del Banco con los países miembros prestatarios sobre estos temas, ya que define los principales aspectos analíticos y los ámbitos operativos en los que el BID posee una ventaja comparativa. Este Documento de Marco Sectorial se ha preparado de conformidad con Estrategias, Políticas, Marcos Sectoriales y Lineamientos en el BID (documento GN-2670-1), donde se señala que la Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761) y la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765) se mantendrán y conservarán su vigencia, mientras que, en la fecha de su aprobación, la Estrategia de Desarrollo Indígena del Banco dejó de tener efecto (documento GN-2670-1, párrafo 1.25). Se han incorporado al presente Documento de Marco Sectorial, que será actualizado por el Banco a los tres años de su aprobación, elementos pertinentes de ese documento de estrategia.

1.3 La Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo, la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas y el Plan de Acción de Género guardan

relación con el presente Documento de Marco Sectorial, pero son instrumentos distintos. Las políticas son documentos normativos que se aplican a todas las intervenciones del Banco y el Plan de Acción de Género es una guía para implementar la política de género. El Plan de Acción de Género, en específico, es un compendio exhaustivo de las acciones del Banco en todas las divisiones para ese fin. En cambio, este Documento de Marco Sectorial se basa en una lógica distinta: comienza con un diagnóstico de cuáles son los principales desafíos de desarrollo en la región y después identifica lo que sabemos que funciona para atender esos temas y qué acciones llevará adelante el Banco. Así pues, algunas de las líneas de acción que se proponen en este Documento de Marco Sectorial corresponden a ámbitos en los que el Banco no trabaja actualmente (y que, por consiguiente, en el caso de acciones en el tema de género, no se mencionan en el actual Plan de Acción de Género). A diferencia de las políticas, este Documento de Marco Sectorial no es normativo, y a diferencia del Plan de Acción de Género, no es en sí un instrumento de transversalización. Más bien, es un documento estratégico en el que se establecen prioridades operativas y analíticas.

1.4 En vista de que el género y la diversidad son temas transversales pertinentes para una amplia gama de operaciones del Banco, todos los demás documentos de marco sectorial han puesto de relieve las brechas y los desafíos relacionados con el género, la raza o la etnia en sus respectivos sectores (para más información, véase Temas en otros Documentos de Marco Sectorial), temas de género y diversidad importantes de la región, para complementar otros documentos de marco sectorial. La naturaleza transectorial del tema de género y diversidad significa que otras divisiones, además de la División de Género y Diversidad, contribuirán a las líneas de acción que se describen en la Sección V; varias de las intervenciones (por ejemplo, suministro de servicios de electricidad y agua, servicios de salud interculturales, educación intercultural bilingüe, seguridad ciudadana) están a cargo de divisiones del Banco distintas de la División de Género y Diversidad. Por último, es importante señalar que en este Documento de Marco Sectorial no se abordan todos los desafíos de género y diversidad en la región. Esto incluye temas que a menudo se consideran desafíos para el género masculino, como la violencia juvenil (predominantemente de hombres contra hombres) y la deserción escolar (fenómeno ante todo masculino en el Caribe), los cuales no se analizan porque se exponen con detenimiento en el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia y el Documento de Marco Sectorial de Educación.

B. El Documento de Marco Sectorial de Género y Diversidad como parte de la Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y la Productividad

1.5 El presente Documento de Marco Sectorial es congruente con la Estrategia para una Política Social Favorable a la Igualdad y la Productividad (documento GN-2588-4), que tiene como objetivo global "incrementar la eficacia del Banco en la promoción de políticas sociales que aumenten la igualdad y la productividad en la región". Como se señala en la Estrategia Social, "América Latina es […] la

región más desigual del mundo […] [y] una importante proporción de la desigualdad del ingreso que se observa está determinada por características de raza, lugar de nacimiento o nivel educativo de los padres. Las profundas desigualdades en el bienestar que, en esencia, quedan determinadas al nacer constituyen una afrenta a la noción básica de equidad". En el presente Documento de Marco Sectorial se establecen líneas de acción para el Banco que propiciarán un mayor acceso a oportunidades para tres grupos presentes en América Latina y el Caribe que históricamente han tenido menos acceso: las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes; estas líneas de acción e intervención concreta se adaptarán a las necesidades y demandas específicas de los países de la región. Por último, en este documento se ofrecen más detalles y datos sobre la eficacia de algunas intervenciones de política descritas en la Estrategia Social, entre ellas, la educación intercultural bilingüe, los servicios de salud interculturales, los servicios de salud sexual y reproductiva, la mejora de la intermediación en el mercado laboral para grupos desfavorecidos, la prestación de servicios de atención para niños y personas de edad avanzada o subsidios destinados a ese propósito, y las intervenciones para combatir la violencia contra la mujer.

1.6 El presente Documento de Marco Sectorial consta de cinco secciones. En la Sección II se presentan datos internacionales sobre políticas e intervenciones que han dado buen resultado para fomentar la igualdad de género y el desarrollo con identidad. En la Sección III se describen los desafíos de desarrollo más importantes de la región en estos dos ámbitos. En la Sección IV se identifican las lecciones aprendidas mediante el trabajo con el Banco en estos temas. Por último, en la Sección V se presentan dimensiones para medir el éxito y se proponen líneas de acción para el trabajo operativo y analítico del Banco en los próximos tres años.

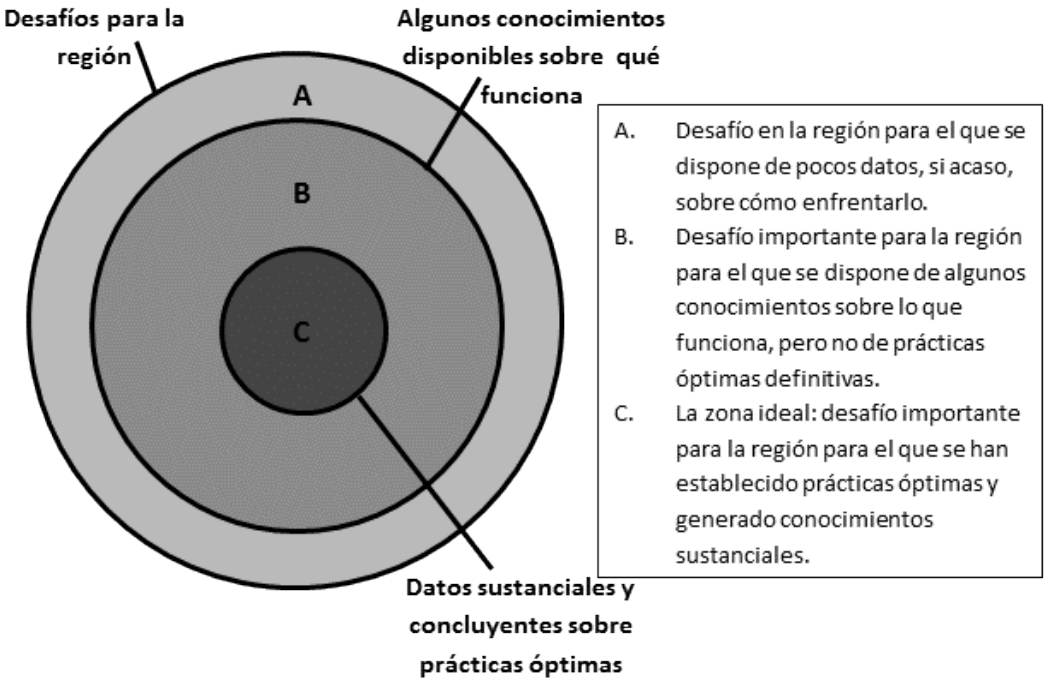
II. DATOS INTERNACIONALES SOBRE POLÍTICAS EFICACES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL DESARROLLO CON IDENTIDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS AFRODESCENDIENTES

2.1 Muchas personas en América Latina y el Caribe enfrentan desafíos para salir de la pobreza o progresar económicamente por factores que escapan a su control, lo que incluye la raza, la etnia y el género (Paes de Barros et al., 2011). Revertir la desigualdad en el acceso a oportunidades puede tener considerables implicaciones positivas para el crecimiento económico y el desarrollo social de la región. La igualdad entre hombres y mujeres contribuye a la reducción de la pobreza y genera niveles más altos de capital humano para generaciones futuras: entre 2000 y 2010 el crecimiento de los ingresos de las mujeres en América Latina y el Caribe contribuyó a una reducción del 30% de la pobreza extrema (Banco Mundial, 2012b). Se estima que la reducción de las diferencias en las tasas de empleo entre hombres y mujeres ha propiciado un aumento neto del PIB del 9% en Brasil y del 12% en Argentina (Aguirre et al., 2012). En general, cuando la mujer está en condiciones de realizar plenamente su potencial en el mercado de trabajo, puede haber apreciables ganancias macroeconómicas (FMI, 2013). Se dispone de menos datos sobre las ganancias macroeconómicas derivadas de la

eliminación de las brechas de oportunidad vinculadas con la raza y la etnia, pero resulta evidente que los pueblos indígenas y los afrodescendientes no se han beneficiado de las pronunciadas reducciones de pobreza que ha experimentado la población en general y siguen teniendo mayores probabilidades de vivir en pobreza (CEPAL, 2010). Las brechas de pobreza étnicas y raciales son de llamar la atención en países de toda la región[2].

2.2 En esta sección se presentan datos internacionales sobre intervenciones eficaces para promover la igualdad de género o el desarrollo con identidad. De manera ideal, las políticas y programas examinados en esta sección abordarían temas de desarrollo que son importantes para la región y cuya eficacia está demostrada por un conjunto considerable de datos rigurosos (zona C del Gráfico II-1). No obstante, cabe señalar desde ahora que el conjunto de datos sobre diversidad es reducido. En su mayoría, los programas y políticas se encuentran en las zonas A o B del Gráfico II-1, es decir, responden a desafíos importantes en la región, pero no hay datos sólidos que demuestren su eficacia[3]. Si esos programas y políticas se consideran "prometedores", deberían desplegarse esfuerzos para establecer programas de conocimiento que con el tiempo generen datos más rigurosos sobre su eficacia a fin de ofrecer una mejor asesoría sobre políticas[4].

Gráfico II-1. Desafíos importantes en América Latina y conocimientos actuales sobre soluciones



2.3 ¿Cómo se eligieron las políticas y los programas específicos que se analizan en esta sección? En materia de género, en su mayoría se trata de temas de género "de segunda generación", es decir, temas importantes que surgen después de que se han resuelto temas de género de primera generación como la igualdad formal de

derechos y el acceso de las niñas a la educación[5]. El único tema de género de primera generación importante que mantiene su pertinencia en América Latina y el Caribe es la mortalidad materna, en vista de que las tasas de mortalidad materna siguen disminuyendo en nuestra región con más lentitud que en otras regiones y siguen siendo extremadamente elevadas entre los pueblos indígenas. Cuatro de los temas de segunda generación más importantes son (i) las brechas económicas entre hombres y mujeres en cuanto a participación en la fuerza laboral, ingresos y capacidad de emprendimiento; (ii) violencia contra la mujer; (iii) embarazo adolescente; y (iv) voz y agencia limitadas de las mujeres (CEPAL, 2014; ONU-Mujeres, 2012; UNIFEM, 2009; Banco Mundial, 2013a; Naciones Unidas, 2009). Éstos son también ámbitos donde los gobiernos de la región demandan trabajo del BID.

2.4 En el ámbito de la diversidad, hay notables diferencias, pero también algunas coincidencias entre los principales aspectos que afectan a los pueblos indígenas y los afrodescendientes en América Latina y el Caribe. En la mayoría de los países de la región con poblaciones indígenas importantes, hay grandes brechas en el nivel de instrucción, el estado de salud y el acceso a infraestructura de calidad entre las poblaciones indígenas y no indígenas (CEPAL, 2014; Hall y Patrinos, 2006 y 2012), algo que por lo general no sucede en el caso de los afrodescendientes. Tanto los afrodescendientes como los pueblos indígenas habitan territorios donde la biodiversidad se encuentra en situación crítica y desproporcionadamente afectados por el cambio climático (Kronik y Verner, 2010; Banco Mundial 2010 y 2013). El cambio climático y la merma de la biodiversidad representan amenazas existenciales en vista del grado en que ambas poblaciones dependen del patrimonio natural para su subsistencia y supervivencia cultural.

2.5 De acuerdo con su cosmovisión, un gran número de pueblos indígenas basa sus relaciones de género en la dualidad y el equilibrio. No obstante, muchas mujeres indígenas se hallan en una situación de desigualdad frente a los hombres en sus comunidades, por lo que han establecido mecanismos específicos para enfrentar esa situación. En años recientes, han ganado un mayor reconocimiento las organizaciones encabezadas por mujeres indígenas, quienes plantean una defensa cada vez más firme de la igualdad de género y de oportunidades basada en su cosmovisión.

2.6 Aunque este documento no se ocupa de todos los desafíos en materia de género y diversidad que afronta América Latina y el Caribe, cabe destacar que los países de la región han empezado a responder a algunos de ellos, en particular en los temas relacionados con el género masculino y las personas LGBT. Entre los principales temas relacionados con el género masculino que siguen representando un desafío en la región figuran la deserción escolar de los varones y la violencia juvenil. En el Documento de Marco Sectorial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano y el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia, respectivamente, se presentan datos empíricos internacionales y regionales sobre prácticas óptimas que abordan estos desafíos. En cuanto a la marginación social

de las comunidades LGBT, un reto que persiste en América Latina y el Caribe, 14 países de la región han promulgado legislación encaminada a prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual. En 2010, Argentina fue el primer país de la región en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y otorgar plenos derechos de adopción a las parejas gays y lesbianas. Brasil y Uruguay también han aprobado legislación que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador han hecho lo propio con las uniones civiles de parejas del mismo sexo.

2.7 A la luz de estos desafíos para el desarrollo, en esta sección se examina el estado del conocimiento sobre políticas encaminadas a (i) mejorar los resultados en materia de educación y salud para los pueblos indígenas y los afrodescendientes; (ii) fomentar la preservación del patrimonio ambiental y cultural vinculado con los pueblos indígenas y los afrodescendientes; (iii) mejorar la salud de la mujer, lo que incluye una vida libre de violencia; (iv) fomentar la participación de mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas en la fuerza laboral y el emprendimiento; y (v) mejorar la gobernanza para los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las mujeres y darles más voz.

A. Mejorar los resultados en materia de educación y salud para los pueblos indígenas y los afrodescendientes[6]

1. Educación

2.8 Como se señala en el Documento de Marco Sectorial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano, los estudiantes pobres, indígenas y rurales suele estar rezagados en su desempeño escolar en comparación con otros[7]. La pregunta básica en materia de políticas con respecto a la educación de los niños indígenas es muy sencilla: ¿los niños indígenas que viven en zonas rurales enfrentan los mismos desafíos educativos que todos los estudiantes de familias pobres y rurales? Aunque los niños indígenas enfrentan algunos obstáculos del mismo tipo que otros niños, pueden ser particularmente serios para ellos. Por ejemplo, el hecho de que los niños indígenas tengan probabilidades mucho mayores de sufrir malnutrición les resta disposición para aprender[8]. No obstante, las implicaciones de este obstáculo en relación con las políticas son las mismas para estudiantes indígenas y no indígenas, pues los programas de alimentación escolar resultan esenciales para que los niños de comunidades pobres estén en condiciones de aprender. De cualquier modo, los niños indígenas, enfrentan dificultades específicas en lo referente a estar listos para aprender, dado que crecen en hogares donde se hablan lenguas distintas a la lengua nacional predominante.

2.9 **Educación intercultural bilingüe**. Son pocos los estudios rigurosos que analizan el impacto de la educación intercultural bilingüe en los países en desarrollo; sin embargo, en cinco estudios sobre Guatemala se observaron efectos positivos de pequeños a moderados en la reducción de la repetición de grado y en la mejora del desempeño escolar de los alumnos según las notas recibidas (Towsend y Newman, 1985; Morren, 1988; Carvajal y Morris, 1990; Scott y Simon, 1987; Patrinos y Velez, 2009). En Chile, una evaluación cuasi experimental mostró que

el fortalecimiento de este tipo de educación (como parte de un proyecto financiado por el BID) trajo consigo una reducción considerable de la brecha de desempeño entre indígenas y no indígenas en lengua (reducción del 36,6%), matemáticas (reducción del 79,1%) y comprensión social (reducción del 86,4%), medida de acuerdo con el desempeño de los alumnos en la prueba normalizada del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE) (Echegaray et al., 2013)[9]. Aunque en los Estados Unidos se han hecho importantes investigaciones sobre educación bilingüe, la pertinencia de las conclusiones es apenas limitada para América Latina y el Caribe[10].

2.10 Hay obstáculos considerables para la instrumentación exitosa de los programas de educación intercultural bilingüe en América Latina y el Caribe. Para empezar, el número disponible de docentes bilingües calificados es insuficiente para ampliar rápidamente estos programas en los países con grandes poblaciones indígenas. En segundo lugar, las restricciones tributarias pueden limitar la capacidad para contratar docentes bilingües adicionales o ampliar los programas de capacitación dirigidos a profesores nuevos o ya formados. Por último, los padres de niños indígenas pueden rechazar los programas de educación intercultural bilingüe si éstos no mejoran también los resultados de aprendizaje de los alumnos y los dotan de otras competencias pertinentes[11].

2.11 Al hacer un balance de los datos sobre los programas de educación intercultural bilingüe en América Latina —con base en la información antes mencionada—, se observa que tienen el potencial para aumentar la matrícula y mejorar el desempeño escolar. Esta manera de mejorar los resultados educativos de los niños indígenas y afrodescendientes debería considerarse prometedora y se debería realizar trabajo analítico adicional para confirmar su eficacia en diferentes contextos.

2. Salud

2.12 Como se señala en la Sección III de este documento, los resultados en materia de salud de los pueblos indígenas son considerablemente inferiores a los de otros grupos en la región. Se han propuesto varios enfoques para corregir esta situación, entre ellos la prestación de servicios de salud interculturales, el establecimiento de relaciones más estrechas entre las comunidades y los centros de salud, y la gestión comunitaria de los servicios de salud.

2.13 **Prestación de servicios de salud interculturales, con especial atención en la salud materna**. Los servicios de salud interculturales tienden un puente entre la medicina indígena y la medicina occidental, considerándolas complementarias. Los principios básicos de la salud intercultural son el respeto mutuo, el igual reconocimiento del saber, la voluntad de interacción y la flexibilidad para cambiar como consecuencia de estas interacciones (Mignone et al., 2007). Se ha demostrado que los servicios de salud culturalmente adecuados aumentan el acceso a los servicios de salud tanto occidentales como indígenas (Mignone et al., 2007; OPS, 2008; UNFPA, 2010; OMS, 1996). Una intervención que incorporaba

métodos tradicionales para el cuidado materno elevó el porcentaje de nacimientos en la clínica de salud local en una zona rural de Perú del 8% al 83% en un periodo de siete años; la mayor parte del cambio se registró en un lapso de dos años (Gabrysch et al., 2009). Entre otros resultados que se atribuyen a los servicios de salud culturalmente adecuados cabe citar un mayor nivel de conocimiento sobre la salud y de prácticas saludables entre la población, decisiones más informadas sobre planificación familiar y una menor mortalidad materna entre las mujeres indígenas (Montenegro, 2006; Cordero et al., 2010)[12]. De acuerdo con información anecdótica de un programa de salud intercultural en Suriname, la integración de las medicinas occidental y tradicional puede abatir los costos (O'Neill et al., 2006). Si bien se trata de datos convincentes, siguen siendo escasos; se requieren más evaluaciones de impacto sobre los programas de salud intercultural.

2.14 **Estrechamiento de los vínculos entre las comunidades y los centros de salud a fin de aumentar la demanda de servicios de salud entre las poblaciones indígenas y afrodescendientes**. Esta relación más estrecha puede ser propiciada por los promotores de salud, quienes llevan a cabo actividades de prevención y promoción de la salud centrándose en la salud reproductiva y materna, así como en la adopción de estilos de vida más saludables a escala individual y comunitaria (Costello et al., 2004; Tinker et al., 2005; Mignone, 2007; Alisjahbana, et al. 1995; Schieber et al., 1993; Janowitz et al., 1985). Estas intervenciones son más eficaces cuando los profesionales de la salud comunitarios son miembros de confianza de la comunidad y cuando se dirigen a hombres y mujeres (Lehman y Sanders, 2007). Aunque se ha documentado la eficacia de estas intervenciones para aumentar el uso de los servicios de salud (Mignone et al., 2007), su repercusión en los resultados de salud no es concluyente, de modo que ese análisis debería ser prioritario [13].

2.15 **Promoción de modelos de autogestión de los servicios de salud**. En algunos países de América Latina y otros lugares, las comunidades indígenas han establecido modelos de autogestión de la atención de salud. Entre los ejemplos latinoamericanos figuran (i) la Asociación Indígena para la Salud Maquehue-Pelale en Chile, que maneja un hospital de atención primaria de 35 camas y se coordina con una red de curanderos machis y (ii) el sistema de Empresas Promotoras de Salud Indígenas (EPSI) en Colombia, que es el más avanzado de estos modelos en América Latina. Las seis EPSI que hay en Colombia tienen más de 1,3 millones de miembros y cada año administran más de US$350 millones anuales de subsidios gubernamentales[14]. Cada año la Superintendencia de Salud, el órgano regulador de salud, evalúa los productos de las EPSI, que requieren una autorización anual para operar, en cuanto a riesgos y calidad del servicio. Recientemente, cinco de los seis proveedores indígenas dela EPSI se clasificaron en el 50% superior en términos de satisfacción del cliente[15].

B. Fomentar la preservación del patrimonio ambiental y cultural[16]

2.16 Los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes rurales de la región viven en algunas de las tierras que albergan más biodiversidad en el planeta,

aunque se encuentran amenazadas. Hay varios tipos de intervenciones útiles para proteger los ecosistemas y los hábitats biodiverso, pero estas estrategias sólo surten efecto cuando los miembros de las comunidades desean participar en estos procesos.

2.17 **Establecimiento y gestión conjunta de zonas protegidas**. De acuerdo con tres evaluaciones de impacto en las que se usaron métodos equiparables, el establecimiento de zonas protegidas redujo la deforestación (Andam et al., 2008; Gaveau et al., 2009; Sims, 2008). La gestión conjunta de las zonas protegidas con las poblaciones locales se vuelve cada vez más común, de modo que más del 20% de los bosques de la región están sujetos a este régimen (Blackman et al., 2012)[17]. En la gestión conjunta, los pueblos indígenas participan desde la fase de planificación (mediante consultas para obtener el consentimiento previo e informado, Ledwith y Watanabe, 2014) hasta la fase de gestión propiamente dicha, en la que es de crucial importancia incorporar la cosmovisión y los valores indígenas para apoyar la preservación de la biodiversidad. Esto se puede lograr utilizando instrumentos como el análisis cultural del uso del suelo y los planes de desarrollo local integrado, enfoques que fueron fundamentales para el establecimiento exitoso del Corredor Biológico Mesoamericano[18]. Es posible multiplicar los beneficios de los mecanismos de gestión conjunta[19] para los pueblos indígenas y afrodescendientes complementándolos con oportunidades económicas en las comunidades como los proyectos ecoturísticos[20]. El sector privado está desempeñando un papel cada vez mayor en esta modalidad de gestión. Aunque, por desgracia, ha habido pocas evaluaciones del impacto de la gestión conjunta en cuanto a conservación forestal, se trata de una práctica prometedora que debe ser objeto de una cuidadosa evaluación.

2.18 **Pago por servicios ambientales**[21]. Los esquemas de pago por servicios ambientales son prometedores para fomentar la equidad al hacer un pago a las comunidades pobres (incluidas las indígenas) y las personas que protegen los bosques y los recursos naturales, pero aún no se tiene claro cuál es su impacto en la deforestación (OCDE, 2010b). En Ecuador, el programa Socio Bosque ha incorporado más de un millón de hectáreas a un programa de pago por servicios ambientales en el que más del 92% de las tierras participantes es propiedad de comunidades indígenas; sin embargo, el programa no ha pasado por una evaluación rigurosa. Rwanda se llevó a cabo un programa de pago por servicios ambientales orientado a las comunidades indígenas que residen al lado de un parque nacional. Aunque el programa redujo la deforestación, su aporte fue relativamente pequeño en comparación con un grupo de control (Martin et al., 2014). En general, la eficacia del pago por servicios ambientales como instrumento para la gestión de recursos forestales depende del diseño de los mecanismos de intervención, su ubicación, el grado de cumplimiento y la posibilidad de que se produzcan efectos secundarios en las zonas de intervención (Pattanayak et al., 2010), así como de los derechos de propiedad de la tierra donde se apliquen (Bruce et al., 2010)[22].

2.19 **Títulos de propiedad y demarcación de territorios**. El otorgamiento de títulos de propiedad constituye un aspecto crucial del desarrollo con identidad para los

pueblos indígenas. Para los indígenas, la tierra no sólo es la base de su subsistencia económica, también se vincula estrechamente con su identidad y, en muchas sociedades, entraña un significado sagrado y espiritual. Por consiguiente, una de las principales demandas de los pueblos indígenas ha sido el reconocimiento legal de sus tierras (Patrinos et al., 2007). Pese a lo importante que es la tierra para ellos, es mucho menos probable que los pueblos indígenas tengan títulos de propiedad que otros habitantes de zonas rurales[23]. Los marcos jurídicos para el otorgamiento de títulos de propiedad son muy variables de un país a otro, lo que dificulta formular recomendaciones de política amplias sobre prácticas relativas a los títulos de propiedad y la tenencia de la tierra (Plant y Hvalkof/BID, 2001). No obstante, hay una serie de problemas comunes en torno de los derechos sobre las tierras indígenas en América Latina y el Caribe, entre ellos (i) la falta de elaboración de leyes que hagan valer derechos consagrados en las distintas constituciones; (ii) procedimientos complejos y de diseño deficiente para otorgar reconocimiento legal a los territorios de indígenas y afrodescendientes; y (iii) la falta de claridad con respecto a los derechos de propiedad de los recursos naturales (Roldan Ortega, 2004b).

C. Mejorar la salud de la mujer, lo que incluye una vida libre de violencia[24]

1. Embarazo adolescente

2.20 **Conocimiento, acceso a métodos anticonceptivos, competencias para la vida y oportunidades**. Las intervenciones para reducir los embarazos adolescentes procuran aumentar el conocimiento sobre salud reproductiva y sexual de niños y niñas, desarrollar competencias para la vida como la confianza en la propia eficacia y la comunicación interpersonal para negociar relaciones sexuales seguras y consensuadas o rechazar las no deseadas, aumentar el acceso a métodos anticonceptivos y su uso, modificar las normas comunitarias que contribuyen al embarazo adolescente, u ofrecer oportunidades o incentivos que den a las niñas más opciones de vida eficaces y eleven el costo de oportunidad de un embarazo precoz (Azevedo et al., 2013; Lopez-Calva y Perova, 2012; Kirby et al., 2007; Vivo et al., 2012; Advocates for Youth, 2012; Lloyd, 2010; Osili, 2008; Duflo et al., 2012; Berthelon y Kruger, 2011; Baird et al., 2010; y Senderowitz, 2000). A este respecto, es importante la agencia —definida como la capacidad de tomar decisiones eficaces y transformarlas en resultados deseados[25]—, pues si las adolescentes no tienen oportunidades de educación y empleo que les permitan tomar decisiones que supongan una inversión en capital humano y rendimientos mayores a largo plazo, pueden tomar "atajos" hacia la edad adulta que impliquen un embarazo (Lopez-Calva y Perova, 2012).

2.21 En un reciente análisis sistemático de las intervenciones para reducir los embarazos adolescentes en países en desarrollo (McQueston et al., 2012), las intervenciones se clasificaron en las siguientes categorías: intervenciones escolares o talleres, servicios de salud y de orientación, comunicaciones y difusión en los medios, educación entre pares, y programas de transferencias condicionadas de efectivo. Una de las conclusiones más importantes de

McQueston y otros es que las intervenciones en las que se intentó fomentar el conocimiento individual o modificar actitudes por lo general tuvieron éxito a corto plazo en lo que respecta a la modificación de actitudes, pero en ocasiones los efectos no eran perdurables y no había influencia en conductas (por ejemplo, la actividad sexual) y resultados (por ejemplo, el matrimonio o el embarazo) importantes (McQueston et al., 2012)[26]. Conviene señalar que los programas basados exclusivamente en la abstinencia han demostrado ser muy ineficaces para retrasar el inicio de la vida sexual (Santelli et al., 2006a y 2006b; Hauser, 2004). Los datos (véanse las citas en el párrafo anterior) indican que las intervenciones eficaces en la promoción de una conducta sexual y reproductiva sana necesitan brindar una educación sexual integral, asegurar el acceso a servicios de salud orientados a los adolescentes y métodos anticonceptivos, ofrecer oportunidades atractivas de educación o en el mercado de trabajo y, por último, transformar las normas de género no equitativas[27].

2. Salud reproductiva y materna

2.22 **Atención continua y conjuntos de servicios esenciales**. Asegurar el continuo esencial de atención desde la etapa pregestacional hasta el parto y el periodo posnatal es vital para reducir la mortalidad y la morbilidad materna. Los datos disponibles revelan que las intervenciones aisladas no son tan eficaces como los conjuntos completos de servicios esenciales que incluyen planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos modernos, atención prenatal y posnatal, parto institucional con apoyo de personal sanitario calificado, atención obstétrica de emergencia y aborto seguro en los casos autorizados por la legislación nacional, así como atención posterior al aborto (Nyamtema et al., 2011; The Lancet, 2006; Adam et al., 2005; Singh y Darroch, 2012). Como se mencionó anteriormente, los servicios a comunidades indígenas y afrodescendientes requieren participación comunitaria y pertinencia intercultural. También existen datos que demuestran que fortalecer la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas mediante educación sanitaria, competencias para negociar decisiones reproductivas u oportunidades económicas puede llevarlas a usar más servicios de salud reproductiva y materna, así como mejorar los resultados de salud (Hou y Ma, 2011; Banco Mundial, 2012; Barber y Gertler, 2009; Grepin y Klugman, 2013; Darney et al., 2013).

2.23 **Participación del hombre**. Los hombres desempeñan un papel crucial en los procesos de toma de decisiones relativos a anticoncepción, uso de servicios de salud, atención de la mujer durante el embarazo, parto y posparto, así como en la prevención de la violencia contra la mujer. De acuerdo con diversos estudios, la colaboración constructiva del hombre en los servicios de salud reproductiva y materna contribuye a una toma de decisiones de salud compartida entre las mujeres y sus parejas, a conductas más responsables y a mejores resultados de salud (OMS, 2007; Khan, 1998; Varkey et al., 2004; Turan et al., 2001; Greene et al., 2006).

3. Violencia contra la mujer (VCM)

2.24 **Función del sector de salud**. El sector de salud, en particular en el nivel de atención primaria, suele ser la primera institución donde las mujeres hablan sobre la violencia que han sufrido. Por consiguiente, los trabajadores de salud se encuentran en una posición única para atender las necesidades de salud y psicosociales de las mujeres víctimas de violencia. Las directrices clínicas y de política más recientes de la OMS para fundamentar la respuesta del sector de salud a la violencia sexual y de pareja (OMS, 2013) recomiendan enfáticamente que los establecimientos de atención de la salud estén equipados y cuenten con personal de salud capacitado para llevar a cabo una serie de acciones de respuesta mínimas, de primera línea que permitan minimizar las consecuencias negativas de la violencia sufrida para la salud. La atención sistémica a la violencia contra la mujer en el sector de salud ha mejorado las prácticas de los proveedores gracias a que se tiene una mayor comprensión de las consecuencias de la violencia en la salud de la mujer, se identifican más casos de violencia contra la mujer, hay menos actitudes prejuiciosas entre los proveedores de servicios de salud y las mujeres que acuden a servicios de salud se sienten más satisfechas (Fleischman, 2005; Colombini et al., 2008; Guedes et al., 2002; Guezmes y Vargas, 2003). Según un análisis sistemático de datos experimentales, las intervenciones de orientación para mujeres embarazadas que sufrían violencia de pareja producían una reducción estadísticamente significativa de futura violencia física, sexual y psicológica de la pareja (Van Parys et al., 2014). Aunque no se cuenta con información suficiente para recomendar una detección universal de casos de violencia contra la mujer en establecimientos de atención de la salud cuando no hay una respuesta eficaz disponible, los proveedores de atención de la salud deben preguntar sobre la exposición a violencia cuando evalúan condiciones que pueden ser causadas o complicadas por violencia contra la mujer[28].

2.25 **Centros de ventanilla única y servicios integrados para mujeres sobrevivientes**. Hasta ahora, en lo tocante a las políticas públicas, la respuesta más común ante la violencia contra la mujer ha sido el establecimiento de redes de servicios, donde el sector público presta algunos servicios (como atención de la salud y policía) y otros servicios corren por cuenta de organizaciones no gubernamentales (como orientación psicológica o albergues). La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en particular, ha defendido la formación de coaliciones y redes de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que puedan colaborar en el diseño y la aplicación de enfoques integrales para combatir la violencia contra la mujer, como una estrategia prometedora a fin de prevenir este fenómeno y responder ante él (Bott, 2012).

2.26 Una innovación reciente en los servicios para sobrevivientes de violencia ha sido el establecimiento de centros de ventanilla única que prestan una serie de servicios coordinados en un mismo lugar. Al principio, estos centros se concentraban en servicios policiales, judiciales y de apoyo psicológico. Más recientemente, El Salvador ejecutó el programa Ciudad Mujer para brindar no sólo apoyo policial, judicial y psicológico, sino también otro tipo de servicios

(incluido el empoderamiento económico y la salud sexual y reproductiva) para que las mujeres sobrevivientes puedan romper el ciclo de violencia en sus vidas. Se están diseñando programas similares basados en el éxito que tuvo en El Salvador para ponerlos en marcha en Trinidad y Tobago y México con financiamiento del BID. Estos centros de ventanilla única reducen los costos de transacción para que las mujeres aprovechen una serie de servicios, además de que facilitan la prestación de servicios integrados de mayor calidad. Hay algunos aspectos importantes relacionados con la sostenibilidad de este modelo, entre ellos, la importancia de evitar la duplicación de servicios con los programas ya existentes, el desafío de coordinar las acciones de múltiples proveedores de servicios y la necesidad de asegurar que los servicios integrados cuenten con respaldo institucional y de políticas. Para reproducir con éxito estos modelos, es necesario que sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a diferentes niveles de atención, capacidad institucional y recursos disponibles (Colombini et al., 2011; Colombini et al., 2012). Aunque está en curso una evaluación de impacto del proyecto Ciudad Mujer en El Salvador, se requieren más evaluaciones de centros de ventanilla única.

2.27 **Prevención de la violencia contra la mujer**. Más allá de la prestación de servicios de calidad a las sobrevivientes de violencia, la región encara el importante desafío de diseñar programas de prevención que reduzcan la prevalencia de la violencia contra la mujer. Los dos enfoques más comunes para esta tarea han sido las campañas en los medios masivos de comunicación y las iniciativas orientadas a modificar las actitudes y conductas del hombre, por lo general en un grupo específico, como los adolescentes o varones condenados por ejercer violencia contra su pareja. No se ha determinado con precisión cuál es la eficacia de las campañas en los medios, pues si bien parecen ser eficaces para aumentar la conciencia sobre la violencia contra la mujer, un análisis cuasi experimental de una campaña masiva en los Estados Unidos reveló consecuencias inopinadas, por ejemplo, la representación negativa de los hombres puede haber reducido el número de hombres que consideran que este tipo de violencia es una preocupación (Keller et al., 2010).

2.28 A escala regional, dos iniciativas dirigidas a hombres y mujeres jóvenes en las que se abordan actitudes y conductas específicas han obtenido resultados positivos en su evaluación: el programa Somos Diferentes, Somos Iguales (SDSI) en Nicaragua y el Programa H en Brasil[29]. El objetivo de SDSI era promover una mejor salud sexual y reproductiva entre los jóvenes, así como reducir la aceptación de la violencia contra la mujer y la discriminación contra los homosexuales[30]. Una evaluación de impacto reveló que SDSI redujo el 14% la aceptación de la violencia contra la mujer y aumentó casi el 50% las probabilidades de búsqueda de apoyo tras sufrir este tipo de violencia (Solorzano y Peña, 2004)[31]. El Programa H alienta a los hombres jóvenes a establecer relaciones de género más equitativas respetando los derechos de la mujer, evitando el uso de la violencia en las relaciones y participando como cuidadores y en las tareas domésticas[32]. En Brasil y la India, una evaluación cuantitativa (no experimental, pero con un sitio de control) mostró aumentos considerables en el

uso del preservativo y las normas de igualdad de género; sólo en la India se registraron reducciones sensibles en la violencia de pareja (Pulerwitz et al., 2006; Verma et al., 2008). Otras intervenciones importantes para prevenir la violencia contra la mujer incluyen mejorar la vigilancia policial, el sistema judicial y otras instituciones de atención a víctimas[33].

2.29 En un análisis global reciente de evaluaciones de impacto de intervenciones para combatir la violencia contra la mujer, se determinó que 16 diferentes intervenciones para reducir la violencia de pareja tenían evaluaciones de impacto rigurosas con resultados positivos. Si bien eran menos comunes las intervenciones de prevención, se observaron algunos efectos positivos en programas en Canadá y los Estados Unidos (Ellsberg et al., próxima publicación). En Canadá, un programa de capacitación para enseñar a los jóvenes a forjar "relaciones saludables" ha generado reducciones notables de violencia de pareja, tanto cuando se dirigía a estudiantes de ambos sexos de nivel medio superior como cuando se orientó específicamente a jóvenes en riesgo (Wolfe et al., 2003, 2009). En los Estados Unidos, un análisis del Programa Inicio Saludable (*Healthy Start Program*), centrado en la prevención del abuso infantil mediante visitas domiciliares, mostró menores tasas de violencia de pareja entre las madres participantes (Duggan et al., 1999).

2.30 Los programas que apoyan el desarrollo de competencias parentales positivas ofrecen una gran oportunidad para evitar el ejercicio de violencia más adelante en la vida. Considerando la abundante información que señala que los niños expuestos a violencia tienen más probabilidades de sufrir o ejercer violencia de pareja como adultos, se ha identificado a los programas parentales entre las intervenciones más prometedoras para prevenir el maltrato infantil y la violencia de pareja en etapas posteriores de la vida (Mikton et al., 2009; Heise, 2011; McCloskey et al., 2011). De acuerdo con análisis basados en ensayos aleatorios de control[34], las intervenciones parentales han resultado eficaces para modificar la conducta parental asociada con el abuso, reducir las tasas de abuso infantil, mejorarlas relaciones entre padres e hijos, y generar competencias parentales positivas (McCloskey et al., 2011; Rahman, 2009; Prinz et al., 2009; MacLeod, 2000; Olds, 2007; Cooper, 2009). Se necesitan evaluaciones más rigurosas de países de ingresos medianos y bajos para definir qué intervenciones son más eficaces en un contexto de limitación de recursos y diversidad cultural.

2.31 Se ha prestado una creciente atención a promover espacios públicos seguros para las mujeres. ONU-Mujeres ha lanzado la iniciativa Ciudades Seguras para las Mujeres, que aplica principios de prevención del delito mediante diseño ambiental al fenómeno de la violencia contra la mujer. Lamentablemente, no se ha evaluado la eficacia de ésta y otras iniciativas de espacios seguros. En términos generales, dada la escasez de evaluaciones de impacto en la región para medir los efectos de los programas para prevenir la violencia contra la mujer, este tipo de evaluaciones deben ser una prioridad de primer orden.

D. Fomentar la participación de mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas en la fuerza laboral y el emprendimiento[35]

1. Participación en la fuerza laboral

2.32 Los obstáculos para la participación en la fuerza laboral pueden ser el resultado de diversas causas, entre ellas, falta de información sobre dónde encontrar ofertas de trabajo; falta de competencias cognitivas, técnicas o socioemocionales; discriminación ejercida por los empleadores (Galarza y Yamada, 2012; Arceo-Gomez y Campos-Vazquez, 2014); falta de acceso a servicios complementarios, como guarderías (Blau et al., 2014; Todd, 2013) o normas sociales y culturales (Banco Mundial, 2014a). El primer paso en la formulación de políticas es efectuar un diagnóstico completo de los obstáculos para hallar empleo, ofrecer un conjunto flexible de programas y ayudar a encaminar a mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas a la intervención más adecuada para sus necesidades específicas.

2.33 **Suministro de cuidado infantil**. Ampliar el acceso a servicios de cuidado infantil potencia los niveles de empleo remunerado de las mujeres (en los márgenes extensivo e intensivo), pero el diseño y la prestación de estos servicios son importantes para asegurar que sean de calidad, asequibles y eficaces en función del costos. El cuidado infantil en Brasil y Argentina elevó la participación de las madres en la fuerza laboral (Paes de Barros et al., 2011; Berlinski y Galiani, 2007). Los estudios sobre programas de guarderías comunitarias en Colombia y Guatemala también identifican efectos positivos en la oferta de trabajadoras, pero ningún efecto en las horas de trabajo o el ingreso. De acuerdo con varios estudios, el programa Chile Crece Contigo no tiene efecto alguno en la oferta de trabajadoras madres (Medrano et al., 2009; Aguirre, 2011). En suma, la mayoría de los datos apunta a un efecto positivo de los programas de cuidado infantil en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, con efectos menos claros en el ingreso. Aunque los mandatos para que los empleadores brinden servicios de cuidado infantil puede aumentar la oferta de programas de cuidado infantil, también podrían reducir los incentivos para contratar mujeres y generar discriminación contra las trabajadoras (Prada et al., 2013)[36]. En cuanto al mecanismo para prestar los servicios de cuidado infantil, no hay datos, ni a favor ni en contra, de que los servicios públicos de cuidado infantil están desplazando a los servicios privados. Sin embargo, en lugares donde hay una amplia oferta privada tiene lógica entregar vales a las mujeres pobres en vez de construir nuevas guarderías públicas.

2.34 **Políticas activas de mercado de trabajo**. Los países adoptan a menudo estas políticas como una manera de reducir el desempleo o acelerar el apego al trabajo de grupos con dificultades de inserción en el mercado laboral[37]. Las políticas activas de mercado de trabajo adoptan formas diversas, que pueden incluir la intermediación de servicios, capacitación para quienes no participan en la fuerza laboral, pasantías con empresas, empleos en obras públicas o subsidios salariales para grupos específicos. Los efectos de estas políticas en las mujeres en América

Latina y el Caribe a menudo sobrepasan los que se producen en la población masculina[38]. La mayoría de las políticas activas de mercado de trabajo aumentan las tasas de empleo de las mujeres y su tasa de salida del desempleo, pero no traen consigo aumentos salariales considerables. Los datos indican que estas políticas ayudan a los trabajadores a encontrar empleo más rápidamente, pero en ocasiones con un salario menor del que podrían obtener mediante una búsqueda más prolongada por cuenta propia. Hay pocos datos sobre el efecto de las políticas activas de mercado de trabajo para los afrodescendientes y los pueblos indígenas.

2.35 **Servicios de intermediación laboral[39]**. Estos servicios pueden incluir sistemas de información sobre oportunidades en el mercado de trabajo, orientación en el proceso de búsqueda de empleo y apoyo a empresas en la selección de candidatos. En países desarrollados, los servicios de intermediación laboral suelen estar vinculados con programas de capacitación, seguros de desempleo y otros programas sociales (Mazza, 2011). Se trata de una política eficaz en función del costo para fomentar una mejor inserción laboral cuando la falta de información inhibe una buena compatibilización entre empleadores y personas que buscan empleo. En principio, se esperaría que los servicios de intermediación laboral fueran más importantes para los grupos históricamente excluidos que no cuentan con redes amplias para la búsqueda de empleo, pero no se ha investigado este tema en América Latina y el Caribe. Los únicos datos de la región sobre los efectos desglosados por sexo de estos servicios proceden de una evaluación del servicio público de intermediación en México, que mostraron que ayudan a los hombres desempleados a encontrar empleos con mejores salarios en comparación con otras estrategias de búsqueda, pero no tienen ningún efecto para las mujeres (Flores Lima, 2010).

2.36 **Subsidios y bonos salariales**. Estas iniciativas son eficaces en entornos donde los mujeres o los grupos étnicos tienen competencias pertinentes, pero hay obstáculos para que las empresas los contraten. Las evaluaciones de programas de subsidios para la mujer en la región indican que pueden servir para aumentar la tasa de empleo de las beneficiarias a corto plazo, pero no queda claro su efecto a largo plazo (Gallaso et al., 2001; Centro de Microdatos, 2012). Una inquietud que despiertan los programas de subsidios y bonos salariales es que facilitan a los trabajadores que reciben el subsidio encontrar empleo, pero posiblemente a expensas de aquellos que no lo logran. Desde 2009 Chile mantiene un subsidio para fomentar el empleo juvenil y en 2012 adoptó un mecanismo similar para fomentar el empleo de las mujeres. El subsidio al empleo juvenil ha demostrado su eficacia para promover el empleo y la participación, pero no ha incidido en los salarios (Rau, 2012). Aún no se ha evaluado el subsidio salarial al empleo de las mujeres.

2.37 **Programas de obras públicas**. Los programas de obras públicas pueden ser muy eficaces para aliviar la pobreza y mitigar los efectos de las conmociones en lugares donde el desempleo está extendido y la creación de empleos es una prioridad. De lo contrario, sus resultados suelen ser inferiores a los de otros tipos de políticas activas de mercado de trabajo. En la India, el Sistema Nacional

Mahatma Gandhi de Garantía del Empleo Rural, un programa público de empleo de gran alcance, llevó a cabo una labor explícita para promover el empleo de las mujeres. Una evaluación en el estado de Andhra Pradesh mostró que la mujeres representaba más del 50% de los beneficiarios y que sus salarios eran iguales a los de los hombres, lo que no ocurre en general en el mercado de trabajo local (Liu y Deininger, 2013).

2.38 **Programas de capacitación**. Los programas de capacitación, una de las políticas activas de mercado de trabajo más usadas, pueden ser eficaces para fomentar el empleo y aumentar los salarios. Datos de todo el mundo sobre el impacto de los programas de capacitación en el fomento de las competencias de los grupos desempleados o vulnerables indican que los resultados son mejores para los adultos que para los jóvenes, y para las mujeres que para los hombres (Kluve, 2006; Card et al., 2010). En la bibliografía sobre evaluación se han identificado los siguientes factores de éxito en los programas de capacitación destinados a aumentar la empleabilidad de quienes enfrentan más dificultades para su inserción laboral: (i) participación de proveedores del sector privado; (ii) capacitación orientada a la demanda; (iii) inclusión de un componente de intermediación laboral; (iv) capacitación en el empleo; (v) procesos periódicos de acreditación de instituciones de capacitación o capacitadores de empresas; (vi) inclusión de módulos para el desarrollo de competencias socioemocionales; y (vii) integración de programas de capacitación para grupos vulnerables dentro de un sistema de aprendizaje permanente. La mayoría de los programas de capacitación juvenil en América Latina han incorporado algunos de estos elementos, en particular los primeros cuatro (González et al., 2012; Urzúa y Puentes, 2010), lo que podría explicar su éxito relativo en el aumento de la inserción de jóvenes vulnerables en el mercado de trabajo, incluidas mujeres jóvenes. Cabe señalar que varios de estos programas también otorgaban subsidios para guardería a mujeres con hijos lactantes.

2.39 **Legislación y acuerdos laborales flexibles**. Casi todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes que exigen la igualdad de remuneración, pero su eficacia es cuestionable a causa de una aplicación limitada[40]. Aproximadamente la mitad de los países tienen leyes contra el acoso sexual en el trabajo, aunque la aplicación, de nuevo, es materia de discusión. El acceso a licencias por motivos familiares, incluso sin goce de sueldo, aumenta las probabilidades de que las mujeres retornen al trabajo después del nacimiento de un hijo. Los derechos a la licencia parental incrementaron las tasas de empleo de mujeres en Europa (Ruhm, 1998). La duración de la licencia de maternidad y las modalidades de financiamiento en América Latina y el Caribe no son muy distintas de las los países de la OCDE, mientras que la licencia de paternidad sólo está disponible en la mitad de los países de la región, con una duración que va desde 2 hasta 14 días. El aumento de las licencias parentales y los acuerdos laborales flexibles para mujeres y hombres han generado un mayor impacto en economías avanzadas donde un alto porcentaje de los empleos de las mujeres es formal. Asimismo, de acuerdo con bibliografía de países europeos, las mujeres registran niveles más altos de satisfacción laboral cuando trabajan tiempo parcial

(Asadullah y Fernandez, 2008; OCDE, 2010a). No hay evaluaciones regionales del impacto de los acuerdos laborales flexibles, pero en vista de su importancia este tema debería ser objeto de futura investigación.

2. Mayor calidad de los empleos para mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas

2.40 Algunas de las políticas que promueven el empleo de la mujer también pueden mejorar la calidad de los empleos, sobre todo en el sector formal. Estas políticas pueden ser de particular pertinencia para las mujeres afrodescendientes, que quizás sean quienes reciben las remuneraciones más bajas y muy probablemente estén empleadas en el sector informal. Los empleos de calidad en el sector formal se pueden promover mediante subsidios salariales, programas de capacitación y servicios de intermediación. Además de que estas intervenciones pueden ser eficaces en la promoción del empleo, conforme a los datos presentados en la sección anterior, también pueden elevar la calidad de los empleos.

2.41 **Programas de certificación**. El propósito de los programas de certificación de la igualdad de género en el lugar de trabajo es generar conciencia sobre asuntos de equidad de género y reducir la discriminación en el lugar de trabajo. Los temas que suelen incluirse en los programas de certificación de la igualdad de género son contratación y selección de personal, desarrollo profesional, capacitación, remuneración, equilibrio entre el trabajo y la vida personal y acoso sexual. La participación de las empresas en estos programas es voluntaria. La promoción de estos programas normalmente está a cargo de las entidades públicas responsables de la igualdad de género, mientras que un tercero certifica las normas[41]. América Latina ha sido un pionero en el diseño y la aplicación de programas de certificación. Actualmente hay programas en operación en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay, y otros cinco países están en proceso de diseñarlos. De acuerdo con las evaluaciones de procesos, las empresas se benefician de la participación en estos programas, pero no hay evaluaciones de impacto rigurosas en cuanto al desempeño de las empresas. Una evaluación de impacto de un programa similar en Egipto mostró que en gran medida había sido infructuoso, aunque tal vez este resultado obedezca al reducido número de empresas participantes y, por consiguiente, al pequeño tamaño de la muestra que se usó en la evaluación. Se considera que este enfoque encierra un "alto potencial" para promover el empleo de la mujer (Buvinic et al., 2013).

2.42 **Capacitación profesional en ocupaciones no tradicionales**[42]. Hay motivos para pensar que si bien las preferencias culturales y personales ejercen cierta influencia, algunas mujeres pueden no estar conscientes de las diferencias en las oportunidades de empleo y los salarios vinculados con distintas profesiones. Los datos sobre la eficacia de las intervenciones en las que se brinda información a las mujeres para que configuren la decisión sobre los estudios que emprenderán se limita a un estudio sobre el impacto del otorgamiento de cupones educativos profesionales e información sobre rendimientos a jóvenes en desventaja en Kenia (Hicks et al., 2011)[43]. En esa evaluación, las mujeres jóvenes que recibieron

información sobre los salarios más elevados en las ocupaciones donde predomina la presencia de varones tenían más probabilidades de manifestar preferencia por una carrera con predominio de varones y de matricularse en una de ellas[44]. Se trata de una intervención prometedora para aminorar la segregación ocupacional y, a la vez, reducir las brechas salariales relacionadas con el género, la raza y la etnia.

3. Capacidad de emprendimiento

2.43 Las intervenciones para apoyar a las mujeres empresarias en América Latina y el Caribe se concentran en dar acceso a financiamiento y capital humano y social. Las evaluaciones de impacto rigurosas sobre el acceso a financiamiento han girado en torno a las intervenciones de microcrédito y ahorros en cuanto a la oferta y los programas de educación financiera en lo que respecta a la demanda. Aunque se han realizado varios estudios basados en ensayos aleatorios de control sobre servicios de desarrollo empresarial y capacitación para mujeres en América Latina, tienden a enfocarse en intervenciones para microempresarios (en comparación con las pequeñas y medianas en empresas [PYME]). Por desgracia, no hay ensayos aleatorios de control u otros estudios rigurosos sobre intervenciones destinadas a mejorar el acceso de las mujeres a redes empresariales u oportunidades de recibir mentoría.

2.44 **Acceso a crédito y otros servicios financieros**. Según una metaevaluación de 52 ensayos aleatorios de control, evaluaciones de métodos cuasi experimentales y combinadas, no se pueden establecer vínculos concluyentes entre el microcrédito y la reducción de la pobreza ni tampoco entre el microcrédito y el crecimiento empresarial. En el caso de empresas de subsistencia propiedad de mujeres, el capital por sí solo no basta para generar crecimiento en las ventas, pero ayuda a las mujeres a suavizar el consumo. Para generar crecimiento empresarial, las mujeres empresarias necesitan más que microcrédito; necesitan productos financieros más amplios como instrumentos de ahorro y servicios de desarrollo empresarial (Buvinic et al., 2013). La información empírica más sólida sobre el impacto de los servicios financieros (incluidos los instrumentos de ahorro y el crédito) muestra que el ahorro tiene un impacto positivo en los ingresos de las mujeres y el monto que invierten en sus negocios (Mehra et al., 2012). En un ensayo aleatorio de control de una iniciativa emprendida por el mayor banco del sector público de Guatemala para promover nuevos productos de ahorro al momento de amortizar un préstamo se determinó que dicha iniciativa duplicaba los depósitos para ahorro (Atkinson et al., 2010).

2.45 **Capacitación en habilidades empresariales**. El impacto de la capacitación en habilidades empresariales puede mejorarse aumentando su calidad y duración, combinándola con visitas técnicas adaptadas a la medida o asesoría especializada para la empresa, y focalizándose en mujeres que dirigen empresas más grandes (Buvinic et al., 2013). Por ejemplo, en un ensayo aleatorio de control con un banco en República Dominicana se comparó el efecto de una capacitación en fundamentos de contabilidad y el de una capacitación general simplificada en

heurística básica para gestión de finanzas. El estudio reveló que sólo con esta última se lograban mejoras apreciables en las prácticas y los resultados empresariales. En un ensayo aleatorio de control de un programa en Perú dirigido a mujeres empresarias, se observó que los servicios de desarrollo empresarial, ofrecidos mediante clases y asistencia técnica, propiciaban prácticas empresariales más acertadas, como el cierre de empresas no rentables; los ingresos de las beneficiarias aumentaron el 20% en comparación con el grupo de control (Valdivia, 2012). Las capacitaciones empresariales breves mejoran las prácticas de negocios, pero tienen pocos efectos medibles en el crecimiento de las empresas. En una revisión crítica de 17 proyectos de servicios de desarrollo empresarial de todo el mundo, se observó que pocos estudios identifican impactos importantes en las utilidades o las ventas (McKenzie y Woodruff, 2012)[45]. Algunas intervenciones de servicios de desarrollo empresarial y redes empresariales han arrojado resultados prometedores con respecto a la mentoría y la formación de redes. De acuerdo con una evaluación experimental del programa 10,000 Mujeres en Perú[46], las mujeres que recibían capacitación compartían lo que habían aprendido sobre habilidades empresariales con otras mujeres empresarias (Torero et al., 2013)[47]. En relación con la formación de redes empresariales, un estudio de métodos combinados de la Red de Mujeres Empresarias de Voces Vitales en Argentina reveló que el 36% de las mujeres a menudo recibían asesoría de otras participantes (Buvinic et al., 2013).

E. Mejorar la gobernanza para los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las mujeres y darles más voz[48]

1. Establecimiento y gobernanza de territorios indígenas y de afrodescendientes

2.46 Los pueblos indígenas y los afrodescendientes controlan más del 30% de todas las tierras en América Latina (Roldán Ortega, 2004). En las constituciones de muchos países se han consagrado territorios indígenas como entidades político-administrativas descentralizadas, pero su establecimiento ha sido lento[49]. En otras regiones del mundo están surgiendo buenas prácticas de gobernanza indígena. Según parece, la principal lección aprendida con el establecimiento de territorios indígenas en Australia es que la construcción de la gobernanza se debe basar en las realidades locales, lo que incluye forjar instituciones y relaciones de gobernanza que evoquen jurisdicciones, leyes, costumbres y relaciones tradicionales, así como historias específicas (Hunt y Smith, 2006). Algunos observadores se muestran pesimistas sobre los efectos positivos del establecimiento de territorios indígenas autónomos en países en desarrollo (van Dam, 2011). Otros son más optimistas, al señalar que hay espacio para la complementariedad entre los territorios indígenas y los gobiernos nacionales, y la gobernanza indígena puede contribuir al *Sumak Kawsay* o vida en armonía (Ortiz, 2010)[50]. Lo que resulta evidente es que no hay guías claras en América Latina que puedan seguirse para el establecimiento y el funcionamiento eficaz de territorios indígenas como entidades descentralizadas, en especial considerando el alto grado de especificidad local. Éste es un tema en el que el BID puede generar

conocimiento pertinente para la región mediante estudios de caso de experiencias específicas en gobernanza indígena.

2. Voz y participación de las mujeres en la gobernanza

2.47 El poder de agencia supone tomar decisiones eficaces y transformarlas en resultados deseados. Así pues, la agencia entraña elementos internos y externos: la motivación interna de tomar una decisión [y] la voluntad de actuar conforme a nuestros deseos y la inexistencia de restricciones exógenas insuperables (Perova y Vakis, 2013). Por consiguiente, las intervenciones para promover la agencia femenina pueden centrarse en las restricciones externas, en las capacidades y motivaciones de las mujeres, o en ambos aspectos.

2.48 **Cuotas para candidatas políticas**. Las cuotas para la representación de mujeres en las listas de candidatos de los partidos políticos han sido bastante eficaces para elevar el número de mujeres elegidas para ocupar cargos. Al comparar la composición de género de ambas cámaras del congreso antes de que se adoptaran las cuotas con los resultados electorales más recientes, se observa un aumento de 15,5 puntos porcentuales, en promedio, en el número de mujeres que ocupan un escaño[51]. Con todo, cabe destacar que la calidad de la legislación sobre cuotas varía bastante y una legislación de diseño deficiente tendrá un efecto escaso o nulo. Hay información considerable de otras regiones del mundo desarrollado que indica que la presencia de mujeres en cargos de elección popular modifica la asignación presupuestaria y las prioridades legislativas (Chattopadhyay y Duflo, 2004; Beaman et al., 2007; Barnes, 2012; Schwindt-Bayer, 2003; Jones, 1997; Taylor-Robinson y Heath, 2003). Es más probable que las mujeres que están en posiciones decisorias propicien mejoras en ámbitos de mayor interés para la mujer, como la salud materna, el bienestar infantil, la violencia contra la mujer, los derechos reproductivos y la discriminación. Las cuotas también repercuten a largo plazo en la aceptación entre los electores de la participación y el liderazgo político femeninos, lo cual se mide como la probabilidad de que se reelija a mujeres en poblados antes reservados exclusivamente para la elección de mujeres (Bhavnani, 2009). Además, la exposición a mujeres líderes influye en las aspiraciones profesionales y el nivel de instrucción de las adolescentes (Beaman et al., 2012; Clots-Figueras, 2012).

2.49 **Promoción de la participación de la mujer en la gobernanza de proyectos**. A escala de proyectos, las evaluaciones de impacto de proyectos que exigen o alientan la participación e inclusión de la mujer en órganos decisorios ha arrojado resultados mixtos en cuanto a impactos a largo plazo en la participación. Una evaluación cuasi experimental de un proyecto de caminos rurales en Perú en el que se exigía una mayor participación de mujeres en los comités de caminos rurales y se establecían metas con respecto al número de mujeres miembros de las microempresas de reparación de caminos reveló que el programa beneficiaba a las mujeres aumentando su participación económica y brindándoles un mayor acceso a servicios de educación y salud (Valdivia, 2009). En Kenia, el fomento de la participación femenina en los comités locales de recursos hídricos generó

aumentos considerables en la participación (20%) que se sostuvieron por un periodo de tres años (Leino, 2007)[52]. Sin embargo, cuando se evaluó un proyecto en Sierra Leona no se observó ningún efecto de exigencia de participación en la inclusión de mujeres en la toma de decisiones local a largo plazo (Casey et al., 2012)[53].

2.50 Se ha llegado a la conclusión de que otras intervenciones de gobernanza, como los procesos de consulta y los mecanismos de seguimiento comunitario (incluidos los boletines de calificaciones ciudadanos) mejoran la pertinencia cultural, la rendición de cuentas y la calidad de los servicios públicos, además de dar mayor voz y agencia a las mujeres si se aplican elementos de diseño apropiados. De acuerdo con una evaluación aleatorizada sobre el seguimiento comunitario de proveedores públicos de atención de salud en Uganda, se registraron notorios aumentos en el uso de los servicios de salud y mejoraron los resultados de salud (Bjorkman y Svensson, 2009). Los programas de transferencias condicionales de efectivo ofrecen un espacio prometedor donde pueden abordarse simultáneamente mejoras de los servicios públicos y el empoderamiento de la mujer mediante mecanismos de seguimiento comunitario.

2.51 **Presupuestos participativos**. Los presupuestos participativos han aumentado la participación y la agencia ciudadanas[54] (Baiocchi et al., 2011; Mansuri y Rao, 2013) y mejorado los resultados de gobernanza (Zamboni, 2007; Gonçalves, 2009)[55]. No obstante, no todos los procesos de presupuesto participativo han incluido consideraciones de género o la participación de mujeres en sus consultas y deliberaciones (Escobar, 2003; Bridge, 2002). En vista de las diferencias de género en la necesidad y el uso de servicios públicos y el posible efecto de empoderamiento que tiene la participación en un ámbito del que las mujeres se han visto tradicionalmente excluidas, los presupuestos participativos constituyen un ámbito prometedor para incluir la voz de las mujeres.

2.52 **La mujer en la gobernanza del sector privado**. También es crucial la participación de la mujer en la gobernanza del sector privado. Dos estudios de Catalyst (2011 y 1997) que se citan con frecuencia mostraron que las empresas de *Fortune 500* de los Estados Unidos con mayor presencia femenina en su consejo de administración superaron el desempeño de otras empresas con baja presencia femenina en rendimiento del capital, rendimiento de ventas y rendimiento del capital invertido, aunque este análisis se basa en correlaciones simples y no puede interpretarse como una relación causal. En un estudio similar de 345 empresas latinoamericanas en seis países, McKinsey y Company (2013) observaron que las empresas con una o más mujeres en sus comités ejecutivos superaban el desempeño de los comités integrados exclusivamente por hombres[56]. En 2008 Noruega instauró el requisito de que las mujeres representaran al menos el 40% de los miembros de consejos de administración empresariales. Desde entonces, se han aplicado cuotas de género en los consejos de administración en Bélgica, Francia, Islandia, Italia, Malasia, los Países Bajos y España. Brasil ha fijado una meta del 40% para los consejos de administración de empresas propiedad del Estado (Economist, 2014; Deloitte, 2011).

III. PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA REGIÓN

3.1 En la sección anterior se presentaron datos sobre la eficacia de las políticas y programas que abordan algunos de los aspectos más apremiantes de la igualdad de género y el desarrollo con identidad en la región de América Latina y el Caribe. En esta sección se describen los desafíos en la región a los que responden esas políticas y programas[57]. Un desafío adicional para abordar todos los temas que se analizan a continuación es la falta de datos comparables y confiables desglosados por raza, etnia y género[58].

A. Rezago en los indicadores de capital humano para pueblos indígenas y afrodescendientes

3.2 Los pueblos indígenas en América Latina enfrentan notorias brechas de capital humano que comienzan a aparecer en una etapa muy temprana de la vida. Sin embargo, las tasas de matrícula en educación primaria suelen ser sólo ligeramente menores para los niños indígenas (con la excepción de Panamá, donde son considerablemente menores).

3.3 Las brechas de capital humano empiezan a ser muy evidentes en las tasas de finalización de la educación primaria y el desempeño en pruebas estandarizadas. Las tasas de finalización de la escuela primaria para niños indígenas van desde un mínimo de nueve puntos porcentuales menos (Bolivia) a casi 44 puntos porcentuales menos (Panamá), véase el Cuadro A.1 del Anexo. La prueba estandarizada del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) revela brechas mayores al 15% en matemáticas y habilidades de lenguaje entre alumnos indígenas y no indígenas de tercero y sexto grados en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú (OREALC/UNESCO y LLECE, 2010; Alfonso et al., 2012).

3.4 Como parte de la preparación de este Documento de Marco Sectorial, se hicieron cálculos simples para estimar el rezago en tiempo en las tasas de finalización de la educación primaria (es decir, hace cuántos años los países alcanzaron tasas de finalización para los alumnos no indígenas equivalentes a las actuales tasas de finalización para los alumnos indígenas)[59]. Algunos países presentan rezagos muy pequeños (1,5 años y 2,2 años en el caso de México y Perú, respectivamente) y otros más grandes (5,7 años y 10,6 años en el caso de Bolivia y Panamá, respectivamente) (para los detalles, véase el Cuadro A.2 del Anexo). Es más probable que los adolescentes indígenas estén rezagados en la escuela que sus pares no indígenas en todos los países de la región sobre los que hay información disponible, y en muchos países las brechas son muy grandes (SITEAL, 2012)[60]. En todos los países de la región, con la excepción de El Salvador, Brasil y Uruguay, las tasas de finalización de la educación secundaria son menores para los indígenas que para los no indígenas (SITEAL, 2012)[61].

3.5 Si bien las brechas en el nivel de instrucción entre los grupos no indígenas y los pueblos indígenas son preocupantes, la interacción del género y la etnia coloca a

las mujeres indígenas en una situación más grave de desventaja acumulada. En un documento de trabajo reciente del Banco Mundial, se señala que si bien los hombres indígenas tienen menores niveles de alfabetismo que las personas no indígenas de ambos sexos en Bolivia, México y Perú, el nivel de las mujeres indígenas es incluso más bajo que el de los hombres. Lo mismo es aplicable a los niveles de instrucción (Tas et al., 2013). En el caso de los afrodescendientes, el panorama es más moderado, pues aunque los afrodescendientes están rezagados con respecto a los promedios nacionales en la mayoría de los países donde se dispone de datos desglosados por raza (Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay), superan los promedios nacionales en unos cuantos países (Belice y Panamá).[62]

3.6 La falta de disponibilidad de educación intercultural bilingüe se cita a menudo para explicar las grandes brechas en la retención y el desempeño escolares entre los niños indígenas y no indígenas; esto significa que los niños indígenas se ven obligados a aprender en una lengua de la que inicialmente tienen un dominio limitado o nulo y con material didáctico que puede ser ajeno a su cultura. Lamentablemente, se dispone de pocos datos comparativos sobre el porcentaje de niños indígenas que reciben educación intercultural bilingüe. Sólo hay información disponible para Guatemala y Ecuador, donde el 9,7% y el 45%, respectivamente, de los niños indígenas de 7 a 12 años de edad reciben este tipo de educación.

3.7 Otro importante elemento de capital humano es el estado de salud. Los indicadores de salud para los pueblos indígenas son sistemáticamente inferiores a los de personas no indígenas. Los pueblos indígenas enfrentan niveles desproporcionadamente elevados de mortalidad materna e infantil, malnutrición, enfermedades cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas como el paludismo y la tuberculosis (Naciones Unidas, 2009). Quizás el parámetro más básico del estado de salud sea la esperanza de vida, que en el caso de los pueblos indígenas es considerablemente inferior a la de las personas no indígenas en países donde hay datos desglosados por etnia disponibles[63]. La mortalidad materna es un aspecto de especial preocupación. En los tres países que cuentan con datos de mortalidad materna desglosados por etnia, la tasas de las mujeres indígenas son notoriamente más altas: el 48% más alta en México, el 109% en Guatemala y el 481% en Panamá (véase el Cuadro A.3 del Anexo). En la región en general, la tasa de mortalidad materna de mujeres indígenas triplica el promedio regional (Naciones Unidas, 2009)[64].

3.8 Se ofrecen dos explicaciones para los resultados de salud inferiores de los pueblos indígenas: (i) la falta de adaptación cultural de los servicios de salud, lo que reduce la demanda de estos servicios por parte de los pueblos indígenas, y (ii) la discriminación en la prestación de servicios. Hay datos mixtos sobre la existencia de discriminación en la prestación de servicios de salud, algo que no debe sorprender en vista de lo difícil que es documentar la discriminación. En un estudio realizado en México se concluyó que los indígenas recibían servicios de salud de calidad notablemente inferior que los no indígenas, incluso después de un control de los niveles de ingresos (Barber et al., 2005). En cambio, en un

estudio en Perú para el que se aplicó una metodología experimental no se detectó discriminación contra mujeres indígenas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva (Bustelo et al., 2013).

B. Acceso limitado para los pueblos indígenas a servicios fundamentales (agua, electricidad)[65]

3.9 Los pueblos indígenas como grupo también tienen mucho menor acceso a servicios de infraestructura que se vinculan con mejores resultados de salud (como sucede con el agua potable) o mayores ingresos disponibles (como en el caso del suministro de electricidad a medida que los hogares van dejando de usar opciones más caras como las baterías o el queroseno). En el Cuadro A.4 se presentan datos sobre el acceso a agua potable y electricidad en países de la región que tienen estos datos desglosados por etnia. En acceso a agua potable, las brechas superan los 15 puntos porcentuales en Bolivia, Ecuador, México y Panamá, mientras que en Guatemala y Paraguay son relativamente menores (menos de ocho puntos porcentuales). En acceso a electricidad, las brechas rebasan los 15 puntos porcentuales en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, y Panamá y fueron menores a ocho puntos porcentuales en Brasil, Chile, México y Paraguay. Cálculos simples para estimar el rezago en tiempo del acceso de los indígenas a agua potable y electricidad (hace cuántos años los países alcanzaron tasas de cobertura para hogares no indígenas equivalentes a las actuales tasas de cobertura para hogares indígenas) usando tasas de crecimiento de cobertura para los pueblos indígenas mostraron que los hogares indígenas tienen las tasas de cobertura que caracterizaban a los hogares no indígenas hace 10 a 26 años para agua potable y 3 a 24 años para electricidad (para los detalles, véase el Cuadro A.5A y B del Anexo).

3.10 Hay dos factores relacionados con esta brecha en el acceso a servicios de infraestructura: (i) el aislamiento geográfico y (ii) el desequilibrio en la inversión pública entre las regiones más ricas y las más pobres. La distribución de asentamientos dispersa de los pueblos indígenas eleva considerablemente los costos marginales de las inversiones en infraestructura en estas comunidades remotas. Es probable que los desequilibrios de la inversión pública entre las regiones más pobres, donde se ubican predominantemente las comunidades indígenas, y las regiones más ricas obedezcan a que las regiones más prósperas están en mejores condiciones para competir por los recursos de desarrollo centralizados. Esta desigualdad puede ser particularmente evidente en el caso de la distribución de regalías de las industrias extractivas, pues gran parte de la minería y la extracción de gas y petróleo se lleva a cabo en territorios indígenas o en zonas con grandes poblaciones indígenas, pero son pocas las regalías que pueden retornar a estas zonas[66]. Como resultado de ello, es común que las comunidades indígenas se vean obligadas a luchar por una indemnización a través de conflictos[67].

3.11 Aun en los casos en que se provee, a menudo la infraestructura carece de pertinencia cultural, lo que puede tener como consecuencia que la nueva

infraestructura no se use o incluso se abandone. Hablando de suministro de agua, por ejemplo, para el pueblo kogi de Colombia el agua es la sangre de la tierra y está prohibido controlarla o manipularla innecesariamente. Como los kogis cuentan con abundantes recursos hídricos, la solución apropiada desde la óptica cultural sería construir una infraestructura mínimamente invasiva (por ejemplo, pequeños estanques) y pedir permiso al espíritu del agua para usar los recursos hídricos de esa manera. En un proyecto de electrificación, tal vez sea necesario desviar el tendido de las líneas de transmisión para que no atraviesen zonas de importancia espiritual para pueblos indígenas. Existen varias barreras para el suministro de infraestructura culturalmente sensible, a saber: (i) la entropía, impulsada por la oferta, de programas de gasto públicos que tienen el propósito de mejorar el nivel de vida de los pueblos indígenas; (ii) la estandarización de los planes maestros para obras de infraestructura a fin de facilitar los procesos de adquisiciones, sin considerar las especificidades ecológicas, logísticas y culturales de los beneficiarios; y (iii) la falta de análisis de las partes interesadas, lo que reduce la capacidad para prestar servicios de infraestructura con sensibilidad cultural y también afecta la capacidad para mantener la infraestructura a largo plazo.

C. Las tierras y la cultura indígenas y afrodescendientes están amenazadas

3.12 Los pueblos indígenas figuran entre los grupos más vulnerables al cambio climático a causa de los altos niveles de pobreza, marginación histórica y estado permanente de tensión social (Kronik y Verner, 2010; Banco Mundial 2010 y 2013). Los pueblos indígenas a menudo se asientan en zonas rurales con bajos niveles de acceso a servicios públicos, lo que merma su capacidad de adaptarse al cambio climático (Damman, 2007; Appendini y Torres, 2008). Por último, los pueblos indígenas son muy dependientes de la cantidad y la calidad de los recursos naturales disponibles en su territorio, lo que significa que el efecto del cambio climático en los recursos naturales tiene en ellos un impacto directo e inmediato (Posey, 1999; Verschuuren, 2006; Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Daniel et al., 2011). Hay tres regiones en América Latina que se consideran zonas críticas en relación con el cambio climático (IPCC, 2009) y albergan la mayor concentración de pueblos indígenas y afrodescendientes: (i) América Central y las naciones costeras de América del Sur que dan al Caribe, (ii) los Andes tropicales y (iii) la cuenca del Amazonas. Los países de América Central y el Caribe son particularmente vulnerables a los huracanes y las inundaciones, los Andes a la escasez de agua y el Amazonas a la potencial transformación de su ecosistema. La población indígena en estas tres regiones ronda los 31 millones (Verner, 2010; Davidson et al., 2012).

3.13 Los afrodescendientes enfrentan una situación similar de vulnerabilidad. Los criollos, los garífunas caribeños y los quilombolas habitan tierras sumamente vulnerables al cambio climático (Kronik y Verner, 2010). También hay otros grupos afrodescendientes amenazados en la región. La población afrodescendiente del departamento colombiano de Chocó, por ejemplo, depende en alto grado de recursos naturales amenazados por el cambio climático

(Afroamérica XXI, 2008), y los afrodescendientes en los Yungas, Bolivia, están padeciendo lluvias irregulares, intenso granizo y severos episodios de sequía (Kronik y Verner, 2010).

3.14 Más allá del cambio climático, hay un lazo inextricable entre la biodiversidad y los pueblos indígenas. En Mesoamérica, la cuenca del Amazonas y los Andes tropicales hay una estrecha correlación entre los altos niveles de biodiversidad y la presencia de pueblos indígenas (Gorenflo et al., 2012). En México, por ejemplo, los ejidos y las comunidades indígenas controlan más del 70% de los bosques del país (Rosa et al., 2003; FMAM, 2012). En la cuenca del Amazonas, los pueblos indígenas habitan el 25,3% del total de zonas de tierra firme (van Dam, 2011). De acuerdo con un estudio, 214 de las 801 zonas protegidas en América del Sur se traslapan en cierta medida con territorios de los pueblos indígenas (Cisneros y McBreen, 2010). En toda la región de América Latina y el Caribe, el 24,6% de los bosques pertenece a comunidades indígenas, que son titulares de los derechos de usufructo de un 7,3% adicional (van Dam 2011; ONU-REDD 2012).

3.15 La tasa de deforestación anual en América Latina y el Caribe es de 0,45%, una de las más rápidas del planeta y superada sólo por la de África; en los últimos 20 años se ha perdido aproximadamente el 7,85% de la biomasa forestal (Sanhueza y Antonissen, 2014), lo que constituye una grave amenaza para la biodiversidad de la región. Hay amplios datos que demuestran que las tasas de deforestación son considerablemente menores en las tierras controladas por pueblos indígenas (Stevens et al., 2014). En Brasil, por ejemplo, durante el periodo 2000-2012 la pérdida de bosques en tierras indígenas fue de sólo un 0,6% acumulado, mientras que en los demás sitios fue del 7% (Hansen, 2013). Queda claro que las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas son compatibles con la conservación de la biodiversidad.

3.16 Una de las mayores amenazas para la supervivencia de las culturas indígenas es la pérdida de la lengua[68]. En la época de la conquista española, se estima que en el Amazonas se hablaban 1.175 lenguas (Krauss, 1992). Sin embargo, de las 521 lenguas que se conocían en América del Sur en 1950, el 48% ya ha desaparecido o ha dejado de enseñarse a los niños (Simons y Lewis, 2013). De acuerdo con datos de la CEPAL (2014) para seis países de la región, sólo en dos de ellos el 50% de los niños y adolescentes indígenas hablan su lengua indígena (véase el Gráfico A.6 del Anexo). Se están produciendo dos tipos de pérdida de lengua en América Latina y el Caribe. El primero es la extinción, que es un problema para las lenguas con un número relativamente reducido de hablantes, normalmente en el Amazonas o en otras zonas aisladas de la región, y se vincula con la desaparición de los pueblos indígenas o su desplazamiento e integración en otras poblaciones. El segundo tipo de pérdida de lengua afecta a grupos indígenas mucho mayores (náhuatl, maya, aymara, quechua y mapuche) y se refleja en un porcentaje decreciente de individuos que hablan la lengua indígena, a menudo como resultado de la urbanización. A largo plazo, estas lenguas también pueden verse amenazadas[69].

3.17 Otra amenaza para la supervivencia de las culturas indígenas es la falta de aprecio que siente por ellas la sociedad "dominante", que puede estar motivada por una falta de tolerancia a la diversidad o franca hostilidad y discriminación hacia los pueblos indígenas. Esto es muy difícil de medir, pero una aproximación razonable puede ser una encuesta de Latinobarómetro de 2011 en la que se pregunta "¿Cuántos de esos 100 [compatriotas] cree usted que son discriminados por su raza?". Las cifras más elevadas se obtuvieron en Guatemala, Brasil, Bolivia y México (con 51, 46, 43 y 43, respectivamente); estos países son algunos de los que tienen porcentajes más altos de poblaciones indígenas y afrodescendientes.

D. Altas tasas de mortalidad materna, embarazo adolescente y violencia contra la mujer

3.18 Más arriba se presentaron las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil que afectan a los pueblos indígenas. En conjunto, la región de América Latina y el Caribe ha registrado el avance más lento de todas las regiones del mundo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad materna. El avance en el Caribe es especialmente lento, con una reducción del 36,7%, mientras que en América Latina fue del 40,8% (véase el Gráfico A.1 del Anexo para datos comparativos sobre el avance de las regiones del mundo hacia la consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la mortalidad materna). Las mujeres pobres, indígenas y afrodescendientes con bajos niveles de instrucción y que viven en zonas rurales siguen sufriendo desproporcionadamente problemas de salud sexual y reproductiva interrelacionados como embarazos no planificados a causa de la necesidad no atendida de métodos de anticoncepción, mortalidad materna y complicaciones derivadas del embarazo, así como abortos en condiciones de riesgo (CEPAL 2010; Edwards, 2010). La región registra las tasas más altas de abortos en condiciones de riesgo (31 de cada 100 mujeres de 15 a 44 años de edad) en el mundo, lo que representa, junto con la necesidad no atendida de servicios de planificación familiar y acceso a atención obstétrica calificada, uno de los principales factores determinantes de la mortalidad materna (OMS, 2008; Zamberlin et al., 2012; Sedgh G. et al., 2012; Ahman y Shah, 2008).

3.19 América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente en el mundo (sólo a la zaga del África subsahariana), con 69 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años de edad en 2012, y la tasa de reducción del embarazo adolescente es la segunda más lenta de todas las regiones del mundo. Dentro de la misma región, los países con tasas más altas de embarazo adolescente son Nicaragua (101), República Dominicana (100) y Guatemala (97) (véase el Gráfico A.2 del Anexo). Irónicamente, la mayoría de los adolescentes de la región tienen conocimiento de los métodos modernos de control de la natalidad, pero no los usan de manera constante, pues aunque casi el 90% de los adolescentes saben esto, casi cuatro de cada diez adolescentes mujeres que están comprometidas en una relación y no desean embarazarse no usan métodos anticonceptivos (Guttmacher Institute, 2010). En todos los países sobre los que hay datos desglosados por etnia, las indígenas adolescentes registran las

tasas más altas de embarazo adolescente. En Panamá, Brasil y Costa Rica, la tasa duplica con creces la tasa de adolecentes mujeres no indígenas (CEPAL, 2014).

3.20 La violencia contra la mujer adopta diversas formas, que van desde la violencia de pareja, el tipo de violencia contra la mujer más común y estudiado más ampliamente, a la violencia sexual ejercida por personas que no son la pareja y el feminicidio (definido más a menudo como el asesinato intencional de una mujer por su género). Los datos comparables entre países sobre violencia de pareja estuvieron disponibles apenas muy recientemente. En América Latina y el Caribe, las tasas de prevalencia durante toda la vida para la violencia de pareja oscilan entre el 17% en la República Dominicana y el 53% en Bolivia (Bott et al., 2012). Las tasas de violencia de pareja en los últimos 12 meses van del 7,7% en Jamaica y El Salvador al 25,5% en Bolivia (véase el Gráfico A.3 del Anexo). En los países sobre los que hay datos desglosados por etnia, no hay una tendencia común en el sentido de que las mujeres indígenas tengan más o menos probabilidades de ser victimizadas (CEPAL, 2014). Resultados preliminares en una encuesta en Perú muestran una tendencia similar para mujeres afrodescendientes (BID, 2014).

3.21 Las tasas de victimización por violencia sexual de personas que no son pareja y por feminicidio varían radicalmente entre los países de la región. Haití y la República Dominicana registran las tasas más altas de violencia sexual, con el 16,4% y el 6,7% de mujeres entre 15 y 49 años de edad que han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida (véase el Gráfico A.4 del Anexo). Las tasas de feminicidio, expresadas como el número de muertes por cada 100.000 habitantes, varía notablemente entre los países de América Latina y el Caribe. Para 11 países con datos comparables, las tasas van de 0,19 en Chile a 1,25 en Colombia (véase el Gráfico A. 5 del Anexo). Por desgracia, estos datos no incluyen a varios países de América Central con tasas muy altas de feminicidio[70].

E. Avance, pero brechas considerables de participación y remuneración en los mercados laborales por género, raza y etnia

1. Participación en la fuerza laboral

3.22 Las mujeres han logrado un avance considerable en reducir las brechas en la participación y la remuneración que existen en América Latina y el Caribe, tanto para empleadas asalariadas como para empresarias. Se trata de la única región que ha registrado un crecimiento sostenido de la participación femenina en la fuerza laboral para mujeres mayores de 15 años en las últimas dos décadas, al pasar del 40,6% en 1990 al 53,8% en 2012. En ese mismo periodo, el promedio mundial ha bajado el 1,6%. Con una expansión de 13 puntos porcentuales, puede decirse que América Latina y el Caribe es la excepción a la tendencia mundial (WDI, 2014).

3.23 A pesar de este importante avance, la brecha de participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres sigue siendo superior a 26 puntos porcentuales en la región, una de las mayores brechas absolutas en el mundo. Sólo las regiones de Medio Oriente, África septentrional y Asia meridional tienen brechas absolutas

más grandes. Las tasa de participación femenina en la fuerza laboral son notablemente heterogéneas en la región: mientras que Chile y México figuran entre los países con tasas más bajas con el 49% y el 45%, respectivamente, Perú y Bolivia tienen tasas del 68% y el 64%, respectivamente. Dentro de los países se observan importantes diferencias en la participación por raza y etnia. Según datos de 10 países, las mujeres afrodescendientes presentan la tasa más baja (44%), las mujeres indígenas la más alta (51%) y las mujeres blancas una intermedia (46%). En vista de que la participación masculina asciende al 80%, las mujeres todavía tienen un espacio considerable para ejercer un papel de mayor alcance en el mercado de trabajo en todos los países de la región (WDI, 2014). Normalmente, las tasas bajas de participación femenina en la fuerza laboral se deben a una combinación de factores culturales y relacionados con políticas. Las diferencias de género en los resultados en la fuerza laboral en cierta medida reflejan diferencias en las preferencias, pero también queda claro que las mujeres tienen distintas oportunidades económicas y enfrentan distintos obstáculos que los hombres. Uno de estos obstáculos es que el acceso a ingresos y recursos mediante la participación en la fuerza laboral es sólo una parte de la solución; las mujeres también deben ejercer el control sobre esos recursos.

3.24 En lo que respecta a la oferta, uno de los principales obstáculos que siguen enfrentando las mujeres en el mercado de trabajo es la expectativa cultural de que las mujeres son las principales cuidadoras de los niños y los padres de edad avanzada. De acuerdo con datos de la Encuesta Mundial de Valores en la región, esta percepción ha cambiado muy poco a lo largo del tiempo. La experiencia laboral es un componente valioso del capital humano y las diferencias por razón de género en esa experiencia pueden reducir la capacidad de las mujeres para percibir ingresos y desalentar la actividad laboral. Los datos comparables sobre la experiencia laboral real son limitados, pero la información disponible mediante los datos de diferentes países en las Encuestas de Empresas apunta a una clara brecha de género en cuanto a los años de experiencia entre los gerentes en América Latina y el Caribe (Amin y Kushnir, 2012).

3.25 En lo que respecta a la demanda, hay algunos indicios de que los empleadores tienen preferencias de contratación basadas en el género. La encuesta de opinión pública Latinobarómetro revela que el 28% de los latinoamericanos piensa que "entre iguales calificaciones o títulos es menos probable que una mujer comparada con un hombre sea promovida o aceptada en un trabajo". Chile y Brasil son los países donde se perciben los mayores niveles de discriminación por género, con el 57% y el 43%, respectivamente, mientras que Venezuela y Honduras registran los menores niveles, con ambos países con el 17%. Los datos empíricos y la investigación académica sobre discriminación por razón de género en el empleo son escasos y apenas recientemente se han elaborado estudios con diseños experimentales. Según un estudio de auditoría experimental en Perú (Galarza y Yamada, 2012), los varones reciben 20% más llamadas que las mujeres para presentarse a entrevistas de trabajo, pero un estudio similar en Chile (Bravo et al., 2008) no muestra diferencias estadísticamente significativas por género, antecedentes socioeconómicos o lugar de residencia. En México, las

mujeres reciben 40% más llamadas para entrevista que los hombres (Arceo-Gomez y Campos-Vazquez, 2014).

2. Calidad de los empleos

3.26 Un indicador importante para medir la calidad de los empleos son los ingresos por hora. Según esta medición, la brecha entre trabajadores "étnicos" (es decir, indígenas o afrodescendientes) y no étnicos es del 40% para los siete países que tienen datos de hogares desglosados por raza y etnia[71]. Después de efectuar un control de la edad y el nivel de instrucción, la brecha sigue siendo del 28%. Para esos mismos siete países, la brecha salarial entre hombres y mujeres después de un control de la edad y el nivel de instrucción fue del 15,7%. La brecha salarial es mayor entre aquellos con un mayor nivel de instrucción, ya que las mujeres sólo tienen el 33% de los empleos en las 10 ocupaciones mejor remuneradas en la región de acuerdo con las encuestas de hogares. En estas profesiones con remuneraciones más elevadas, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 58% en promedio (Ñopo, 2012). En el otro lado del espectro salarial, una mayor proporción de trabajadoras percibe salarios inferiores al salario mínimo que los hombres en todos los países de la región excepto Guatemala. En Bolivia esta brecha de género alcanza el 20% y en Perú el 15% (Ñopo, 2012). En Barbados y Jamaica, respectivamente, las mujeres ganan el 25% y el 12% menos que los hombres después de un control de las diferencias en el nivel de instrucción (Bellony et al., 2010). En Brasil, haciendo un control de los años de instrucción, hay brechas salariales considerables por género y raza, con las mujeres afrodescendientes e indígenas en las posiciones de mayor vulnerabilidad. Las mujeres negras con el nivel de instrucción más bajo (menos de tres años de educación) perciben los salarios más bajos en esta cohorte de instrucción con ingresos mensuales promedio cercanos al umbral de pobreza. Poco después de las mujeres negras vienen las mujeres indígenas, que ganan el equivalente a 1,15 veces el umbral de pobreza, en tanto que las mujeres blancas ganan el equivalente a 1,4 veces el umbral de pobreza, los hombres indígenas el equivalente a 1,5 el umbral de pobreza, los hombres afrodescendientes el equivalente a 1,8 veces el umbral de pobreza y los hombres blancos el equivalente a 2,5 veces el umbral de pobreza, más del doble de los ingresos de las mujeres negras con el mismo nivel de instrucción (CEPAL, 2009).

3.27 La región exhibe altos niveles de segregación ocupacional por género. A semejanza de lo que ocurre con la brecha salarial, se ha registrado una leve mejora en la última década, aunque a un ritmo muy lento. El Índice de Duncan para la región pasó de 0,374 en 2000 a 0,366 en 2010 (CEPAL et al., 2013)[72]. La concentración de mujeres con un nivel de instrucción superior a la secundaria en ciertas ocupaciones y sectores con salarios promedio relativamente bajos se relaciona con la segregación educativa. Las mujeres, por ejemplo, representan el 73% de los egresados en pedagogía y el 71% de los egresados en salud, pero sólo el 29% de los egresados en ingeniería y manufactura (Ñopo, 2012).

3. Capacidad de emprendimiento de las mujeres

3.28 América Latina y el Caribe como región presenta mayores tasas de mujeres emprendedoras y menores diferencias de participación entre hombres y mujeres que otras regiones (Banco Mundial, 2010). Sin embargo, la gran mayoría de negocios dirigidos por mujeres en la región no consiguen crecer más allá de microempresas ni dejar atrás la economía informal, lo que reduce su potencial de generar ingresos. Apenas en el 22% de las PYME formales el 51% o más del capital está en manos de mujeres y sólo en el 21% de los casos una mujer ocupa el máximo cargo directivo (directora general o directora de operaciones). Las encuestas de empresas muestran que las empresas propiedad de mujeres tienen entre el 9% y el 36% menos empleados que las empresas propiedad de hombres, incluso en el nivel micro. Sólo la mitad de los negocios de mujeres establecidos en la región crean empleos para otros, en comparación con el 62% en el caso de los hombres (Amorós y Bosma, 2014).

3.29 Las micro y pequeñas empresas propiedad de mujeres son menos productivas que las que están en manos de hombres. El valor agregado por trabajador es inferior en las empresas administradas por mujeres que en las administradas por hombres en zonas urbanas de todo el mundo, pero esa brecha es la más grande en América Latina y el Caribe[73]. Parte de esta diferencia se debe a la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores de baja productividad (Sabarwal et al., 2009). Las mujeres empresarias capaces de superar estas barreras para el crecimiento de los negocios logran competir como propietarias de empresas medianas a grandes; los datos indican que las empresas medianas y grandes propiedad de mujeres son tan productivas como aquellas propiedad de hombres (o incluso más) (Banco Mundial, 2010). En el Cuadro III.-1 se resumen de manera concisa los desafíos que enfrentan las mujeres empresarias en la región y los desafíos para quienes les prestan servicios.

Cuadro III-1. Desafíos para los negocios encabezados por mujeres en América Latina y el Caribe

	Desafíos para las mujeres empresarias y sus negocios	Desafíos para la prestación de servicios a mujeres empresarias y sus negocios
Capital financiero	Menores niveles de cultura financiera e información sobre productos financieros que los hombres.	Productos y servicios financieros y mecanismo de prestación no adaptados a las necesidades de las mujeres.
	Las mujeres empresarias se sienten menos preparadas que los hombres empresarios para manejar procedimientos complejos.	Sesgos de género en las instituciones financieras, incluidas prácticas como solicitar que los avales sean hombres.
		Debilidades en la infraestructura financiera como servicios de información crediticia con información limitada en relación con mujeres o marcos de garantías que no permiten activos mobiliarios.
Capital humano y social	Menos experiencia y habilidades en los negocios.	Servicios de desarrollo empresarial y mecanismo de prestación no adaptados a las necesidades de las mujeres.
		Falta de capacitación de calidad y cursos pertinentes.
	Menor acceso a redes empresariales locales, nacionales e internacionales adecuadas.	Normas y tradiciones de género en las redes de negocios informales y formales.
	Menor acceso a mentores formales e informales adecuados.	Insuficiencia de servicios de desarrollo empresarial o programas de fortalecimiento de la capacidad con componentes de mentoría.
	Menos mujeres matriculadas en educación superior en sectores de alta productividad como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.	
Capital físico	Menor posesión de tierras y propiedades.	Leyes, reglamentos y normas sesgadas en contra de que las mujeres sean dueñas o herederas de propiedades.
Capacidad de las mujeres para decidir (agencia)	Menores niveles de autoestima que los hombres empresarios.	
	Restricciones de tiempo y movilidad a causa de sus obligaciones domésticas.	Prestación inadecuada de servicios de guardería de calidad y transporte público seguro, y leyes y reglamentos inadecuados sobre licencias de maternidad y paternidad.
	Altos niveles de violencia contra la mujer.	Programas inadecuados de prevención y atención de violencia contra la mujer.
	Normas y cultura de género, lo que limita la mujer en sus decisiones y planes económicos.	

Fuentes: Amorós y Bosma, 2014; Brass, 1984; Dreher y Cox, 2000; Burke et al., 1995; Buvinic et al., 2013; Forret y Daugherty, 2004; O'Neill y Blake-Beard, 2002; Pailhé, 2014; Banco Mundial, 2012a; Banco Mundial, 2013b; Xavier et al., 2013.

F. Voz y agencia limitadas para las mujeres y los pueblos indígenas

1. Consultas y gobernanza indígenas

3.30 Hay tres aspectos de particular importancia para los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe. El primero es el respeto a los derechos de una consulta y un consentimiento previo libre e informado, como se estipula en la Política sobre Pueblos Indígenas del Banco. El segundo es la autonomía de los territorios indígenas y de afrodescendientes que gozan de reconocimiento nacional. El tercero es la capacidad de las instituciones

gubernamentales responsables de apoyar a los pueblos indígenas y de formular la política pública en la materia (véase el párrafo 4.14 para un análisis sobre capacidad institucional).

3.31 Catorce países latinoamericanos han firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando se prevean "medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente" y se estipula que estas consultas se deben efectuar a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas "con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas". Todos los países de América Latina y el Caribe han suscrito la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que compromete a los signatarios a un nivel más elevado de consentimiento libre, previo e informado. No obstante, el avance en el cumplimiento de estos compromisos en la región, con excepción de Colombia, parece ser escaso. Es difícil encontrar datos comparables, pero se estima que Colombia ha llevado a cabo más de 4.000 consultas entre 2003 y 2014[74], Bolivia más de 30 en el sector de petróleo y gas, y Perú cuatro consultas (con 16 más en curso). México ha realizado consultas estatales, mientras que Ecuador, Guatemala, Venezuela, Argentina y Costa Rica también han organizado consultas, pero se desconoce su número.

3.32 En las últimas tres décadas, ha habido un proceso de devolución de tierras tradicionales a los pueblos indígenas y afrodescendientes en la mayor parte de la América Latina y el Caribe[75]. En otros casos, como en Guyana, las leyes y políticas en vigor se han actualizado o fortalecido a fin ofrecer una mayor protección a los derechos de los pueblos indígenas y otorgar reconocimiento legal a las tierras comunales. Tres factores han impulsado esta devolución: (i) la lucha y las protestas de los pueblos indígenas; (ii) las nuevas legislaciones nacionales y los convenios internacionales que apoyan la devolución; y (iii) la importancia creciente de los temas ambientales (van Dam, 2011).

3.33 Desde 1991 varios países han incorporado en sus constituciones artículos que otorgan reconocimiento a los territorios indígenas como unidades político-administrativas (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela), pero éstas no se han establecido. Otro punto débil de la autonomía de los indígenas y los afrodescendientes en varios países es que se ha asignado a sus territorios importantes responsabilidades gubernamentales, pero sin los correspondientes recursos presupuestarios para cumplirlas. En general, la escala o el tamaño de estas nuevas zonas territoriales plantea nuevos desafíos para la gestión o la gobernanza en los que las comunidades carecen de experiencia y para los que los modelos de "gobernanza comunitaria" existentes han dejado de ser adecuados (van Dam, 2011).

2. Voz y agencia de las mujeres

3.34 La presencia de las mujeres en posiciones en las que se toman decisiones ha aumentado de manera considerable en las últimas dos décadas en América Latina y el Caribe. En toda la región, la proporción de mujeres pasó del 11,9% del total de parlamentarios en 1990 al 25,9% en 2014[76]. Este aumento del 118% supera el aumento del 75% para el conjunto de regiones en desarrollo[77]. No obstante, las mujeres siguen teniendo una representación considerablemente insuficiente en todos los niveles de gobierno. En promedio, son mujeres sólo el 9% de los alcaldes, el 22% de los miembros de los ayuntamientos, el 23% de los ministros y el 33% de los jueces en los tribunales superiores[78]. Si bien las mujeres en su conjunto están lejos de tener una representación política paritaria, las mujeres indígenas y afrodescendientes están aún más lejos de ello. Por ejemplo, en 2011 en Colombia, los afrodescendientes componían apenas el 4% de la Cámara de Diputados y el 2% del Senado, sin que hubiera entre ellos una mujer, a pesar de que los afrodescendientes constituyen aproximadamente el 10,5% de la población colombiana. En Brasil, los diputados federales negros elegidos en 2010 representaban el 9% del total (en comparación con el 50,7% de la población) y sólo el 1% del total de diputados eran mujeres (Htun, 2012). Por más de un lustro la presencia de mujeres en los gabinetes ministeriales se ha mantenido en alrededor del 23%, con una participación creciente pero todavía reducida en sectores no tradicionales como defensa, relaciones exteriores, asuntos del interior, justicia, infraestructura, finanzas y sectores productivos (Luna et al., 2008).

3.35 A nivel comunitario, las mujeres tienen potencial para desempeñar un importante papel demandando capacidad de respuesta y rendición de cuentas de los gobiernos en proyectos muy diversos, que van desde las transferencias condicionadas de efectivo hasta los proyectos de infraestructura. No obstante, la participación de la mujer en los mecanismos de supervisión ciudadana (las veedurías) puede verse restringida por la falta de tiempo, las preocupaciones relativas a la seguridad y, en el caso de mujeres de zonas rurales, el analfabetismo (UNIFEM, 2009).

3.36 Por último, la representación femenina en la gobernanza en empresas privadas de la región es considerablemente escasa. Entre el 1% y el 3% de los presidentes o directores ejecutivos de las mayores empresas de la región son mujeres (Pages y Piras, 2010). De acuerdo con un estudio de 345 empresas de seis países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), las mujeres ocupan el 8% de los cargos en los comités ejecutivos y el 5% de los cargos en los consejos de administración (McKinsey, 2013); se trata de porcentajes similares a los prevalecientes en Asia, pero notablemente inferiores a los de los Estados Unidos y Europa. El 44% de los ejecutivos entrevistados como parte del estudio identificaron el "síndrome de la doble jornada"[79] como la principal barrera para aumentar la diversidad de género en puestos gerenciales. Los resultados de un estudio reciente en Brasil apuntan a brechas similares en el aspecto etnorracial, pues apenas el 5,3% de los ejecutivos de la 500 empresas más grandes de la nación son afrodescendientes. La situación es aún más tajante para las mujeres

afrodescendientes, que sólo ocupan el 0,5% de los puestos ejecutivos en estas empresas (Instituto Ethos, 2010).

IV. LECCIONES DE LA EXPERIENCIA DEL BANCO EN ESTE SECTOR

4.1 Mediante operaciones de cooperación técnica y préstamos, el Banco ha acumulado una experiencia importante sobre intervenciones para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. En esta sección del Documento de Marco Sectorial se exponen algunas de estas lecciones apoyándose en los informes elaborados por la oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) y las matrices de efectividad en el desarrollo de los proyectos. A partir de estas lecciones, la sección concluye con un esbozo de los ámbitos en los que el BID posee una ventaja comparativa en la promoción de la igualdad de género y el desarrollo con identidad. Dado que muchas de las operaciones más prometedoras que se identifican siguen en curso, los informes de terminación de proyecto no son un tema central de esta sección.

A. Informes de OVE

4.2 Los informes de OVE (2012 y 2013) aportan valiosas observaciones sobre el trabajo del Banco en género y diversidad. En un informe sobre la aplicación de salvaguardias (OVE, 2013) también se evaluaba el avance sobre la implementación del Plan de Acción de Género, que se elaboró a fin de dar un carácter operativo a la Política de Género del Banco y se concluía que el Plan de Acción de Género "ha comenzado bien, con más avances en el aspecto proactivo [transversalidad e inversión directa] que en el preventivo [salvaguardias]"[80]. En el informe se señala que se han preparado notas sectoriales y de política de género para varios países, pero que la "medida en que estos informes han influenciado el diálogo con el país y la estrategia de país es variada". Asimismo, se destaca un avance considerable en cuanto a aumentar el porcentaje de los préstamos del Banco con garantía soberana que incluyen indicadores relativos al género en su matriz de resultados, aunque también se menciona que la calidad de estos indicadores es muy variable entre los proyectos[81]. Además, se observa en el informe de OVE que "las restricciones en cuanto a personal limitan el avance en este aspecto de las salvaguardias"[82].

4.3 En la revisión de la cartera relacionada con temas indígenas (OVE, 2012) se analiza el enfoque estratégico del Banco y las acciones operativas en cuanto a (i) la pertinencia con respecto a las principales necesidades de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, y (ii) la aplicabilidad en relación con los procesos estratégicos y operativos del Banco. Las principales conclusiones del informe fueron que (i) los temas indígenas tenían una menor prevalencia en las Estrategias de País a partir de 2006 [año en el que se aprobó la Política sobre Pueblos Indígenas]; (ii) el instrumento más utilizado para abordar los temas indígenas es la cooperación técnica (no el financiamiento no reembolsable), seguido por las operaciones de préstamo; (iii) hay datos limitados sobre un enfoque transversal para la integración de temas indígenas en las operaciones del Banco; (iv) el número de

préstamos con un enfoque proactivo para la incorporación de los pueblos indígenas se redujo después de la aprobación de la Estrategia para el Desarrollo Indígena; (v) el nivel de evaluabilidad de las operaciones relacionadas con temas indígenas es bajo; y (vi) el periodo de análisis estuvo marcado por importantes cambios institucionales en la unidad a cargo de temas indígenas en el Banco.

B. Resultados de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo

4.4 En esta sección se presenta información sobre los puntajes de evaluabilidad de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo para dos tipos de operaciones con garantía soberana: (i) inversión directa (es decir, préstamos y financiamiento no reembolsable para inversión cuyo objetivo principal sea promover la igualdad de género o el desarrollo con identidad) y (ii) préstamos con componentes de género o atención considerable al tema de género[83, 84].

4.5 Los proyectos de préstamo y de financiamiento no reembolsable para inversión que invierten directamente en igualdad de género tienen puntajes en la Matriz de Efectividad en el Desarrollo que indican una alta evaluabilidad (con un promedio de 9,1 de un máximo de 10 puntos en el periodo 2011-2103), seguido de cerca por proyectos que prestan considerable atención al tema de género (con un promedio de 8,8).

Cuadro IV-1. Puntajes en la Matriz de Efectividad en el Desarrollo para proyectos de inversión directa y proyectos adicionales en materia de género

Operaciones que invierten directamente en igualdad de género	**División**	**2011**	**2012**	**2013**
Ciudad Mujer	SCL/GDI	9,3		
Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil	SCL/SPH		9,3	
Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	SCL/GDI		7,6	
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - Guatemala	SCL/SPH	9,2		
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - Panamá	SCL/SPH	9,5		
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - Belize	SCL/SPH	9,3		
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - El Salvador	SCL/SPH	9,1		
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - Nicaragua	SCL/SPH	8,8		
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - México	SCL/SPH		9,5	
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - Honduras	SCL/SPH		9,4	
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - Costa Rica	SCL/SPH		9,2	
Puntajes promedio en la Matriz de Efectividad en el Desarrollo (resumen)				
Puntaje promedio en la Matriz de Efectividad en el Desarrollo para proyectos que invierten directamente en igualdad de género (proyectos antes mencionados)		**9,2**	**9,0**	
Puntaje promedio en la Matriz de Efectividad en el Desarrollo para proyectos que prestan una atención considerable a la igualdad de género (44 proyectos en el periodo 2011-2013)		**8,7**	**8,8**	**8,8**
Puntaje promedio en la Matriz de Efectividad en el Desarrollo para proyectos del BID aprobados en el periodo 2011-2013		**8,2**	**8,7**	**8,7**

4.6 Desde 2012 las ventanillas de efectividad en el desarrollo del Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF), el Sector de Oportunidades para la Mayoría (OMJ) y la Oficina del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) han logrado un notable avance en la integración del tema de género en sus respectivos sistemas y procesos de seguimiento y revisión de calidad de los proyectos para operaciones sin garantía soberana. Las tres ventanillas exigen el desglose por sexo de los indicadores a nivel de beneficiarios (en 2013, el 85% de los préstamos sin garantía soberana con beneficiarios directos desglosaron los indicadores por sexo) durante la fase de diseño y en sus respectivos sistemas de seguimiento de proyecto (los informes de supervisión de proyecto para SCF y el FOMIN, y los indicadores de Normas sobre Información e Inversiones de Impacto [IRIS] para OMJ). El instrumento Calidad para la Efectividad en el Desarrollo del FOMIN incluye una revisión de la calidad de la integración transversal de la perspectiva de género en el diagnóstico del problema, la evaluación de los beneficiarios, las actividades del proyecto, y el seguimiento y evaluación. Además, con miras a mejorar la coordinación entre las ventanillas de la Vicepresidencia del Sector Privado y Operaciones sin Garantía Soberana (VPP) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), en 2014 se creó un Grupo de Trabajo del Sector Privado sobre Género para armonizar definiciones, mejorar el registro de indicadores desglosados por sexo (en particular PYME encabezadas por mujeres), y diseñar y estandarizar componentes de género dentro de los diferentes instrumentos de efectividad en el desarrollo del sector privado (por ejemplo, la Matriz de Efectividad en el Desarrollo, la Calidad para la Efectividad en el Desarrollo y el sistema de medición del aporte al desarrollo y la adicionalidad [DIAS]).

C. Lecciones de la experiencia operativa

4.7 **Avances en la integración transversal de la perspectiva de género en las operaciones**. Como se señala en la revisión de OVE antes mencionada, el BID ha avanzado de manera considerable en la integración transversal de la perspectiva de género en las operaciones, con una mejora en el desempeño en este sentido del 8%, que es el valor de referencia correspondiente al periodo 2007-2010, al 37% en 2013. Este avance se confirmó también en una evaluación externa de los primeros tres años de la Política de Género del BID (2011-2013). Los principales factores que han contribuido a este avance han sido (i) el apoyo decisivo de la Alta Administración; (ii) la asignación de recursos administrativos adicionales, en su mayoría utilizados para incluir a consultores de género expertos en las decisiones operativas; (iii) la elaboración y divulgación de notas con recomendaciones sectoriales sobre oportunidades para fomentar la igualdad de género; (iv) la capacitación del personal del BID; (v) las metas divisionales para la integración transversal de la perspectiva de género, combinadas con una meta general para todo el Banco; y (vi) la inclusión del apoyo a la igualdad de género en las revisiones de desempeño del personal[85]. Estos factores han contribuido a una inclusión más eficaz de la igualdad de género en el diseño de los proyectos del Banco, pero es esencial que estos elementos de diseño se apliquen también en la ejecución del proyecto. Los jefes de equipo identificaron la importancia de los

consultores especializados en los organismos ejecutores para traducir el diseño específico de género en una ejecución de proyecto eficaz, así como un cuidadoso seguimiento de los indicadores relacionados con el género. Las evaluaciones y los indicadores de los proyectos deben trascender el desglose de los datos y medir los resultados e impactos relacionados con el tema de género. Las lecciones aprendidas con la integración transversal de la perspectiva de género pueden servir como un buen ejemplo para la integración transversal de la perspectiva de diversidad.

4.8 **Servicios integrados para el empoderamiento de la mujer**. Ciudad Mujer, iniciativa implementada por el Gobierno de El Salvador con el apoyo técnico y financiero del Banco, ocupa un lugar destacado como operación clave en cuanto a visibilidad y ejecución exitosa. Se han aprendido varias lecciones importantes en el diseño y la implementación de este proyecto en El Salvador y otros lugares, entre ellas, (i) que este modelo es más adecuado para zonas urbanas con una densidad de población suficiente para justificar la variedad de servicios prestados y minimizar los tiempos de transporte para que las mujeres lleguen al centro; y (ii) que un promotor de alto nivel es esencial a fin de generar la coordinación interinstitucional necesaria para integrar los diferentes servicios.

4.9 **Prevención de la violencia contra la mujer**. Una importante lección aprendida con la experiencia de prevención de la violencia contra la mujer es que existen múltiples accesos sectoriales para abordar el tema. En iniciativas recientes se ha abordado la violencia contra la mujer en sectores como la seguridad ciudadana, el transporte, la microempresa y los proyectos de género independientes; en una publicación conjunta reciente del BID y el Banco Mundial (BID/Banco Mundial, 2014a) se identifican aún más accesos sectoriales. Con esta expansión del trabajo se reconoce que la violencia contra la mujer adopta diversas formas, desde la violencia física hasta el acoso sexual en espacios públicos, la violación y el feminicidio (ya sea que el agresor sea o no la pareja).

4.10 **Consideraciones de género e infraestructura**. En los últimos años, el Banco se ha esforzado por mejorar el diseño de los proyectos de infraestructura a fin de incluir las necesidades y contribuciones de la mujer (como incorporar a la mujer en los consejos de recursos hídricos); velar por la seguridad de las mujeres pasajeras y mejorar sus experiencias (mediante la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de los sistemas de transporte urbano) y aumentar el acceso de la mujer a las oportunidades económicas creadas a través de proyectos (como los proyectos que incluyen metas para la mujer en microempresas de mantenimiento de caminos rurales y el fortalecimiento de la capacidad de la mujer a fin de aumentar su empleabilidad en el sector de transporte). De esta forma, los expertos del BID en el sector de infraestructura están contribuyendo al avance en un sector que hasta hace poco se consideraba un ámbito no tradicional para la integración transversal de la perspectiva de género.

4.11 **Fomento de la capacidad emprendedora de la mujer**. Aunque las mujeres tienen un acceso considerable a microcrédito (representan alrededor del 57% de

las usuarias de microcrédito en la región [Martinez et al., 2014]), enfrentan obstáculos importantes para obtener créditos más cuantiosos. El BID ha identificado los siguientes enfoques prometedores para quebrar este "techo de cristal" en el acceso al crédito: (i) presentar la justificación económica a los bancos comerciales; (ii) formular métodos de análisis de riesgo imparciales en cuanto al género como la calificación crediticia psicométrica; y (iii) adaptar estrategias de mercadeo, incluida la incorporación de las necesidades de las mujeres al desarrollo de productos y la capacitación de funcionarios de préstamos para dirigirse al mercado de las mujeres. Más allá del acceso a crédito, las mujeres empresarias necesitan acceso a una gama más amplia de productos financieros (entre ellos, cuentas de ahorro, seguros y tarjetas de crédito) y los servicios de desarrollo empresarial para ayudar a que sus negocios crezcan y se transformen en pequeñas o medianas empresas.

4.12 **Diseño de proyectos con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes**. El BID ha aprendido que el diseño de proyectos con la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes requiere más tiempo para identificar a sus autoridades tradicionales con base en el parentesco y entender sus prioridades, usos culturales de la tierra, organización social, derecho consuetudinario, historia y relaciones con el gobierno. Los equipos deben siempre obtener el consentimiento previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que participen en proyectos del Banco. Se han establecido buenas prácticas importantes, como los análisis de usos culturales del suelo y los enfoques de diseño técnico ajustados culturalmente en los ámbitos de infraestructura[86], a fin de asegurar que el diseño de los proyectos corresponde a las necesidades y preferencias culturales de estos grupos. Varios proyectos del Banco han aplicado de manera considerable estos enfoques de diseño.

4.13 **Cambio climático y biodiversidad**. Aunque el cambio climático y la conservación de la biodiversidad son desafíos mundiales, el trabajo con los pueblos indígenas y afrodescendientes para forjar comunidades resilientes requiere un enfoque local, tanto en el lenguaje utilizado para describir los desafíos y las respuestas como en el tipo de soluciones adecuadas para una comunidad o zona específica. Debe otorgarse reconocimiento a las prácticas sostenibles de usos culturales del suelo que las comunidades han seguido por siglos para conservar los bosques como una rica fuente de conocimiento y experiencia en el ámbito del ordenamiento sostenible del suelo. La operación de cooperación técnica de terrazas que el Banco ha llevado a cabo en Perú (zona andina) ejemplifica un enfoque de ese tipo, ya que aprovecha el conocimiento tradicional andino sobre irrigación y las terrazas incas que están ahí para mejorar la productividad de los pequeños propietarios en su mayoría indígenas.

4.14 **Desafíos institucionales**. Salvo algunas notables excepciones, las instituciones gubernamentales (ministerios, institutos, etc.) responsables de asuntos de la mujer e igualdad de género y de los pueblos indígenas y los afrodescendientes figuran entre los ministerios más débiles en cuanto a capacidad para formular y ejecutar políticas y programas. Los equipos de proyecto han observado que las

operaciones ejecutadas por estas entidades suelen destinar recursos de los proyectos a fortalecer a las propias entidades antes de que éstas puedan ejecutar con éxito proyectos del Banco. Esta debilidad institucional significa a menudo que estos ministerios no están bien posicionados dentro de los gobiernos para influir en el trabajo de otros ministerios o para llevar adelante proyectos financiados a través de préstamos con instituciones financieras internacionales. Como consecuencia de ello, los proyectos con estas entidades por lo general necesitarán que se destinen recursos considerables al fortalecimiento institucional.

D. Ventajas comparativas del Banco para abordar temas de género y diversidad

4.15 Históricamente, el Banco ha tenido tres focos de atención en su trabajo sobre género y diversidad: el fomento de la inclusión de la igualdad de género y el desarrollo con identidad en todas sus operaciones (transversalización); las operaciones de préstamo y cooperación técnica cuyo objetivo principal es el fomento de la igualdad de género o el desarrollo con identidad en nuestros países miembros prestatarios; y el trabajo analítico para dar más relieve a estos temas o identificar nuevos ámbitos para la labor operativa. Si bien durante algún tiempo se han mantenido estos tres focos de atención, la importancia relativa de cada uno de ellos ha cambiado en respuesta a las demandas de los clientes y las decisiones estratégicas de la administración del Banco.

4.16 En las décadas de 1990 y 2000, el Banco centró su atención mayormente en las operaciones de cooperación técnica y los productos analíticos que representaban innovaciones en las esferas sociales en la región. Como ejemplos destacados cabe mencionar la labor analítica y operativa inicial relacionada con la violencia contra la mujer a finales de los años noventa y la iniciativa Todos Contamos a mediados de la década de 2000 para promover en los institutos de estadísticas de la región una mejor medición de aspectos de raza y etnia. Con estos dos ámbitos de trabajo, el Banco se colocó a la vanguardia como primer banco de desarrollo en abordar estos temas.

4.17 Las contadas operaciones de préstamo con garantía soberana (inversión directa) en la esfera de afrodescendientes o pueblos indígenas que hubo de 1990 a 2010 tuvieron como propósito prestar apoyo a una serie de estrategias para ayudar a los afrodescendientes y los pueblos indígenas a tener acceso a estudios universitarios; diseñar un modelo de desarrollo territorial de servicios integrados a la vez que se apoyaba a las instituciones nacionales para prestar servicios sociales culturalmente adecuados; y respaldar proyectos locales de pequeña escala de desarrollo económico y fortalecimiento del capital humano para los pueblos indígenas y afrohondureños[87]. En ese mismo periodo, sólo hubo dos operaciones de préstamo para inversión directa en el ámbito de género: una para apoyar a los consejos provinciales de la mujer en Argentina y otra para capacitar a emprendedoras y empleadas en Colombia. No obstante, la ejecución de ninguno de estos dos proyectos llegó a término.

4.18 Aunque este reducido número de operaciones quizá no baste para establecer ámbitos de ventaja comparativa en el trabajo operativo, el Banco adquirió importantes conocimientos especializados en materia de consultas comunitarias, salud intercultural, educación intercultural bilingüe, planificación del ordenamiento del suelo sostenible, y capacidad de emprendimiento de los indígenas. En lo tocante a la igualdad de género, el Banco fue un pionero en el financiamiento de microempresas, que incluía a las mujeres como beneficiarias de al menos el 50% de los créditos; trabajó para verificar que las mujeres participaran en programas de capacitación juvenil, que también comprendía el apoyo de servicios de guardería para madres de niños pequeños; y agregó de manera sistemática un enfoque en la violencia contra la mujer en las operaciones de seguridad ciudadana. Se adquirieron conocimientos especializados sobre liderazgo femenino, participación en los mercados de trabajo y salud reproductiva.

4.19 En años recientes se ha registrado un aumento moderado en el número de operaciones de préstamo para inversión directa tanto en el tema de género como en el de diversidad. En el periodo 1998-2010, hubo un promedio aproximado de una operación de préstamo cada dos años, mientras que en el periodo 2011-2015 (incluidos los préstamos en preparación para 2015)[88], ha habido aproximadamente un préstamo al año. En materia de género, los préstamos se concentran en dos vertientes, a saber, la prestación de servicios integrados para la mujer y el apoyo a bancos privados para brindar un mejor servicio a las empresas propiedad de mujeres. En cuanto a la diversidad, el enfoque es una continuación del trabajo sobre explotación agrícola sostenible con pequeños propietarios indígenas, a lo que se ha sumado la actividad sobre la adaptación de los pueblos indígenas al cambio climático[89].

4.20 Esta actividad más intensa refleja tanto la demanda más elevada de los países prestatarios del BID como la capacidad de agregar un mayor valor a los proyectos mediante un enfoque temático más riguroso. En todos los ámbitos temáticos, se ha prestado especial atención a la innovación. En el sector privado, por ejemplo, el BID ha usado enfoques innovadores a fin de fortalecer las capacidades de los bancos privados para atender a empresas propiedad de mujeres. El BID ha otorgado a los bancos préstamos y asistencia técnica para formular estrategias operativas y de mercadeo a la medida para focalizarse en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) de mujeres, por ejemplo, diseñando pruebas psicométricas que prometen eliminar el sesgo contra las mujeres cuando se usan mediciones tradicionales para las garantías. En el sector público, la prestación de servicios integrados ha despertado en toda la región un gran interés en el uso de este enfoque para aumentar la calidad de los servicios que se ofrecen a la mujer en ámbitos como apoyo para sobrevivientes de violencia, salud sexual y reproductiva, y empoderamiento económico.

4.21 Como los sistemas para dar seguimiento a las inversiones en género y diversidad son muy distintos, resulta muy difícil hacer comparaciones con las actividades de otros bancos de desarrollo multilaterales. Por ejemplo, en el periodo 2011-2013 el

BID registró un mayor volumen de inversión directa en igualdad de género en América Latina y el Caribe que el Banco Mundial, pero no es fácil comparar porque el Banco Mundial no usa el mismo término para clasificar sus inversiones. El Banco Mundial asigna "temas" a sus proyectos y permite la asignación de varios temas a un solo proyecto, además de que los porcentajes asignados a los distintos temas se basan en los objetivos de los proyectos. En los ejercicios fiscales de 2011 a 2013, el Banco Mundial llevó a cabo dos proyectos de préstamo en América Latina y el Caribe (en ambos casos préstamos de asistencia técnica) en los que se asignó al tema de género una ponderación superior al 30%, por un valor total de US$4,9 millones. En esos mismos ejercicios fiscales, el BID tuvo dos proyectos de inversión directa por un total de US$95 millones. Sin embargo, el número de préstamos es reducido y la comparación imprecisa, por lo que no deben sacarse grandes conclusiones de esta comparación. Si se comparan todos los proyectos en América Latina y el Caribe a los que el Banco Mundial ha otorgado alguna ponderación en materia de género durante ese periodo, el número de proyectos se eleva a 14, con un monto total de US$2.400 millones. Como el porcentaje que el Banco Mundial normalmente asignó al tema de género fue bastante bajo, sería más adecuado utilizar como parámetro de comparación el número de préstamos del BID que incluyen al menos un resultado relacionado con el género en la matriz de resultados. Esto arroja un total de 98 préstamos del BID, por un monto total en préstamos de US$8.200 millones. Esta comparación sigue siendo imprecisa, pero nos da cierta idea sobre el tamaño de las operaciones de estas dos organizaciones (véase el Cuadro A.6 del Anexo). Las cifras iniciales de la inversión del Banco Mundial en temas de género en América Latina y el Caribe durante el ejercicio fiscal 2014 apuntan a un aumento en el gasto en estos temas, con al menos cuatro préstamos para políticas de desarrollo por un valor total superior a los US$1.500 millones, en la región. El BID no ha concedido ningún préstamo en apoyo de reformas de política con un tema de género. Las comparaciones del número de proyectos y el volumen de la inversión en materia de diversidad son aun menos precisas, de modo que no se presentan aquí[90].

4.22 El BID y el Banco Mundial no son las únicas organizaciones interesadas en mejorar la igualdad de género y promover el desarrollo con identidad en la región. Otras organizaciones interamericanas (como la Organización de los Estados Americanos [OEA] y la OPS), organizaciones internacionales (como el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU-Mujeres) y organizaciones no gubernamentales trabajan en estos temas. La violencia contra la mujer, sobre lo que las diferentes organizaciones tienen programas de trabajo con un alto grado de complementariedad, constituye la mayor coincidencia temática y el ámbito que entraña mayor potencial. Mediante el intercambio de lecciones aprendidas sobre estos temas, el apoyo a las evaluaciones de intervenciones en la región y la búsqueda de oportunidades para la colaboración operativa, el BID y otras organizaciones pueden aprovechar sus respectivas ventajas comparativas a fin de ofrecer resultados de calidad a nuestros clientes regionales.

4.23 El Banco también ha ampliado considerablemente su trabajo analítico sobre género y diversidad, concentrándose en (i) evaluaciones de impacto tendientes a

identificar buenas prácticas en materia de servicios integrados para mujeres y pueblos indígenas, prevención de la violencia contra la mujer y prevención del embarazo en adolescentes; (ii) experimentos para identificar enfoques prometedores a fin de aumentar la participación de la mujer en la fuerza laboral y la calidad de los empleos ocupados mujeres; (iii) barreras que impiden la participación de los pueblos indígenas en iniciativas relacionadas con el cambio climático como el pago por servicios de ecosistemas; y (iv) mejora de las estadísticas raciales y étnicas para la formulación de políticas, como el análisis de las brechas etnorraciales en la incidencia fiscal. Este trabajo analítico se concentra en examinar los efectos de ámbitos importantes de inversión del Banco o en identificar enfoques prometedores para futuras generaciones de apoyo del Banco para nuestros clientes.

4.24 Teniendo presente lo anterior, el Banco se propone concentrar su trabajo sobre género y diversidad en las siguientes esferas: (i) cerrar las brechas de capital humano e infraestructura que afectan a los pueblos indígenas y los afrodescendientes; (ii) proteger la cultura y las tierras indígenas mediante la gestión de usos culturales y sostenibles de la tierra, la adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de la gobernanza en territorios indígenas; (iii) promover el empoderamiento económico de la mujer, los pueblos indígenas y los afrodescendientes acrecentando la productividad de sus actividades y potenciando la participación de la mujer en la fuerza laboral y la calidad de sus empleos; (iv) prestar servicios integrados a la mujer; (v) respaldar iniciativas para prevenir la violencia contra la mujer y ofrecer servicios de calidad a mujeres sobrevivientes, así como abordar el tema del embarazo adolescente; y (vi) fomentar el liderazgo femenino en los sectores público y privado. El Banco ya cuenta con un equipo profesional con altos niveles de conocimiento y experiencia en las esferas (iii), (iv), (v) y (vi), así como pericia en algunos componentes de la esfera (ii). Será necesario el fortalecimiento y ampliación de capacidades en la esfera (i) y en cierto grado en la esfera (ii).

4.25 La especificación de estas prioridades también supone reconocer explícitamente aspectos interesantes e importantes en los que no trabajará el Banco. Entre ellos, figuran esferas que no constituyen desafíos cruciales de desarrollo para la región y en los que el Banco no posee una ventaja comparativa frente a otros agentes de desarrollo. En la primera categoría de aspectos de desarrollo no cruciales están los temas de género de "primera generación", que en gran medida han perdido pertinencia para la región, como el acceso de las mujeres a la educación (con la excepción notable del acceso de las mujeres indígenas) y la selección prenatal del sexo (preferencia por los hijos varones). Las esferas en las que el Banco tiene una ventaja comparativa reducida en comparación con otras instituciones incluyen la implementación de consultas nacionales con pueblos indígenas (en lo que la Organización Internacional del Trabajo tiene una fuerte ventaja comparativa), la elaboración y supervisión de convenios internacionales sobre derechos de las mujeres y los pueblos indígenas (en lo que la OEA tiene una fuerte ventaja comparativa) y las campañas en medios masivos sobre violencia contra la mujer (en lo que ONU-Mujeres tiene una fuerte ventaja comparativa).

V. DIMENSIONES DE ÉXITO Y LÍNEAS DE ACCIÓN

A. Objetivos y principios

5.1 Los objetivos del Banco en género y diversidad consisten en fomentar (1) la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y (2) el desarrollo con identidad entre los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

5.2 En la búsqueda de estos objetivos, el BID se guiará por los siguientes principios:

a) El concepto de "desarrollo con identidad" servirá de guía para nuestro trabajo con los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Esto significa evaluar las implicaciones para los pueblos indígenas y los afrodescendientes en todos nuestros proyectos, verificando que sean culturalmente apropiados y que el desarrollo no sea a expensas del patrimonio cultural, la equidad o la solidaridad. De manera similar, el Banco hará de las inquietudes y experiencias de mujeres y hombres una dimensión integral del diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de sus programas, de modo que mujeres y hombres se beneficien por igual y que no se perpetúe la desigualdad.

b) Nuestro trabajo sobre igualdad de género se centrará en temas de género de segunda generación fundamentales (véase la Sección II) que afectan a América Latina y el Caribe. Llevaremos adelante esa tarea conscientes de que los hombres pueden y deben ser parte de la solución. En ningún ámbito es esto más cierto que en el trabajo sobre salud sexual y reproductiva y violencia contra la mujer, aunque no deja de ser pertinente en otros ámbitos. También significa que los temas de género masculino —como la violencia de hombres contra hombres o la deserción escolar masculina, un asunto importante en toda América Latina y el Caribe, pero de particular pertinencia en el Caribe— son temas de género dignos de atención desde el punto de vista de las políticas.

c) Por último, nuestro trabajo en relación con los pueblos indígenas y los afrodescendientes debe tener en cuenta que se tienen un conocimiento relativamente escaso sobre los enfoques exitosos para fomentar el desarrollo con identidad. En los aspectos en los que se haya acumulado un conocimiento limitado sobre lo que funciona, el Banco se comprometerá con el enfoque del aprendizaje práctico e invertirá recursos en la evaluación de los impactos de sus intervenciones[91]. Será importante entablar un diálogo con los sectores interesados sobre las implicaciones de estas evaluaciones de manera que nuestros proyectos vayan ganando eficacia con el paso del tiempo. Además, la falta de datos sobre el impacto de las intervenciones en muchos de estos temas, así como las estadísticas descriptivas desglosadas por género, raza y etnia en algunos casos, pone de relieve la importancia de producir conocimiento adicional sobre los efectos del trabajo del Banco.

B. Dimensiones de éxito, líneas de acción, actividades operativas y de conocimiento

5.3 Para conseguir los objetivos antes planteados, el Banco se concentrará en cinco dimensiones de éxito: dos en el ámbito de la diversidad, dos en el de género y una que engloba el género y la diversidad. A continuación se esbozan las líneas de acción y las actividades operativas correspondientes a estas dimensiones de éxito. Algunas de estas actividades son esferas en las que el Banco lleva trabajando un tiempo considerable y ha acumulado un conocimiento importante sobre lo que funciona (por ejemplo, aumentar la productividad de las PYME de mujeres), mientras que otras son nuevas para el Banco y el conocimiento acumulado sobre lo que funciona es limitado (por ejemplo, la educación intercultural bilingüe, los servicios de salud interculturales y el aumento de la cobertura de servicios de infraestructura clave para pueblos indígenas y afrodescendientes). En la medida en que la ejecución de estas actividades esté a cargo de contrapartes relativamente débiles, el fortalecimiento institucional será una actividad transversal en muchas de las líneas de acción (véase el párrafo 4.14). A la vez, también será importante aprender de las experiencias fructíferas de la integración transversal de la perspectiva de género y de diversidad en la región, que son relativamente escasas. A fin de divulgar información y justificar económicamente la inversión en igualdad de género y desarrollo con identidad de los pueblos indígenas y los afrodescendientes, el Banco colaborará con sus socios gubernamentales, con énfasis en funcionarios de alto nivel de los sectores financiero y económico. La labor de difusión también se orientará al sector privado y la sociedad civil en general. Además de los diálogos de política regionales sectoriales dirigidos a grupos especializados, el Banco usará otros medios de difusión como sus propios consejos de la sociedad civil a escala nacional.

5.4 Al mismo tiempo, los proyectos del BID deben aprovechar las oportunidades de promover la igualdad de género y el desarrollo con identidad —en otras palabras, se debe integrar transversalmente la perspectiva de género y de diversidad en una amplia gama de operaciones del BID—. Aunque se han logrado avances considerables en la integración transversal de la perspectiva de género en las operaciones del BID, todavía hay un trabajo importante por hacer con respecto a temas de diversidad.

1. Pueblos indígenas y afrodescendientes

Dimensión 1: Los pueblos indígenas y los afrodescendientes tienen acceso a servicios de capital humano e infraestructura de calidad

5.5 En esta dimensión de éxito se destaca la importancia de colocar a los pueblos indígenas y afrodescendientes en primer lugar y en el centro de la provisión de servicios sociales y de infraestructura fundamentales a fin de revertir siglos de marginación. Cabe destacar que “provisión” podría interpretarse como una fórmula única para proveer un servicio preestablecido a una población beneficiaria pasiva. Un enfoque de ese tipo estaría destinado al fracaso; será

necesario proveer los servicios de una manera culturalmente apropiada y la única manera de lograrlo es fomentando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en su diseño y provisión. Para conseguir estos objetivos se proponen las siguientes líneas de acción.

5.6 **Líneas de acción:** (i) provisión de educación intercultural bilingüe, con una evaluación de los impactos en el desempeño escolar de los estudiantes; (ii) provisión de servicios de salud interculturales (con énfasis en la reducción de la mortalidad materna), con participación de la comunidad en los servicios públicos o por medio de modelos de gestión comunitaria; y (iii) expansión de la cobertura de servicios básicos de infraestructura a hogares indígenas y afrodescendientes, prestando especial atención a la adecuación cultural de la inversión. Para cumplir con estas líneas de acción, se llevarán a cabo las siguientes actividades operativas y de conocimiento:

a) ***Actividades operativas:*** (i) financiamiento de proyectos piloto de educación intercultural bilingüe con opción de ampliar su escala; (ii) incorporación de servicios de salud interculturales en operaciones seleccionadas; y (iii) presentación de informes, en operaciones seleccionados de los sectores de energía y de agua y saneamiento, sobre las brechas existentes en el acceso entre poblaciones indígenas y no indígenas, y la identificación de posibles actividades para reducir estas brechas.

b) ***Actividades de conocimiento***: (i) evaluaciones de impacto de la educación intercultural bilingüe y los servicios de salud interculturales; (ii) estudios de caso sobre servicios de salud para indígenas gestionados por las comunidades; (iii) actualización de los lineamientos de etnoingeniería del Banco para infraestructura y capacitación de personal; y (iv) mejora de datos sobre raza, etnia y género mediante asistencia técnica para encuestas de hogares, censos, sistemas de recopilación de datos y de institutos nacionales de estadísticas.

Dimensión 2: Se promueven y protegen las tierras y culturas de los pueblos indígenas y afrodescendientes

5.7 Esta dimensión de éxito se refiere a la conservación de la biodiversidad en territorios indígenas y de afrodescendientes, a la capacidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes para adaptarse a los efectos del cambio climático y gobernar con eficacia sus territorios autónomos ya establecidos, así como a la capacidad de la identidad y la cultura indígenas para sobrevivir en las zonas urbanas de los países en que una proporción considerable de la población indígena reside ahora en ciudades. Para conseguir estos objetivos, se proponen las siguientes líneas de acción.

5.8 **Líneas de acción:** (i) apoyo a los procesos de gobernanza de territorios indígenas y el otorgamiento de títulos de propiedad de tierras y territorios de pueblos

indígenas y de afrodescendientes, de manera compatible con los deseos de las comunidades locales; (ii) apoyo a las estrategias para proteger los ecosistemas y oferta de oportunidades de subsistencia para los pueblos indígenas; y (iii) difusión de enfoques tradicionales e indígenas eficaces en cuanto a la adaptación al cambio climático. Para cumplir con estas líneas de acción, se llevarán a cabo las siguientes actividades operativas y de conocimiento:

a) ***Actividades operativas:*** (i) proyectos que apoyen la descentralización administrativa y el fortalecimiento de la gobernanza en territorios indígenas; (ii) capacitación de pueblos indígenas en adaptación al cambio climático; (iii) financiamiento de adaptaciones al cambio climático a escala comunitaria; y (iv) apoyo a actividades para promover la tolerancia hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes e integrar la supervivencia cultural (por ejemplo, museos comunitarios).

b) ***Actividades de conocimiento:*** (i) evaluaciones de los proyectos del Banco que promueven la recuperación y la ampliación de la escala de enfoques tradicionales en lo relativo a la adaptación al cambio climático; y (ii) evaluaciones de los programas de pago por servicios de ecosistemas a fin de medir su potencial para promover la protección de la biodiversidad en territorios indígenas.

2. Atención a las brechas de género

Dimensión 3: Ampliación del poder de agencia de las mujeres

5.9 El poder de agencia de las mujeres en América Latina y el Caribe —y en el resto del mundo— a menudo se ve limitado por factores que impiden que las mujeres realicen su pleno potencial. Entre estos factores figuran la falta de control sobre la salud sexual y reproductiva y el embarazo adolescente (que se relaciona con la deserción escolar y la obtención de ingresos más bajos durante el ciclo de vida), violencia contra la mujer (que también se ha demostrado que reduce los ingresos) y participación limitada en diferentes formas de órganos de gobernanza, que van desde consejos municipales o legislaturas estatales y nacionales hasta consejos de empresas privadas. Para conseguir estos objetivos, se proponen las siguientes líneas de acción.

5.10 **Líneas de acción:** (i) apoyo a programas y políticas que aumenten el acceso a la salud reproductiva y reduzcan el embarazo adolescente; (ii) identificación y financiamiento de enfoques eficaces para la prevención y el tratamiento de la violencia contra la mujer, en agendas regionales más amplias de seguridad ciudadana, transporte y desarrollo urbano; (iii) promoción de la voz y agencia de la mujer en el sector público a nivel nacional y local; y (iv) promoción de la igualdad de género en empresas del sector privado. Para cumplir con estas líneas de acción, se llevarán a cabo las siguientes actividades operativas y de conocimiento:

a) ***Actividades operativas:*** (i) apoyo para brindar información y prestar servicios relacionados con la salud reproductiva con énfasis en mujeres y hombres jóvenes; (ii) colaboración entre las divisiones del Banco para asegurar la integración del tema de la violencia contra la mujer en las operaciones del Banco en materia de seguridad ciudadana, salud, transporte y desarrollo urbano; (iii) pruebas experimentales y evaluación de enfoques innovadores para la prevención de la violencia contra la mujer, incluidos programas educativos dirigidos a adolescentes de ambos sexos, microcrédito e intervenciones complementarias como un instrumento para reducir la violencia contra la mujer, así como espacios seguros para adolescentes mujeres y programas para padres; (iv) creación de una red de mujeres líderes en el sector público; y (v) ayuda a clientes del sector privado en la elaboración de planes de acción para promover la igualdad de género en sus empresas.

b) ***Actividades de conocimiento:*** (i) apoyo para la recopilación de datos de mejor calidad sobre violencia contra la mujer en la región; (ii) identificación y divulgación de enfoques eficaces para la prevención y el tratamiento de la violencia contra la mujer, incluido un diálogo de política regional sobre este tema; y (iii) evaluaciones de impacto de la prestación de servicios de salud reproductiva y el impacto que tiene la inclusión de mujeres en estructuras de gobernanza de proyectos del BID en la efectividad en el desarrollo, con un enfoque inicial en los sectores de infraestructura.

Dimensión 4: Las mujeres de bajos ingresos tienen acceso a servicios públicos de calidad

5.11 Esta dimensión de éxito significa que las mujeres recibirán servicios públicos de calidad de manera tal que se reduzcan los costos de transacción por su uso y se asegure la coordinación entre los prestadores de servicios. Reducir los costos de transacción para las mujeres reviste especial importancia en virtud de la pobreza de tiempo de las mujeres pobres, es decir, que las responsabilidades en el trabajo y el hogar les deja poco tiempo disponible para cualquier otra actividad. Para conseguir estos objetivos, se proponen las siguientes líneas de acción.

5.12 **Líneas de acción:** (i) sistematización del modelo inicial de ventanilla única utilizado en El Salvador (Ciudad Mujer), lo que incluye las lecciones aprendidas de su ejecución y evaluación[92]; (ii) diseño de modelos de ventanilla única en otros países conforme lo determine la demanda nacional; y (iii) complementación de los servicios ofrecidos en un centro con programas de prevención comunitarios. Para cumplir con estas líneas de acción, se llevarán a cabo las siguientes actividades operativas y de conocimiento:

a) ***Actividades operativas:*** (i) puesta a prueba del modelo de servicios integrados en la región, en respuesta a la demanda nacional; y (ii) repetición y adaptación total del modelo de Ciudad Mujer en otros países, en respuesta a la demanda nacional.

b) ***Actividades de conocimiento:*** (i) una evaluación de impacto de Ciudad Mujer en El Salvador; (ii) evaluaciones de impacto de las intervenciones destinadas a promover espacios públicos seguros para las mujeres (por ejemplo, vagones de metro o autobuses para uso exclusivo de mujeres); y (iii) eventos de difusión para las evaluaciones de impacto.

3. Género *y* diversidad

Dimensión 5: Las mujeres, los afrodescendientes y los pueblos indígenas tienen mejores resultados en el mercado de trabajo (participación y calidad de los empleos), así como mayores oportunidades para el emprendimiento

5.13 El éxito en esta dimensión significará que los afrodescendientes y las mujeres aumentarán su participación en la fuerza laboral y las brechas de participación seguirán reduciéndose con el tiempo; que las oportunidades de empleo para los indígenas están abiertas en ámbitos equitativos y acordes con su cosmovisión; que las brechas de género y etnorraciales en los ingresos se reducirán a medida que las empresas traten a sus empleados de manera más equitativa sin importar el género, la raza o la etnia; y que los emprendedores afrodescendientes, indígenas y mujeres representarán un porcentaje creciente de los pequeños y medianos empresarios conforme sus empresas crecen y dejan de ser microempresas.

5.14 **Líneas de acción:** (i) aumento de la disponibilidad de servicios de guardería y arreglos laborales flexibles; (ii) fomento de la capacitación en sectores no tradicionales y del uso de servicios de intermediación para grupos tradicionalmente excluidos de estos sectores; (iii) apoyo al diseño de capacitación empresarial y técnica intercultural; (iv) aumento del financiamiento disponible para PYME encabezadas por afrodescendientes, indígenas y mujeres; (v) diseño de productos, más allá del financiamiento, que satisfagan las necesidades de los empresarios afrodescendientes, indígenas y mujeres; y (vi) apoyo a la identificación de modelos de negocios dentro de un marco de desarrollo con identidad que permitan a los pueblos indígenas capitalizar y reafirmar sus recursos culturales y naturales. Para cumplir con estas líneas de acción, se llevarán a cabo las siguientes actividades operativas y de conocimiento en las ventanillas del sector público y el sector privado del Banco:

a) ***Actividades operativas:*** (i) colaboración entre las divisiones del Banco para diseñar modelos de guardería que consideren las necesidades de las mujeres y promover arreglos laborales flexibles; (ii) colaboración entre las divisiones del Banco para aumentar la participación de mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas en sectores no tradicionales y su acceso a servicios de intermediación amigables en las operaciones del Banco relacionadas con el mercado de trabajo; (iii) diseño de estrategias de mercadeo, productos financieros y servicios adaptados a las necesidades de las mujeres; (iv) diseño de productos financieros (por ejemplo, cuentas de ahorros empresariales) y modalidades de financiamiento (por ejemplo, aceleradoras de empresas) que eleven la productividad y la competitividad de las empresas encabezadas por

afrodescendientes, indígenas y mujeres; (v) diseño de capacitación culturalmente apropiada para pueblos indígenas y afrodescendientes; (vi) preparación de proyectos que fomenten el desarrollo con identidad mediante el apoyo a empresas propiedad de afrodescendientes e indígenas; (vii) trabajo con compañías privadas para apoyar la inclusión de mujeres y otros grupos tradicionalmente excluidos en sus cadenas de suministro y fuerza laboral en todos los niveles; y (viii) promoción de la diversidad en la gobernanza empresarial.

b) ***Actividades de conocimiento:*** (i) puesta a prueba y evaluación de arreglos laborales flexibles; (ii) puesta a prueba y evaluación de estrategias para aumentar la participación en capacitación no tradicional y la eficacia de los servicios de intermediación ofrecidos a afrodescendientes, pueblos indígenas y mujeres; (iii) evaluaciones para determinar si las pruebas psicométricas y metodologías alternativas de valoración del riesgo crediticio permiten aumentar el crédito para empresas propiedad de mujeres y reducir pérdidas para las instituciones de financiamiento; (iv) puesta a prueba y evaluación de mecanismos alternativos de financiamiento y desarrollo empresarial para empresas encabezadas por mujeres; (v) puesta a prueba y evaluación de servicios de desarrollo empresarial y programas de asistencia técnica alternativos para empresas encabezadas por indígenas, afrodescendientes y mujeres; (vi) establecimiento de una base de datos de acceso público sobre la participación en el mercado de trabajo de mujeres, indígenas y afrodescendientes, como parte de la iniciativa más amplia de diseñar un Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social; y (vii) analizar la viabilidad de llevar a cabo una investigación sobre los costos que tiene para las sociedades la discriminación en el mercado de trabajo en razón de la orientación sexual.

CUADROS Y GRÁFICOS

Cuadro A.1. Tasa neta de matriculación y tasa de finalización de la educación primaria para el año más reciente: niños indígenas y no indígenas

País	Encuesta	Año	Tasa neta de matriculación (%)		Tasa de finalización de la educación primaria (%)	
			No indígenas	Indígenas	No indígenas	Indígenas
México	ENNViH	2009	97,84	97,44	88,22	77,88
Guatemala	ENCOVI	2011	94,92	92,64	44,51	31,08
Panamá	ENV	2008	98,87	89,73	87,05	43,27
Ecuador	ECV	2005/2006	92,26	88,94	52,67	38,63
Perú	ENAHO	2012	82,50	80,50	87,64	73,49
Bolivia	EH	2012	98,38	98,53	78,97	69,05

Tasa neta de matriculación: Estudiantes matriculados de 7 a 12 años de edad divididos entre la población de edad escolar que corresponde a ese grupo de edad.
Tasa de finalización de la educación primaria: Número de estudiantes que han concluido el sexto grado divididos entre el número de niños de 13 años de edad.
Fuente: Cálculos del BID.

Cuadro A.2. Número de años atrás que los niños no indígenas tenían tasas de finalización de la educación primaria iguales a las tasas actuales para niños indígenas

País	Número de años (tasa de crecimiento para no indígenas)	Número de años (tasa de crecimiento para indígenas)
México	12,21	1,52
Guatemala	n/a	n/a
Panamá	122,94	10,55
Ecuador	n/a	2,24
Perú	11,87	2,16
Bolivia	13,09	5,68

Fuente: Cálculo del BID basado en encuestas de hogares.
Nota: n/a indica que no fue posible hacer un cálculo por limitaciones en los datos.

Cuadro A.3. Tasas de mortalidad materna (por cada 100.000 nacidos vivos)

País	Indígenas	No indígenas	% de diferencia	Año
Guatemala	163	77,7	109%	2007
México	56,95	38,5	48%	2010
Panamá	421,4	72,5	481%	2011

Fuentes y cálculos:
Guatemala: Estudio Nacional de Mortalidad Materna, publicado en 2011 pero basado en datos de 2007. Los resultados del estudio, realizado por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se presentan separados por individuos indígenas y no indígenas.
México: Indicadores 2011, Objetivo de Desarrollo del Milenio 5, estudio realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna en México usando datos del Censo de 2010 y de registros administrativos de la Secretaría de Salud. Los datos sobre las tasas de mortalidad materna indígena corresponden a la tasa promedio en todos los estados con una población indígena superior al 40%. La fuente original no presenta datos desglosados por etnia.
Panamá: Situación de Salud de Panamá (2013), estudio realizado por el Ministerio de Salud. Los datos sobre pueblos indígenas corresponden a la tasa promedio de mortalidad materna en las comarcas de Ngäbe-Buglé y Guna Yala.

Cuadro A.4. Acceso de indígenas y no indígenas a servicios esenciales de infraestructura

			Acceso adecuado a agua potable (%)		Electricidad (%)	
País	**Fuente**	**Año**	**No indígenas**	**Indígenas**	**No indígenas**	**Indígenas**
Bolivia	ECH	2012	85,95	57,81	96,13	81,96
Brasil	PNAD	2012	89,6	80,3	99,5	93,48
Chile	CASEN	2011	94,94	86,42	99,76	98,83
Costa Rica	Censo	2011	.	.	99,35	80,54
Ecuador	ECV	2005	86,2	68,73	97,5	79,93
Guatemala	ENCOVI	2011	87,16	82,14	85,73	66,5
México	ENIGH	2012	67,35	50,83	98,73	96,16
Panamá	Censo	2010	96,78	67,92	91,55	38,63
Paraguay	EPH	2012	98,13	92,48	99,47	96,63

Cuadro A.5.A. Número de años atrás que las tasas de cobertura de hogares no indígenas eran iguales a las tasas de cobertura actuales para hogares indígenas

Acceso a agua potable

País	Número de años (tasa de crecimiento para no indígenas)	Número de años (tasa de crecimiento para indígenas)
Bolivia	49,5	344,0
Brasil	n/a	n/a
Chile	272,2	18,7
Costa Rica	.	.
Ecuador	12,2	n/a
Guatemala	59,5	25,9
Honduras	.	.
México	4,3	1,9
Panamá	252,1	16,9
Paraguay	9,7	10,6
Venezuela	.	.

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares.
Nota: n/a indica que no fue posible hacer un cálculo por limitaciones en los datos.
Para detalles metodológicos, véase el Cuadro A.2.

Cuadro A.5.B. Número de años atrás que las tasas de cobertura de hogares no indígenas eran iguales a las tasas de cobertura actuales para hogares indígenas

Acceso a electricidad

País	Número de años (tasa de crecimiento para no indígenas)	Número de años (tasa de crecimiento para indígenas)
Bolivia	13,4	5,9
Brasil	15,0	4,7
Chile	8,2	1,4
Costa Rica	109,12	8,44
Ecuador	22,8	3,0
Guatemala	23,0	28,8
Honduras	.	.
México	4,5	3,4
Panamá	111,0	23,9
Paraguay	7,0	2,5
Venezuela	.	.

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares.
Nota: n/a indica que no fue posible hacer un cálculo por limitaciones en los datos.

Cuadro A.6. Préstamos para inversión y género: comparación entre el BID y el Banco Mundial

A. Préstamos para inversión directa en género en el BID y el Banco Mundial			
		BID – Operaciones financieras de inversión directa	Banco Mundial – Préstamos para inversión directa en género
Ejercicio fiscal 2011	Número total de proyectos	1	1
	Valor total (millones de US$)	20	1,9
Ejercicio fiscal 2012	Número total de proyectos	1	1
	Valor total (millones de US$)	75	2,79
Ejercicio fiscal 2013	Número total de proyectos	0	0
	Valor total	n/a	n/a
Ejercicio fiscal 2011-2013	Número total de proyectos	2	2
	Valor total (millones de US$)	95	4,69

Fuentes: Para el BID, Revisión de la Cartera y Proyectos y Operaciones del BID e Informe de Avance sobre la Aplicación de la Política de Género y el Plan de Acción de Género para Operaciones, 2011-2013; para el Banco Mundial, http://www.worldbank.org/projects/.

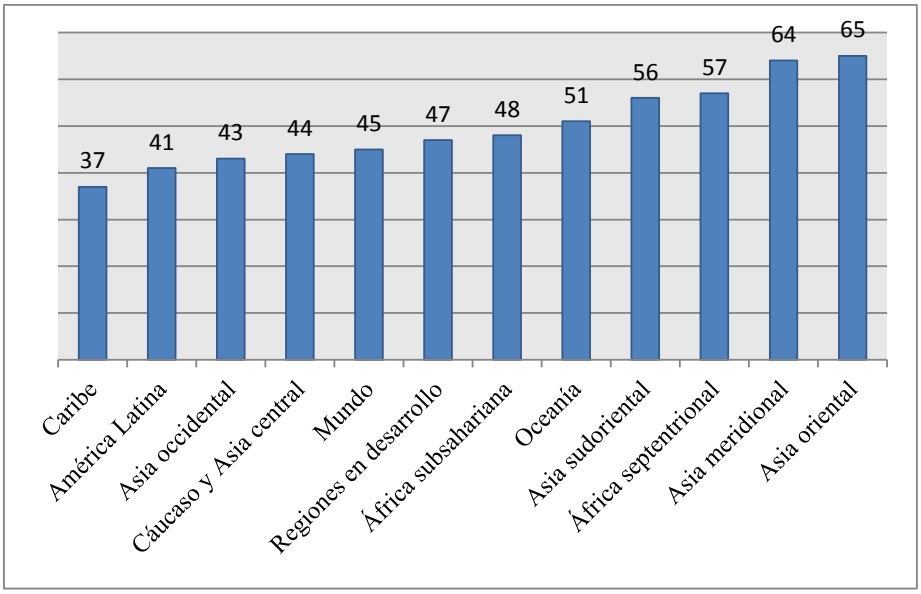
Nota: Valores totales en millones de US$. Los ejercicios fiscales del Banco Mundial y el BID no son iguales, pues el del BID va de enero a diciembre y el del Banco Mundial de julio a junio.

Nota: La definición de préstamos para inversión directa difiere entre el BID y el Banco Mundial. En el caso del BID, un préstamo para inversión directa en igualdad de género se refiere a cualquier préstamo con garantía soberana que tiene como objetivo primario cerrar una brecha de género. El Banco Mundial no usa esta terminología, sino que asigna "temas" a los proyectos. Un proyecto suele tener múltiples temas con porcentajes asignados que reflejan la importancia relativa de cada tema. Nuestra definición (arbitraria) de "inversión directa" para el Banco Mundial es cualquier proyecto en el que se ha asignado más del 30% al tema de género.

B. Integración del género en proyectos del BID y el Banco Mundial			
		BID – Préstamos con garantía soberana	Banco Mundial – Préstamos en materia de género para América Latina y el Caribe *
Ejercicio fiscal 2011	Número total de proyectos	19	3
	Valor total (millones de US$)	1232,4	501,9
Ejercicio fiscal 2012	Número total de proyectos	38	5
	Valor total (millones de US$)	1903,8	702,79
Ejercicio fiscal 2013	Número total de proyectos	41	6
	Valor total (millones de US$)	5053,5	1135
Ejercicios fiscales 2011-2013	Número total de proyectos	98	14
	Valor total (millones de US$)	8189,7	2339,69

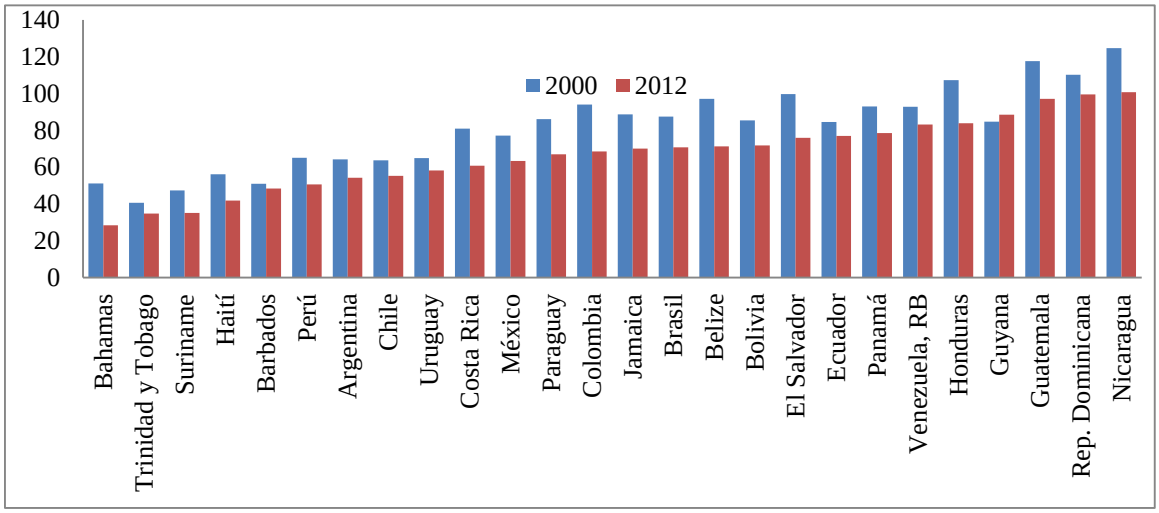
Fuentes: Para el BID, Revisión de la Cartera y Proyectos y Operaciones e Informe de Avance sobre la Aplicación de la Política de Género y el Plan de Acción de Género para Operaciones, 2011-2013; para el Banco Mundial, http://www.worldbank.org/projects/.
Nota: Valores totales en millones de US$. Los ejercicios fiscales del Banco Mundial y el BID no son iguales, pues el del BID va de enero a diciembre y el del Banco Mundial de julio a junio.
Nota: La definición de integración del género en proyectos difiere entre el BID y el Banco Mundial. En el BID sólo se consideran préstamos con garantía soberana para los que se indica un resultado de género (véase el Anexo IX del informe del Plan de Acción de Género 2011-2013). El Banco Mundial, como ya se señaló, asigna temas a los proyectos. En este cuadro se incluyen todos los proyectos del Banco Mundial en el que el género se identifica como un tema, independientemente del porcentaje que se le haya asignado.
* Incluye inversión específica, política de desarrollo, asistencia técnica y préstamos de emergencia para recuperación.

Gráfico A.1. Avance de las regiones del mundo en la consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio sobre mortalidad materna: porcentaje de reducción de la mortalidad materna, 1990-2014



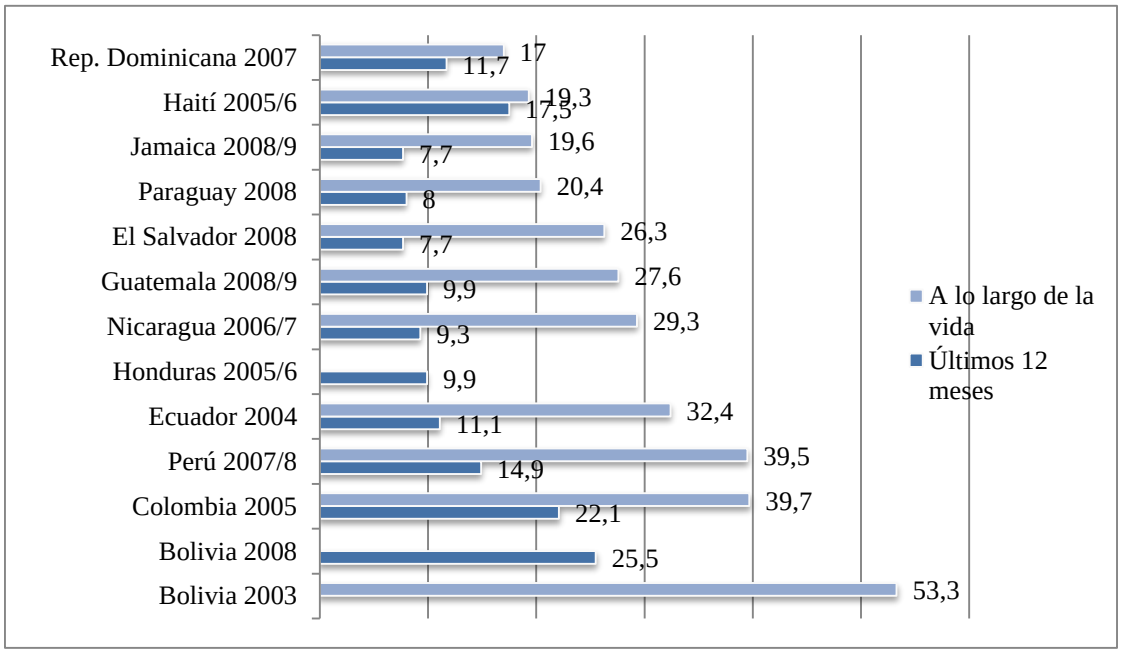
Fuente: Naciones Unidas, 2014.

Gráfico A.2. Tasas de embarazo adolescente (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años de edad) para países de América Latina y el Caribe: 2000 y 2012



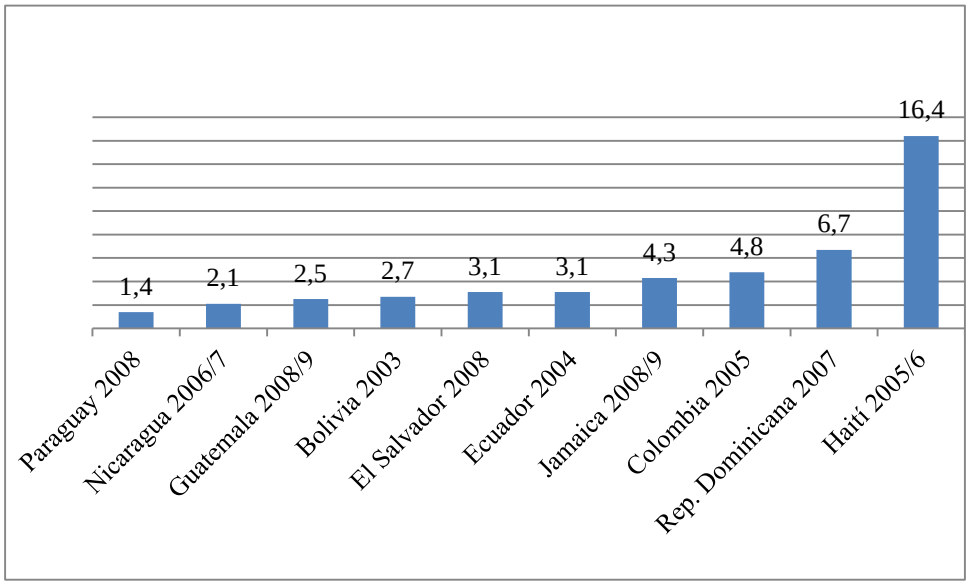
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial. Banco Mundial, consultados por última vez en agosto de 2014.

Gráfico A.3. Prevalencia de violencia de pareja a lo largo de la vida y en 12 meses por país, año más reciente



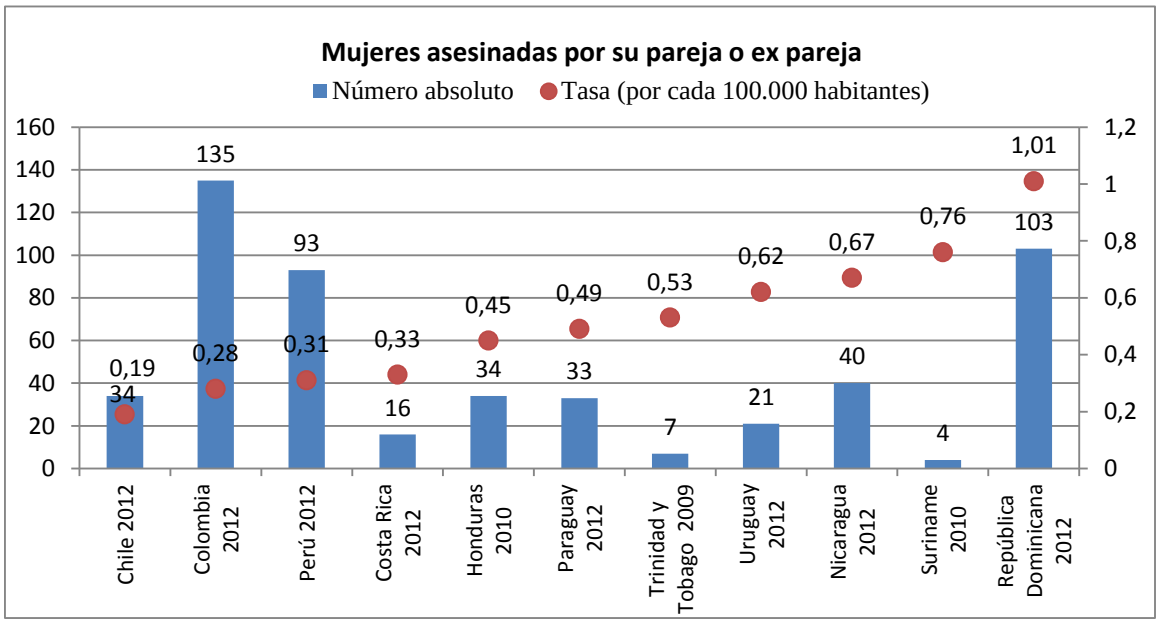
Fuente: OPS, 2012.

Gráfico A.4. Violencia sexual a lo largo de la vida ejercida por un agresor que no es la pareja (porcentaje de mujeres)



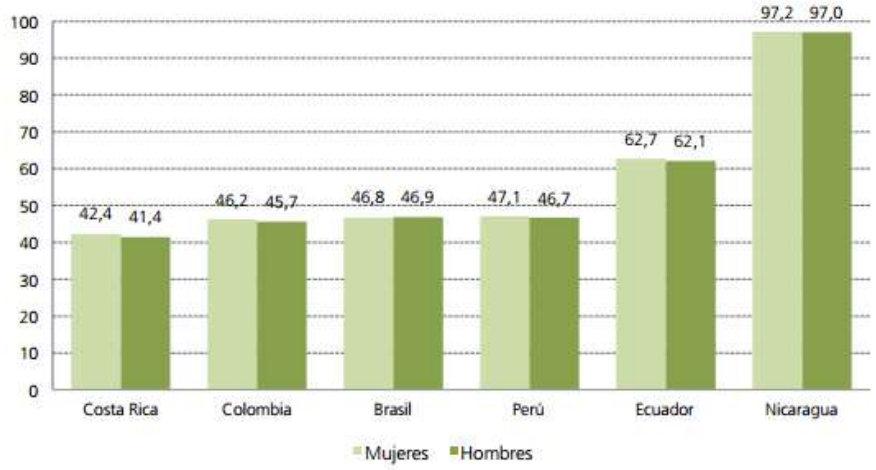
Fuente: OPS, 2012.

Gráfico A.5. Muertes por feminicidio y tasas correspondientes, año más reciente



Fuente: Sitio virtual de la CEPAL.

Gráfico A.6. América Latina (seis países): niñas, niños y adolescentes indígenas (6 a 19 años de edad) que hablan una lengua indígena. Censos circa 2010 (porcentajes)



Fuente: CEPAL. 2014. *Mujeres indígenas: nuevas protagonistas para nuevas políticas.*

Bibliografía

Adam, T. et al. 2005. "Cost-effectiveness analysis of strategies for maternal and neonatal health in developing countries". *British Medical Journal*. 331: 1107.

Advocates for Youth. 2012. "Science and Success: Sex Education and Other Programs That Work to Prevent Teen Pregnancy, HIV, and Sexually Transmitted Infections". Tercera edición. Washington, D.C.: Advocates for Youth.

Afroamérica XXI. 2008. "Informe Alternativo Colombia 2000-2008: Presentado ante el Comité que Monitorea la Convención Internacional contra Todas las Formas de Discriminación Racial". Comité CERD. http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_2657.pdf?view=1

Aguirre, J. 2011. "If you build it they will come: Evidence of the impact of a large expansion of childcare centers over attendance and maternal labor supply". Pontificia Universidad Católica. Tesis de maestría en economía.

Ahman E. y I. Shah. 2008. "Global and regional levels and trends". *Reproductive Health Matters:* 18(36): 90-101.

Ahmed, S. 2005. "Intimate Partner Violence against Women: Experiences from a Woman-focused Development Programme in Matlab, Bangladesh". *Journal of Health, Population and Nutrition:* 23(1): 95-101.

Alfonso et al. 2012. "Panorama general de la educación en América Latina y el Caribe". Cabrol, M. y Székely, M. (eds.), *Educación para la transformación.* Washington, D.C.: BID.

Alisjahbana, A. et al. 1995. "An integrated village maternity service to improve referral patterns in a rural area in West-Java". *International Journal of Gynecology and Obstetrics.* 48 (supl.): S83–S94.

Amin, M. y K. Kushnir. 2012. "Gender Disparity in Human Capital: Going Beyond Schooling". Documento de investigación. Unidad de Análisis Empresarial. Banco Mundial.

Amorós, J.E. y N. Bosma. 2014. "Global Entrepreneurship Monitor: 2013 Global Report". Global Entrepreneurship Monitor.

Andam, K. S. et al. 2008. "Measuring the effectiveness of protected area networks in reducing deforestation". *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 105(43): 16089–16094.

Appendini K. y G. Torres. 2008. "¿Ruralidad sin agricultura? Perspectivas multidisciplinarias de una realidad fragmentada." Documento de trabajo. El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos. México, D.F.: El Colegio de México.

Arceo-Gomez, E. y R.M. Campos-Vazquez. 2014. "Race and Marriage in the Labor Market: A Discrimination Correspondence Study in a Developing Country", *American Economic Review*. 104(5): 376-80.

Asadullah, M. y R. Fernández. 2008. "Work life balance practices and the gender gap in job satisfaction in the UK: evidence from matched employer-employee data". IZA Discussion Papers. No. 3582.

Atkinson, J. et al. 2010. "Creating incentives to save among microfinance borrowers: a behavioral experiment from Guatemala". Documento de trabajo.

Azevedo et al. 2013. *Teenage Pregnancy and Opportunities in Latin America and the Caribbean*. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Baird, S. et al. 2010. "The short-term impacts of a schooling conditional cash transfer program on the sexual behavior of young women". *Health Economics.*

Banco Interamericano de Desarrollo. 2014. Informe de Avance sobre la Aplicación de la Política de Género y el Plan de Acción de Género para Operaciones, 2011-2013. Washington, D.C.: BID.

Banco Mundial. 2014a. "Gender at Work: A Companion to the World Development Report on Jobs". Washington, D.C.: Banco Mundial.

Banco Mundial. 2014b. *Voice and Agency: Empowering Women and Girls for Shared Prosperity*. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Banco Mundial. 2013a. Poverty Assessments: Latin American and Caribbean. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20204102~menuPK:435735~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html

Banco Mundial. 2013b. Women, Business and the Law 2014: Removing Restrictions to Enhance Gender Equality. Washington, D.C.: Banco Mundial e IFC.

Banco Mundial. 2012. *World Development Report 2012: Gender Equality and Development.* Washington, D.C.: Banco Mundial.

Banco Mundial. 2010. *World Bank Enterprise Surveys; Women's Economic Opportunities in the Formal Private Sector in Latin America and the Caribbean: A Focus on Entrepreneurship.* Washington, D.C.: Banco Mundial.

Barber, B.L. et al. 2005. "Benefits of activity participation: The roles of identity affirmation and peer group norm sharing". En J. L. Mahoney, R. Larson y J. S. Eccles (eds.), *Organized Activities as Contexts of Development: Extracurricular Activities, After-School and Community Programs*. Mahwah, Nueva Jersey: Erlbaum.

Barber S.J. y Gertler P.J. 2009. "Empowering women to obtain high-quality care: evidence from an evaluation of Mexico's conditional cash transfer programme". *Health Policy and Planning* 24 (1): 18-2.

Barnes, T. 2012. "Gender and Legislative Preferences from the Argentine Provinces" *Politics and Gender*. 8: 483-507.

Beaman, L. et al. 2012. "Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India". *Science* 335(6068): 582-586.

Beaman, L. et al. 2007. "Women Politicians, Gender Bias and Policy-making in Rural India". *eSocialSciences.* Documento de trabajo 835.

Bellony A. et al. 2010. "Gender Earnings Gaps in the Caribbean: Evidence from Barbados and Jamaica". Serie de documentos de trabajo del BID N° IDB-WO-210. Washington, D.C.: BID.

Berlinski, S. y S. Galiani. 2007. "The effect of a large expansion of pre-primary school facilities on preschool attendance and maternal employment". *Labour Economics, Elsevier*. 14(3): 665-680.

Berthelon M.E. y D.I. Kruger. 2011. "Risky behavior among youth: Incapacitation effects of school on adolescent motherhood and crime in Chile". *Journal of Public Economics.* 95: 41–53.

Bhavnani, R. 2009. "Do electoral quotas work after they are withdrawn? Evidence from a natural experiment in India". *American Political Science Review*. 103(01): 23-35.

Baiocchi, G. et al. 2011. *Bootstrapping Democracy. Transforming Local Governance and Civil Society in Brazil.* Stanford: Stanford University Press.

Bjorkman, M. y J. Svensson. 2009. "Power to the People: Evidence from a Randomized Field Experiment on Community-based Monitoring in Uganda". *Quarterly Journal of Economics.*

Blackman, A. et al. 2012. "Prioritizing policies for biodiversity conservation in Latin America and the Caribbean: a rapid assessment". Washington, D.C.: Resources for the Future.

Blau, F. et al. 2014. *The Economics of Women, Men, and Work*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 7ª edición.

Bokhari, J. 2006. "Pakistan: Initiative of one, relief for all – women's leadership in the Banda Golra water supply scheme". *Gender, water and Sanitation case studies on best practices*. Nueva York: Naciones Unidas.

Bott, S. 2012. *Violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países.* Washington, D.C.: OMS.

Boulding, C. y B. Wampler. 2010. "Voice, Votes, and Resources: Evaluating the Effect of Participatory Democracy on Well-being". *World Development.* 38(1): 125-135.

Brass, D.J. 1984. "Being in the Right Place: A structural analysis of individual influence in an organization". *Administrative Science Quarterly* 29: 518-539.

Bravo, D. et. al. 2008. "An Experimental Study of Labor Market Discrimination: Gender, Social Class and Neighborhood in Chile". Research Department Publications 3242, BID, Departamento de Investigación.

Bridge. 2002. Gender and Development INBRIEF. N° 12. http://www.bridge.ids.ac.uk/dgb12.html#3. Consultado el 22-7-14.

Bruce J, K. Wendland y L. Naughton-Treves. 2010. Whom to pay? Key Concepts and Terms regarding Tenure and Property Rights in Payment-based Forest Ecosystem Conservation. Madison, WI: Land Tenure Center.

Burke, R.J. et al. 1995. "Interpersonal networks of managerial and professional women and men: descriptive characteristics". *Women in Management Reviews* 10 (1): 21-27.

Buvinic, M. et al. 2013. "A Roadmap For Promoting Women's Economic Empowerment". United Nations Foundation and Exxon Mobil.

Card, D. et al. 2010. "Active Labour Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis". *Economic Journal*, vol. 120, 548: F452-F477.

Carvajal, M.J. y F.K. Morris. 1990. "Educación formal: ¿Vehículo de integración económica y social del indio guatemalteco?" *Revista de la integración y el desarrollo de Centroamérica* 45-46: 95-100.

Casey, K. et al. 2012. "Reshaping Institutions: Evidence on Aid Impacts Using a Pre-analysis Plan". *Quarterly Journal of Economics.* 127(4): 1755-1812.

Catalyst. 2011. "The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on Boards".

Catalyst. 1997. "The Bottom Line: Corporate Performance and Women's Representation on Boards".

Centro de Microdatos. 2012. "Evaluación de Impacto del Programa de Subsidio al Empleo Joven*"* Informe Final. *Centro de Microdatos, Departamento de Economía de la Universidad de Chile*.

CEPAL. 2014. *Mujeres Indígenas: Nuevas protagonistas para nuevas políticas*. Santiago: CEPAL.

CEPAL. 2009. Analysis of ECLAC household survey database 1989-2008 as conducted by the IDB [Processing of household surveys (ECLAC), 1989-2008.]

CEPAL. 2000. *Etnicidad, 'raza' y equidad en América Latina y el Caribe.* Santiago: CEPAL.

CEPAL, FAO, ONU-Mujeres, PNUD, OIT. 2013. "Informe Regional. Trabajo decente e igualdad de género: Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe". Santiago: CEPAL.

CEPAL, UNFPA, OPS. 2010. "Salud materno-infantil de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: aportes para una relectura desde el derecho a la integridad cultural". Santiago: CEPAL.

Chattopadhyay, R. y E. Duflo. 2004. "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India". *Econometrica*. 72(5): 1409–1443.

Chávez Pérez, V. et al. 2010. "Alternativa para la formación de recursos humanos en salud en pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de Nicaragua/Alternatives for the development of health human resources in afro indigenous peoples and ethnic communities in Nicaragua". http://bvs.sld.cu/revistas/spi/vol01_01_10/spi02110.htm

Cisneros, P. y J. McBreen, 2010. "Superposición de territorios indígenas y áreas protegidas en América del Sur". Quito, Ecuador: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) y Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Reino Unido.

Clots-Figueras, I. 2012. "Are Female Leaders Good for Education? Evidence from India". *American Economic Journal: Applied Economics*. 4(1): 212-44.

Colombini, M. et al. 2012. "An integrated health sector response to violence against women in Malaysia: lessons for supporting scale up". *BMC Public Health*. 12:548.

Colombini, M. et al. 2011. "One stop crisis centres: A policy analysis of the Malaysian response to intimate partner violence". *Health Research Policy and Systems*. 9:25.

Colombini M. et al. 2008. "Health-sector responses to intimate partner violence in low- and middle-income settings: a review of current models, challenges and opportunities". *Bulletin World Health Organization.* 86(8):635-42

Cooper, P. et al. 2009. |"Improving quality of mother-infant relationships and infant attachment in socioeconomically deprived community in South Africa: Randomised Controlled Trial". *British Medical Journal*. 338: 974.

Cordero Muñoz, L. 2010. *Salud de la Mujer Indígena: Intervenciones para reducir la muerte materna*. Washington, D.C.: BID.

Costello, A. et al. 2004. "Reducing maternal and neonatal mortality in the poorest communities". Lancet: Maternal Health Series 329: 1166–68.

Cunningham, M. 2002. *Etnia; Cultura y Salud: La experiencia de la salud intercultural como una herramienta para la equidad en las regiones autónomas de Nicaragua*. URACCAN: Nicaragua.

Damman, S. 2007. "Indigenous Vulnerability and the Process Towards the Millennium Development Goals–Will a Human Rights-Based Approach Help?" *International Journal on Minority and Group Rights* 14 (2007) 489–539.

Daniel, T. et al. 2011. "Contributions of cultural services to the ecosystem services agenda". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 109 (23): 8812-8819. NAS, 1-8.

Darney, B.G. et al. 2013. "The Oportunidades Conditional Cash Transfer Program: Effects on Pregnancy and Contraceptive Use Among Young Rural Women in Mexico" *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*. 39(4):205–214.

Davidson, E. et al. 2012. "The Amazon basin in transition". *Nature*. 481: 321–328.

Deloitte. 2011. Women in the Boardroom: A global perspective. Noviembre de 2011.

Dreher, G. y T. Cox. 2000. *Race, gender and opportunity: A study of compensation attainment and the establishment of mentoring relationships.*

Duflo, E. et al. 2012. "Education, HIV, and Early Fertility: Experimental Evidence from Kenya". Working Paper, Department of Economics. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.

Duggan, A. et al. 1999. "Evaluation of Hawaii's Healthy Start Program". *The Future of Children*. 9(1): 66-90.

Echegaray, A. et al. 2013. "Programa de Desarrollo Integral de Pueblos Originarios". Fase I y II. *Informe de Terminación de Proyecto* (PCR). Washington, D.C.: BID.

Economist. 2014. "The Spread of Gender Quotas for Company Boards". *The Economist Explains*.

Edwards S. 2010. "Improving indigenous people's maternal health". *Health Poverty Action.*

Ellsberg, M. et al. Próxima publicación. "New approaches to violence reduction: what does the evidence say?" Documento de trabajo. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Escobar, M. 2003. "Municipal Participatory Budget: Women, Participation and Learning in Villa El Salvador, Peru". *Proceedings of Conference on Lifelong citizenship learning, participatory democracy and social change: local and global perspectives.* Toronto, Canadá. http://legacy.oise.utoronto.ca/research/tlcentre/conference2003/sessionC.htm Consultado el 22-14.

FAO. 2014. "Estudios de caso sobre experiencias de prevención y defensa de derechos territoriales ante el narcotráfico y crimen organizado por parte de comunidades indígenas en Mesoamérica". http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/experiencias-territoriales/detalle/en/c/219098/

Fitzgerald, J. y J. Relyea-Kim. 2013. "Bilingual Education Programs and Student Achievement", en J. Hattie y E. Anderman (eds.), *International Guide to Student Achievement*. Nueva York: Routledge.

Flores Lima, R. 2010. "Innovaciones en la evaluación de impacto del servicio de intermediación laboral en México". Nota Técnica. IDB-TN-118.

Fleischman, J. 2005. "Strengthening HIV/AIDS programs for women: Lessons for US policy from Zambia and Kenya". Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies.

FMAM. 2012. "Principles and Guidelines for Engagement with Indigenous Peoples". Washington, D.C.: FMAM.

Forret, M. y T. Dougherty. 2004. "Networking behaviors and career outcomes: differences for men and women?". *Journal of Organizational Behavior*, 25 (3): 419-437.

Gabrysch, S. et al. 2009. "Cultural adaptation of birthing services in rural Ayacucho, Peru". *Bulletin of the World Health Organization* 87:724-729.

Galarza, F. y G. Yamada. 2012. "Labor Market Discrimination in Lima, Peru: Evidence from a Field Experiment". No 12-03, Documentos de trabajo, Departamento de Economía, Universidad del Pacífico, http://EconPapers.repec.org/RePEc:pai:wpaper:12-03

Galasso, E. et al. 2001. *Assisting the Transition from Workfare to Work: A Randomized Experiment in Argentina.* Washington, D.C.: Banco Mundial.

Gardner, C. et al. 2008. "Integración de los valores tradicionales y los regímenes de gestión en el sistema ampliado de áreas protegidas de Madagascar: el caso de Ankodida". En: *Valores Culturales y espirituales de los paisajes protegidos.* Sant Joant les Fons, Cataluña: Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y Obra Social de Caixa.

Gaveau, D. et al. 2009. “Evaluating whether protected areas reduce tropical deforestation in Sumatra”. *Journal of Biogeography*. 36 (11): 2165–2175.

Gibbons, M.A. 2013. “Impacto de un programa social sobre liderazgo y mediación en las aulas”. Universidad de San Andrés.

Gonçalves, S. 2009. “Does Exposing Corruption on the Internet Affect Electoral Performance?”. Capítulo 3, Disertación doctoral. Londres: London School of Economics and Political Science.

González, V et al. 2012. “¿Cómo mejorar las oportunidades de inserción laboral de los jóvenes en América Latina?” Publicaciones del BID 78338, BID.

Gorenflo, L. J. et al. 2012. “Co-occurrence of linguistic and biological diversity in biodiversity hotspots and high biodiversity wilderness areas”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 109(21): 8032-8037.

Greene, J. 1997. “A Meta-Analysis of the Rossell and Baker Review of Bilingual Education Research”. Bilingual Research Journal 21(2).

Greene, M. et al. 2006. “Involving Men in reproductive health: Contributions to Development”. Background paper to the report *Public Choices, private Decisions: Sexual and reproductive Health and the Millennium Development Goals*. Nueva York: UN Millennium Project.

Grepin y Klugman J. 2013. *Closing the deadly gap between what we know and what we do. Investing in Women’s Reproductive Health.* Washington, D.C.: Banco Mundial.

Gross, B. et al. 2001. “Linking Sustainability with Demand, Gender and Poverty: A Study in Community-managed Water Supply Projects in 15 Countries”. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Guedes, A. et al. 2002. “Integrating systematic screening for gender-based violence into sexual and reproductive health services: results of a baseline study by International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region”. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. 78 (1): 57-S63.

Guezmes, A. y L. Vargas. 2003. “Proyecto para combatir la violencia basada en género en América Latina”. Informe final de la comparación entre línea basal y línea de salida en INPPARES, PLAFAM, PROFAMILIA. Nueva York: International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR).

Guttmacher Institute. 2010. “Facts on the Sexual and Reproductive Health of Adolescent Women in the Developing World”. *In Brief*. Nueva York: Guttmacher Institute y Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF).

Hall, G. y H. Patrinos. 2012. *Indigenous Peoples, Poverty and Development*. Nueva York: Cambridge University Press.

Hall, G. y H.A. Patrinos. 2006. *Indigenous Peoples, Poverty and Human Development in Latin America: 1994-2004*. Nueva York: Palgrave Macmillian.

Hansen, M. 2013. "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change". *Science*. 342(6160): 850–853.

Hauser, D. 2004. "Five Years of Abstinence-Only-Until-Marriage Education: Assessing the Impact". [Title V State Evaluations] Washington, D.C.: Advocates for Youth.

Heise, L. 2011. "What works to prevent partner violence? An evidence overview". Documento de trabajo. Londres: London School of Health and Tropical Medicine.

Hicks, J.H. et al. 2011. "Vocational Education Voucher Delivery and Labor Market Returns: A Randomized Evaluation among Kenyan Youth". Report for Spanish Impact Evaluation Fund (SIEF) Phase II.

Hou, X. y N. Ma, 2011. "Empowering Women: The Effect of Women's Decision-Making Power on Reproductive". *Health Services Uptake*.

Htun, M. 2012. "Intersectional Disadvantage and Political Inclusion: Getting More Afro-descendant Women into Elected Office in Latin America". Washington, D.C.: BID.

Hunt, J. y Smith, D. E. 2006. "Building Indigenous community governance in Australia: Preliminary research findings". Centre for Aboriginal Economic Policy Research, ANU.

IAD. "Women and the Judiciary in the Americas. Leadership and Outcomes". Washington, D.C.: International Association of Women Judges, Inter-American Dialogue (IAD) y League of Women Voters.

Instituto Ethos, 2010. *Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas*. São Paulo, Brasil.

IPCC. 2009. "Concept paper for an IPCC Expert Meeting on Human Settlement, Water, Energy and Transport Infrastructure Mitigation and Adaptation Strategies". http://www.ipcc.ch/scoping_meeting_ar5/doc16.pdf

UIP. 2014. *Women in Politics: 2014.* Ginebra: Unión Interparlamentaria. http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_en.pdf/ Consultado el 18-7-14.

Janowitz, B. et al. 1985. "Referrals by traditional birth attendants in northeast Brazil". *American Journal of Public Health*. 75: 745–48.

Jensen, R. 2010. “The (Perceived) Returns to Education and the Demand for Schooling”. *The Quarterly Journal of Economics*. 125(2): 515-548.

Jones, M. 1997. “Legislator Gender and Legislator Policy Priorities in the Argentine Chamber of Deputies and the United States House of Representatives”. *Policy Studies Journal.* 25(4):613-629.

Kabeer, N. 2001. “Conflicts Over Credit: Re-Evaluating the Empowerment Potential of Loans to Women in Rural Bangladesh*”. World Development.* 29(1): 63-84.

Keller, S. et al. 2010. “Unintended Effects of a Domestic Violence Campaign”. *Journal of Advertising*, 39(4): 53-67.

Khan, M.E. 1998. “Involving men in safe motherhood”. *Journal of Family Welfare.* 43: 18–30.

Kim, J. et al. 2007. “Understanding the Impact of a Microfinance-Based Intervention on Women’s Empowerment and the Reduction of Intimate Partner Violence in South Africa”. *American Journal of Public Health.* 97(10).

Kirby, D. et al. 2007. “Sex and HIV Education Programs: Their Impact on Sexual Behaviors of Young People Throughout the World”. *Journal of Adolescent Health* 40(3): 206–217.

Kluve, J. 2006. “The Effectiveness of European Active Labor Market Policy”. IZA Discussion Papers No. 2018. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).

Krauss, M. *The world languages in crisis*. 1992

Kronik, J. y D. Verner. 2010. *Indigenous Peoples and Climate Change in Latin America and the Caribbean*. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Ledwith, L. y Y. Watanabe. 2014. “Global Environment Facility (GEF) - Partnership in practice: engagement with indigenous people”. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/05/19591675/global-environment-facility-gef-partnership-practice-engagement-indigenous-people Pages

Lehmann, U. y Sanders, D. 2007. “Community Health Workers: What do we know about them”. University of the Western Cape, School of Public Health: OMS.

Liu, Yanyan y Klaus Deininger. 2013. Welfare & Poverty Impacts. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Project Note 02. IIPA.

Llanos, B. y V. Roza. 2014. “Partidos y paridad: un desafío clave para la democracia en América Latina”. Perú: BID e IDEA International.

Lloyd, C. B. 2010. "The role of schools in promoting sexual and reproductive health among adolescents in developing countries". En S. Malarcher (ed.), *Social Determinants of Sexual and Reproductive Health. Informing future research and programme implications*. Ginebra: OMS.

Lopez-Calva, L.F. y E. Perova. 2012. "The Impact of Conditional Cash Transfers on the Incidence of Teenage Pregnancies. Evidence from Peru". Documento de trabajo. Washington: Banco Mundial.

Luna, E. et al. 2008. "El camino hacia el poder: ministras latinoamericanas 1950-2007". Washington, D.C.: BID.

MacLeod J. y G. Nelson. 2000. "Programs for the promotion of family wellness and the prevention of child maltreatment: a meta-analytic review". *Child Abuse and Neglect.* 24: 1127–1149.

Mansuri, G. y V. Rao. 2013. *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington, D.C.: Banco Mundial.

Martin, A. et al. 2014. "Measuring effectiveness, efficiency and equity in an experimental Payments for Ecosystem Services trial". *Global Climate Change* 28: 216-226.

Mazza, J. 2011. "Fast Tracking Jobs: Advances and Next Steps for Labor Intermediation Services in Latin America and the Caribbean". Notas Técnicas. # IDB-TN-344. Washington: BID.

McCloskey et al. 2011. "A systematic review of parenting interventions to prevent child abuse tested with RCT designs in high income countries". Documento informativo. Ginebra: Oak Foundation.

McKenzie, D. y C. Woodruff. 2012. "What are we learning from business training and entrepreneurship evaluations around the developing world?" Policy Research Working Paper. Washington, D.C.: Banco Mundial.

McKinsey & Company. 2013. *Women Matter: A Latin American Perspective. Unlocking women's potential to enhance corporate performance.* Nueva York: McKinsey.

McQueston, K. et al. 2013. "The Efficacy of Interventions to Reduce Adolescent Childbearing in Low- and Middle-Income Countries: A Systemic Review". *Studies in Family Planning*. 44(4): 369-388.

Medrano, V. et al. 2009. "Public Day Care and Female Labor Force Participation: Evidence from Chile". Documento de trabajo 306. Santiago: Universidad de Chile, Departamento de Economía.

Mehra, R. et al. 2012. "Financial Services for Low-Income Women: Opportunities for Economic Empowerment?" Report. Washington, D.C.: International Center for Research on Women.

Mignone, J. et al. 2007. “Best practices in intercultural health: five case studies in Latin America”. *Journal of Etnobiology and Ethnomedicine*. 3: 31.

Mikton et al. 2009. “Child maltreatment prevention: a systematic review of reviews”. *Bulletin of the World Health Organization* 87: 353-361.

Millennium Ecosystem Assessment. 2005. *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Washington, D.C.: Island Press.

Ministério da Saúde. 2004. *“Pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal.* Brasilia: Ministério da Saúde [según cita en Martins AL. *2004. Diferenciais raciais nos perfis e indicadores de mortalidade materna para o Brasil”.* En: XIV Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Caxambu: Associação Brasileira de Estudos Populacionais.]

Montenegro, R. 2006. “Indigenous Health in Latin America and the Caribbean”. Lancet 367: 1859-1869.

Morren, R.C. 1988. “Bilingual Education Curriculum Development in Guatemala”. *Journal of Multilingual and Multicultural Development.* 9(4):353-70.

Naciones Unidas. 2014. “The Millennium Development Goals Report”. Nueva York: Naciones Unidas.

Naciones Unidas. 2009. “The Millennium Development Goals Report”. Nueva York: Naciones Unidas.

Nguyen, T. 2008. “Information, Role Models and Perceived Returns to Education: Experimental Evidence from Madagascar”. Working Paper. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.

Nyamtema, A. et al. 2011. “Maternal health interventions in resource limited countries: a systematic review of packages, impacts and factors for change”. *BMC Pregnancy and Childbirth*. 11:30.

Ñopo, H. 2012. *New Century, Old Disparities: Gender and Ethnic Earnings Gaps in Latin America and the Caribbean*. Washington, D.C.: BID.

OCDE. 2010a. *OECD Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs*. París: OCDE.

OCDE. 2010b. *Paying for Biodiversity: Enhancing the Cost-Effectiveness of Payments for Ecosystem Services*. París: OCDE.

Olds, D.L. et al. 2007. “Programs for parents of infant and toddlers: recent evidence from randomized trials”. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*. 48: 355-391.

OMS. 2013. *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines*. Ginebra: OMS.

OMS. 2008. *Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008 (Sixth Edition)*. Ginebra: OMS.

OMS. 2007. *Engaging Men and Boys in Changing Gender-Based Inequity in Health: Evidence From Programme Interventions*. Ginebra: OMS.

OMS. 1996. *Maternity Waiting Homes: A review of experiences.* Ginebra: OMS.

O'Neill, J. et al. 2006. "Best Practices in Intercultural Health". Best practice paper. Washington, D.C.: BID.

O'Neill, R.M. y S.D. Blake Beard. 2002. "Gender Barriers to the Female Mentor- Male Protégé Relationship". *Journal of Business Ethics* 37: 51-63.

OPS. 2008. "WARMI II. Building bridges between the community and the health services with a gender and intercultural approach".

OPS. 2008b. "Malnutrition in Infants and Young Children in Latin America and the Caribbean: Achieving the Millennium Development Goals*"*. Washington, D.C.: OPS.

ONU-REDD. 2012. *Tenure of indigenous people's territories and REDD+ as a forestry management incentive: the case of Mesoamerican countries*. Ginebra: Programa ONU-REDD.

OREALC/UNESCO y LLECE. 2010. *Factores asociados al logro cognitivo de los estudiantes de América Latina y el Caribe.* Santiago: Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe y Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.

Ortiz-T., P. 2010. "Dilemas y desafíos de la autonomía territorial indígena en Latinoamérica". En P. Ortiz-T. y A. Chirif (eds.), *¿Podemos ser autónomas? Pueblos indígenas vs. Estado en Latinoamérica.* Ecuador: Intercooperation y RRI.

Osili, U. 2008. "Does female schooling reduce fertility? Evidence from Nigeria: *Journal of Development Economics.* 87: 57-75.

OVE. 2014. "Evaluación comparativa: Proyectos de Regularización y Administración de Tierras". Washington, D.C.: BID.

Paes de Barros, R. et al. 2011. "The Impact of Access to Free Childcare on Women's Labor Market Outcomes: Evidence from a Randomized Trial in Low-Income Neighborhoods of Rio de Janeiro". Documento de trabajo preparado para el Foro de Economistas del Banco Mundial. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Pages, C. y C. Piras. 2010. "El Dividendo de Género: Cómo Capitalizar el Trabajo de las Mujeres". Washington, D.C.. BID.

Pailhé, C. 2014. "Regulación financiera y género: El enfoque de género en las operaciones de reforma financiera de la División de Mercados Capitales e Instituciones Financieras". Washington, D.C.: BID.

Pattanayak, S. K., S. Wunder y P. J. Ferraro. 2010 Show Me the Money: Do Payments Supply Environmental Services in Developing Countries? Review of Environmental Economics and Policy, 4(2),254–74.

Patrinos, H.A. y E. Velez. 2009. "Costs and benefits of bilingual education in Guatemala: A Partial Analysis". *International Journal of Educational Development*.

Patrinos, H.A., E. Skoufias y T. Lunde. 2007. "Indigenous Peoples in Latin America: Economic Opportunities and Social Networks, World Bank Policy Research Working Paper 4227.

Perafán, C. et al. 2005. "Guías de Etnoingeniería". Washington, D.C.: BID.

PERLA (Project on Ethnicity and Race in Latin America). 2013. "Table: Afro-descendant and Indigenous Population in Latin America by Country". Princeton, New Jersey: Princeton University. https://perla.princeton.edu/table-afro-descendant-and-indigenous-population-in-latin-america-by-country/

Perova, E. y R. Vakis. 2013. "Improving Gender and Development Outcomes through Agency: Policy Lessons from Three Peruvian Experiences". Documento de trabajo. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Planas et al. 2014. "Using standardized simulated patients to measure ethnic disparities in family planning services in Peru: Study protocol and pre-trial procedures of a crossover randomized trial". Washington, D.C.: BID.

Plant, R. y S. Hvalkof. 2001. Land Titling and Indigenous Peoples, Sustainable Development Department Best Practices Series: IND-109).

Posey, D. 1999. *Cultural and Spiritual Values of Biodiversity*. Londres: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Prada, M. et al. 2013. "The effect of mandated childcare on female wages". Mimeo.

Prinz, R.J. et al. 2009. "Population-based prevention of child maltreatment: The U.S. Triple P system population trial". *Prevention Science* 10(1): 1-12.

Pulerwitz, J. et al. 2006. "Promoting more gender equitable norms and behaviors among young men as an HIV/AIDS prevention strategy". *Horizons Final Report.* Washington, D.C.: Population Council.

Rahman, A. 2009. "Cluster randomized trial of a parent-based intervention to support early development of children in a low-income country". *Child Care, Health and Development*. 35 (1): 56-62.

Rau, Tomás B. 2012. "Effects of Large-scale Youth Employment Subsidies: Evidence from a Regression Discontinuity Design". Documento de trabajo. Santiago, Chile: Centro de Microdatos and Universidad Católica.

Roldán Ortega, R. 2004. "Importancia de los territorios colectivos de indígenas y afroamericanos en el desarrollo rural". En Desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe. R. Echeverría (ed.). Washington, D.C.: BID. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Bolivia, 2004.

Roldán Ortega, R. 2004. "Models for recognizing indigenous land rights in Latin America". Biodiversity Series, Paper No. 99. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Rosa, H. et al. 2003. "Compensación por servicios ambientales y comunidades rurales lecciones de las américas y temas críticos para fortalecer estrategias comunitarias". *Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente*: 84.

Rossell, C. y Kuder, J. 2005. "Meta-Murky: A Rebuttal to Recent Meta-Analyses of Bilingual Education". En J. Sohn (ed.), The Effectiveness of Bilingual School Programs for Immigrant Children. Berlin: *Wissenschatscentrum Berlin fur Sozialforchung* (WZB).

Ruhm, C.J. 1998. "The Economic Consequences of Parental Leave Mandates: Lessons from Europe". *Quarterly Journal of Economics* 113(1): 285-317.

Sabarwal, S. et al. 2009. "How do Female Entrepreneurs Perform? Evidence from Three Developing Regions". Documento de trabajo. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Sanhueza, J. y M. Antonissen. 2014. *REDD+ en América Latina. Estado actual de las estrategias de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal*. Santiago*:* CEPAL.

Santelli, J. et al. 2006a. "Abstinence and abstinence-only education: a review of U.S. policies and programs". *Journal of Adolescent Health*; 38(1):72-81.

Santelli, J. et al. 2006b. "Abstinence-only education policies and programs: a position paper of the Society for Adolescent Medicine". *Journal of Adolescent Health*. 38(1):83-87.

Schieber, B. et al. 1993. "An intervention to reduce maternal and neonatal mortality". Quetzaltenango, Guatemala: MotherCare e Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.

Schwindt-Bayer, L. 2003. *Legislative Representation in Latin America: A Comparative Study of Descriptive, Substantive and Symbolic Representation of Women.* Disertación doctoral inédita, University of Arizona.

Scott, P.B. y Simon, R.E. 1987. *Rendimiento en segundo grado de las Escuelas del Programa Nacional de Educación Bilingüe*. Albuquerque, Nuevo México: University of New Mexico.

Sedgh, G. et al. 2012. "Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008". The Lancet 379 (9816): 625-632.

Sen, A. 1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Senderowitz, J. 2000. "A review of Program Approaches to Adolescent Reproductive Health". Poptech Assignment". No.2000.176. Arlington, VA: Poptech.

Senplades. 2013. "National Development Plan / National Plan for Good Living, 2013-2017. Summarized Version". Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Simons, G. y P. Lewis. 2013. "The world's language in crisis, a 20 year update". Ponencia presentada en el 27th Language Symposium on Language Death, Endangerment: Documentation and Revitalization. University of Wisconsin, 2011. Revisión final para actas.

Sims, K.R.E. 2008. "Environment vs. Development: Evidence from Thai Protected Areas". Documento de trabajo, Amherst College, https://www.amherst.edu/media/view/115011/original/Sims_Thai_PA_9-28-08.pdf-. Consultado el 6-9-2009.

Singh, S. y J.E. Darroch. 2012. *Adding It Up: The costs and benefits of contraceptive services*. Nueva York: Guttmacher Institute.

SITEAL (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina). 2012. "La situación educativa de la población indígena y afrodescendiente en América Latina". Cuaderno 14. París: International Institute for Educational Planning.

Solorzano, I., y R. Peña. 2004. "Preliminary Report of Baseline Study for the Impact Evaluation of Puntos de Encuentro's Communication for Social Change Project Somos Diferentes Somos Iguales". Managua, Puntos de Encuentro.

Stevens, C. et al. 2014. *Securing Rights, Combating Climate Change: How Strengthening Community Forest Rights Mitigates Climate Change.* Washington, D.C: Instituto de Recursos Mundiales.

Tas, E. et al. 2013. "Gender, Ethnicity and Cumulative Disadvantage: Evidence from Latin America and African Censuses". Policy Research Working Paper No. 6734. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Taylor-Robinson, M. y Heath. R. 2003. "Do Women Legislators have Different Policy Priorities than their Male Colleagues? A Critical Case Test". *Women & Politics*. 24 (4):77-101.

The Lancet. 2006. Maternal Survival Series. 368. Publicado en línea, 28 de septiembre de 2016.

Tinoco, T. 2014. "Añangu, un refugio en la selva". En Ecuavisa: Visión 360. http://www.ecuavisa.com/video/video-vision-360/promocionales-360/buen-vivir-anangu

Tinker, A. et al. 2005. "A continuum of care to save newborn lives". Lancet 365: 822-25.

Todd. 2013. "Background paper for the *Roadmap for Promoting Women's Economic Empowerment*". Nueva York: Fundación de las Naciones Unidas y ExxonMobil.

Torero, M. et al. 2013. "Strengthening Women's Entrepreneurship In Peru". IIPA. Washington, D.C.

Townsend, J. y B. Newman. 1985. "Bilingual Education Project in Guatemala: Preliminary Results on the Test of Principal Hypothesis during 1983". Guatemala: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP).

Turan J.M. et al. 2001. "Including expectant fathers in antenatal education programmers in Istanbul, Turkey". *Reproductive Health Matters*. 9: 114–25.

UNFPA. 2010. "Intercultural sexual and reproductive health among indigenous peoples in Latin America". Nueva York: FNUAP.

UNIFEM. 2009. *Who Answers to Women? Gender and Accountability. Progress of the World's Women 2008/2009*. Nueva York: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Urzúa, S. y E. Puentes. 2010. "La evidencia del impacto de los programas de capacitación en el desempeño en el mercado laboral". Washington, D.C.: BID.

Valdivia, M. 2012. "Business Training or Technical Assistance for Female Entrepreneurship: Evidence from a Field Experiment in Peru". Manuscrito inédito. Lima: GRADE.

Valdivia, M. 2009. "Concesionando el camino hacia el desarrollo. Impactos iniciales del Programa de Caminos Rurales". Lima: GRADE.

Van Dam, C. 2011. "Indigenous Territories and REDD in Latin America: Opportunity or Threat?" *Forests* 2: 394-414.

Van Parys, A-S. et al. 2014". Intimate Partner Violence and Pregnancy: A Systematic Review of Interventions". PLoS ONE 9(1): e85084. doi:10.1371/journal.pone.0085084.

Varkey, L.C. et al. 2004. *Involving Men in Maternity Care in India*. Washington, D.C.: Population Council.

Verma, R. et al. 2008. "Promoting gender equity as a strategy to reduce HIV risk and gender-based violence among young men in India". *Horizons Final Report*. Washington D.C: Population Council.

Verner, Dorte. 2010. *Reducing Poverty, Protecting Livelihoods and Building Assets in a Changing Climate: Social Implications of Climate Change in Latin America and the Caribbean.* Washington, D.C.: Banco Mundial.

Verschuuren, B. 2006. *An overview of cultural and spiritual values in ecosystem management and conservation strategies.* San Francisco: Foundation for Sustainable Development.

Vivo S. et al. 2012. "Salud Sexual y Reproductiva para Jóvenes". Revisión de Evidencia para la Prevención. Washington, D.C.: BID.

WASH (Agua, Saneamiento e Higiene para Todos). 2006. "Para ellas es el tema crucial. Colocar a las mujeres en el centro de las iniciativas sobre abastecimiento de agua, saneamiento e higiene". Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (WSSCC).

WDI. 2014. World Development Indicators Online (WDI) database. Washington, D.C.: Banco Mundial.

Wolfe, D. et al. 2009. "A school based program to prevent adolescent dating violence: A cluster randomized trial". *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine* 163(8): 692-699.

Wolfe, D. et al. 2003. "Dating violence prevention with at-risk youth: A controlled outcome evaluation". *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 71(2): 279-291.

Xavier, S.R. et al. 2013. *Global Entrepreneurship Monitor: 2012 Global Report.* Global Entrepreneurship Monitor.

Zamberlin N. et al. 2012. "Latin American women's experiences with medical abortion in settings where abortion is legally restricted". *Reproductive Health Journal* 9:34.

Zamboni, Y. 2007. "Participatory Budgeting and Local Governance: An Evidence-Based Evaluation of Participatory Budgeting Experiences in Brazil". Documento de trabajo. Washington, D.C.: Banco Mundial.

[1] La labor de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos con los afrodescendientes ha tenido un enfoque similar.

[2] Los países con las brechas de pobreza más notables son Panamá, Guatemala y Paraguay (Paes de Barros et al., 2009). En Panamá, por ejemplo, el 90% de los pueblos indígenas es pobre y el 69,5% vive en pobreza extrema, mientras que sólo el 30% de la población no indígena es pobre. Aunque la reducción de la pobreza en general ha sido rápida (14%), la disminución de la pobreza indígena ha sido mucho más lenta (4,3%) (Inchauste y Cesar, 2010). La situación es similar en Guatemala y Paraguay, donde el 72,3% y el 74,4%, respectivamente, de los pueblos indígenas vive en pobreza, en comparación con el 43,8% y el 49%, respectivamente, de la población no indígena (CEPAL, 2010).

[3] Las evaluaciones de impacto que usan ensayos aleatorios de control son especialmente difíciles en el ámbito del desarrollo con identidad. En este tipo de ensayos se debe aplicar una intervención normalizada a una muestra de beneficiarios de tamaño suficiente para conseguir la potencia estadística necesaria a fin de detectar los efectos en esos beneficiarios y compararlos con un grupo de control que no es objeto de la intervención. Sin embargo, un elemento central del desarrollo con identidad es adaptar las intervenciones de tal modo que se ajusten a las prioridades de los pueblos indígenas. Esto significa que a menudo es imposible normalizar una intervención para varias comunidades, y ni siquiera es deseable considerando la necesidad de respetar las opiniones y las preferencias de cada comunidad. Por consiguiente, aunque se llevarán a cabo ensayos aleatorios de control de intervenciones en beneficio de pueblos indígenas, no siempre será posible y habrán de usarse otros métodos de evaluación, como las evaluaciones participativas. Se puede esgrimir un argumento similar en el caso de las comunidades de afrodescendientes rurales tradicionales.

[4] Asimismo, cabe señalar que los resultados de la evaluación de impacto son específicos de un contexto, pues aquello que funciona en una localidad no necesariamente funcionará en otra y mientras no se cuente con un conjunto sólido de pruebas que abarque varios países y distintos tipos de países, los resultados deberán interpretarse con cautela.

[5] El término "segunda generación" se usa para hacer referencia explícita al avance obtenido por la región en materia de igualdad de género. En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2012 (Banco Mundial, 2012a), que tiene como tema central la igualdad de género, se identifican tres ámbitos: dotaciones, agencia, y oportunidades económicas. Mediante el uso de este marco, se han logrado un avance considerable en igualdad de género en América Latina y el Caribe en el ámbito de las dotaciones de capital humano; los dos retos que quedan en las dotaciones son la salud materna y las dotaciones de educación para mujeres indígenas. Sigue habiendo retos importantes en los ámbitos de agencia (muy señaladamente la capacidad para vivir una vida sin violencia) y oportunidades económicas.

[6] Área B del diagrama de Venn: algunos conocimientos disponibles sobre enfoques eficaces. Obsérvese que si bien hay datos que sustentan la eficacia de la educación intercultural bilingüe (véase más adelante), se trata de un ámbito que requiere más trabajo analítico.

[7] El Documento de Marco Sectorial es intrínsecamente transectorial, como se expone en el párrafo 1.4. Muchos de los principales desafíos para el desarrollo que encaran las mujeres, los pueblos indígenas y los afrodescendientes se abordarán mediante intervenciones a cargo de divisiones del Banco distintas de la División de Género y Diversidad. Por consiguiente, el presente Documento de Marco Sectorial se basa explícitamente en elementos de otros documentos de marco sectorial ya aprobados y que hacen referencia a intervenciones eficaces para abordar temas de género y diversidad.

[8] En América Latina y el Caribe, los niños indígenas tienen casi el doble de probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento como consecuencia de la malnutrición crónica (OPS, 2008b).

[9] Las escuelas con poblaciones considerables de estudiantes indígenas que no reforzaron sus programas de educación intercultural bilingüe no mostraron avances en cuanto a cerrar las brechas de desempeño entre indígenas y no indígenas.

[10] La pertinencia de la educación bilingüe en los Estados Unidos es limitada por tres razones: (i) la educación bilingüe suele ser un puente hacia el inglés y no un fin en sí misma (Rossell y Kuder, 2005); (ii) los programas tienden a ser bilingües y no interculturales bilingües como en América Latina y el Caribe; y (iii) hay un debate no resuelto acerca de la eficacia de la educación bilingüe para mejorar los resultados educativos del país; este debate tiene su origen en las diferencias en duración y enfoque de los programas bilingües, las diferencias en las variables de resultados a las que se da seguimiento, y las diferencias en las normas mínimas de rigor analítico para la inclusión de estudios en trabajo de metanálisis (Rossell y Kuder, 2005; Greene, 1997; Fitzgerald y Relyea-Kim, 2013).

[11] De acuerdo con un estudio sobre las percepciones de los padres acerca de la educación intercultural bilingüe en Guatemala, los padres agradecían la enseñanza en lenguas mayas, pero también les preocupaba que sus hijos no aprendieran bien el español (Juárez y Asociados, 2013).

[12] Por desgracia, aunque ha habido experiencias de adaptación cultural de los servicios de salud para poblaciones de afrodescendientes —por ejemplo, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha elaborado manuales de capacitación para los proveedores de servicios en los que se abordan adaptaciones culturales tanto para indígenas como para afrodescendientes (véase Cunningham (2002) y Chávez Pérez et al. (2010)—, no se han documentado los efectos de esta adaptaciones en el uso de servicios y los resultados de salud.

[13] Cabe destacar que si bien los trabajadores de salud comunitarios desempeñan un importante papel en la atención de salud integral, no sustituyen un sistema de salud deficiente. Programas como la Iniciativa Salud Mesoamérica del BID responden a dificultades sistémicas del sistema de salud y ofrecen servicios adaptados culturalmente.

[14] http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=826

[15] Defensoría del Pueblo. Índice de satisfacción de usuarios de salud. 2009. En 2012 el Ministerio incluyó cuatro EPSI en su evaluación de resultados del sistema de salud; dos de ellas se clasificaron dentro de la categoría "alto" y dos en la categoría "medio bajo". Visítese el sitio http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Ordenamiento-EPS-20%20diciembre.pdf.

[16] Área B del diagrama de Venn (algunos conocimientos disponibles sobre enfoques eficaces) para la gestión compartida de zonas protegidas; área A del diagrama de Venn (no hay conocimiento sobre enfoques eficaces) para el pago de servicios ecosistémicos; área B del diagrama de Venn (algunos conocimientos disponibles sobre enfoques eficaces) para el otorgamiento de títulos de propiedad y la demarcación de territorios, aunque se requiere un análisis mucho mayor a este respecto.

[17] Los pueblos indígenas tienen una ventaja en el seguimiento de las zonas protegidas considerando su conocimiento local y sus estructuras de gobernanza locales.

[18] Este programa recibió financiamiento conjunto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), el Banco Mundial y el BID. Encontramos otro ejemplo de la importancia de incorporar los sistemas de creencias de los pueblos indígenas en la gestión de zonas protegidas en Madagascar, donde una zona protegida incluía sitios de significado espiritual para las comunidades indígenas locales, lo que creaba poderosos incentivos para la participación activa de las comunidades en el proceso de conservación (Gardner et al., 2008).

[19] Costa Rica, Guatemala, Honduras y México han adoptado políticas de explotación forestal descentralizada con gestión comunitaria que han reducido los niveles de deforestación y mejorado la gestión general de las zonas protegidas (ONU-REDD, 2012). Por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera Maya, donde en la década de los noventa se otorgó reconocimiento a los derechos de las comunidades, la deforestación ha sido casi nimia gracias a la activa gestión forestal de las concesiones forestales comunitarias. Además, estas concesiones han redundado en importantes beneficios socioeconómicos para los miembros de la comunidad (FAO, 2014).

[20] En el Parque Nacional Yasuní de Ecuador, la comunidad kichwa añangu ha generado un ingreso superior a los US$2 millones anuales mediante el proyecto ecoturístico Napo Wildlife Center y abandonó por completo la caza de fauna silvestre, que ahora está protegida en un territorio de más de 21.000 hectáreas de bosque tropical (Tinoco, 2014).

[21] Los mecanismos de pago por servicios ambientales son programas en los que cada familia o las comunidades reciben pagos en efectivo a cambio de ejercer una labor de gestión ambiental de sus tierras.

[22] En el Documento de Marco Sectorial de Agricultura y Recursos Naturales (párrafos 2.22 y 2.23), se analizan las limitaciones del pago por servicios ambientales como instrumento para la gestión de recursos naturales.

[23] En lo relativo a los títulos de propiedad, hay grandes brechas entre las comunidades rurales indígenas y no indígenas (Patrinos et al. 2007). Aunque no menos del 40% de las tierras en América Latina están controladas por pueblos indígenas (véase el párrafo 3.14), no se tiene claro cuál es el porcentaje real en la región de tierras indígenas con un título de propiedad formal, por lo que representa un tema importante para futuros trabajos analíticos.

[24] Área C del diagrama de Venn (datos considerables sobre buenas prácticas) en (i) embarazo adolescente y (ii) mortalidad materna. Área B del diagrama de Venn (algunos conocimientos sobre enfoques eficaces) en el caso de la violencia contra la mujer.

[25] Banco Mundial, 2014b; Sen, 1999

[26] El estudio de McQueston fue el primer análisis sistemático en el que se abordaban exclusivamente intervenciones en países en desarrollo. De los 21 estudios que satisfacían el criterio de rigor metodológico para su inclusión en el estudio, seis se centraban en ocho intervenciones en países de América Latina y el Caribe, a saber, Brasil, Chile, Honduras, Jamaica, México y Nicaragua.

[27] No todos los programas que han logrado reducir las tasas de embarazo adolescente se han planteado esto como objetivo explícito. Por ejemplo, se observó que una intervención para fomentar el liderazgo y la mediación en Panamá (con la finalidad de reducir la violencia en las escuelas) redujo el embarazo adolescente (Gibbons, 2013).

[28] Algunas condiciones comunes son los síntomas de depresión o ansiedad, trastornos del sueño, trastorno por estrés postraumático, abuso de alcohol y otras sustancias, síntomas gastrointestinales o genitourinarios crónicos de causa inexplicable, dolor crónico o resultados reproductivos adversos, entre otros (OMS, 2013).

[29] Desde entonces, ambos programas se han extendido más allá de los países iniciales. Sexto Sentido, telenovela que forma parte del programa SDSI, se ha transmitido en varios países centroamericanos y en Bolivia. Por su parte, el Programa H se ha sometido a evaluaciones de impacto en Brasil, India, los Balcanes, Etiopía y Namibia.

[30] Las actividades de SDSI incluyen la serie televisiva semanal Sexto Sentido, que se transmite en un canal de televisión nacional; el programa radiofónico de opinión Sexto Sentido dirigido a los jóvenes, que recibe llamadas y se transmite simultáneamente por seis estaciones; y actividades comunitarias presenciales con jóvenes que incluyen campamentos de liderazgo y visitas a escuelas.

[31] SDSI también generó efectos importantes en otros ámbitos, entre ellos, un aumento del 42% en el uso del preservativo en encuentros sexuales casuales y del 13% en la disposición para ser amigos de una persona homosexual.

[32] Obsérvese que en Brasil la mayoría de los beneficiarios del programa fueron afrodescendientes.

[33] Aunque los servicios policiales y judiciales no se analizan en este Documento de Marco Sectorial, las prácticas óptimas, los datos internacionales y los ámbitos en los que el BID debería actuar se abordan en el Documento de Marco Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia.

[34] Sobre todo de los Estados Unidos, pero también de Pakistán y Sudáfrica.

[35] El área C del diagrama de Venn (datos considerables sobre buenas prácticas) para (i) cuidado infantil, (ii) políticas activas de mercado de trabajo para la mujer y (iii) acceso a crédito para mujeres empresarias. El área B del diagrama de Venn (algunos datos sobre enfoques eficaces) para programas de certificación de empresas en igualdad de género, capacitación para mujeres en ocupaciones no tradicionales y servicios de desarrollo empresarial para mujeres emprendedoras. El área A del diagrama de Venn (no hay conocimiento sobre enfoques eficaces) engloba estos asuntos para las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Obsérvese que el ámbito de la participación de la mujer en la fuerza laboral y sus ingresos es uno de los que cuenta con más trabajo analítico disponible sobre eficacia de las intervenciones, pero incluso en ese caso hace falta un mayor análisis (por ejemplo, qué funciona para promover la formación profesional y las carreras no tradicionales).

[36] Brasil, Chile y la India tienen mandatos legales para que los empleadores con un número suficiente de trabajadoras mujeres ofrezcan servicios de guardería en el lugar de trabajo. En Chile ha habido indicios de tal discriminación.

[37] De acuerdo con el Documento de Marco Sectorial de Trabajo, estos grupos incluyen a los jóvenes que desertaron del sistema educativo o carecen de las competencias que solicitan los empleadores, mujeres que han permanecido mucho tiempo fuera del mercado laboral, personas pobres que en algunos casos son beneficiarias de programas de protección social, adultos mayores, personas con discapacidades, ex convictos o personas que quizá sufren discriminación en razón de su género, raza u otras características personales.

[38] Esto difiere de los resultados de países europeos, donde se cuenta con pocos datos sobre efectos desglosados por sexo (Card et al., 2010).

[39] El BID está apoyando evaluaciones de servicios de intermediación laboral en la región que ayudarán a subsanar la falta de conocimiento sobre su eficacia.

[40] La Oficina Federal para la Igualdad de Género de Suiza ideó un instrumento estadístico llamado Logib, que es una calculadora de autoevaluación de la remuneración para verificar si una empresa está aplicando el principio de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Su uso es obligatorio para las empresas que participan en adquisiciones públicas y tienen más de 50 empleados. En Alemania existe un instrumento similar llamado Logib-D. La eficacia de estos instrumentos no se ha evaluado, pero su uso ha sido limitado.

[41] También hay ejemplos de programas de certificación privados para la igualdad en el trabajo como la certificación suiza EDGE http://www.edge-cert.org/.

[42] A los efectos del presente documento, las ocupaciones y los sectores no tradicionales se refieren a todos aquellos ámbitos donde tradicionalmente los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las mujeres han tenido una representación insuficiente; los sectores y tecnologías relativamente nuevos y las posiciones de liderazgo. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son campos en los que de manera habitual se registra este fenómeno.

[43] La intervención puso de relieve el mayor rendimiento económico de los oficios en los que predomina la presencia masculina y usó métodos de "persuasión suaves" como un de video mujeres mecánicas automotrices con la intención de alentar a las mujeres a incursionar en oficios en los que tradicionalmente predominan los hombres.

[44] Más allá del tema de género, hay una abundante bibliografía en la que se examina el efecto de informar a los estudiantes sobre los rendimientos de la escolaridad en los países en desarrollo y se concluye que, en general, esta labor de información puede tener una gran repercusión en la asistencia escolar (Jensen, 2010 y Nguyen, 2008).

[45] En un reciente ensayo aleatorio de control, financiado por el BID, de un proyecto de capacitación basado en una telenovela de tres horas en Perú, se concluyó que la intervención producía efectos estadísticamente significativos en las prácticas empresariales, como un menor uso de crédito informal y la separación de los gastos personales y los de negocios, pero no se identificó ningún efecto considerable en el ingreso del negocio (Torero et al., 2013).

[46] En este programa de Goldman Sachs apoyado por el BID se destinaron 150 horas a capacitación en el aula y 120 horas a asesorías individuales.

[47] El 59% de las entrevistadas mencionaron haber recibido asesoría de una a tres mujeres más; el 23% de cuatro a ocho; el 10% de nueve a veinte; y el 8% de más de 20 mujeres adicionales.

[48] Área B del diagrama de Venn (algunos conocimientos disponibles sobre enfoques eficaces) para las cuotas de políticas candidatas y la participación de mujeres en la gobernanza empresarial. Área A del diagrama de Venn (no hay conocimiento sobre enfoques eficaces) para otros temas analizados en esta sección.

[49] Estos territorios están consagrados en las constituciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Sólo las comarcas indígenas panameñas tienen la categoría de entidades administrativas políticas descentralizadas; sin embargo, los gobiernos de las comarcas no reciben transferencias presupuestarias del gobierno nacional, sino que cobran derechos de entrada a sus ríos y tierras.

[50] En Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador, *Sumak Kawsay* se define como "la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar opulencia ni el crecimiento económico infinito" (Senplades, 2013).

[51] Cálculo del BID apoyado en su base de datos sobre la representación de las mujeres en las legislaturas nacionales de América Latina y el Caribe. El porcentaje de mujeres en ambas cámaras de los congresos de países latinoamericanos con cuotas es del 26,3%, frente al 17,0% en países sin cuotas, lo que representa una diferencia estadísticamente significativa (el BID basa sus cálculos en datos interparlamentarios de 2014). Obsérvese que estos cálculos no pueden implicar una casualidad y que no se ha hecho una evaluación experimental de las cuotas (tarea no sencilla, puesto que las cuotas suelen aplicarse a escala nacional).

[52] En otros estudios, que no son ensayos aleatorios de control, se ha determinado que la participación de la mujer en comités de recursos hídricos mejora la calidad y la sostenibilidad de los servicios y fomenta el empoderamiento entre las beneficiarias de sexo femenino (véase Bokhari, 2006; Wash, 2006). Por ejemplo, de acuerdo con un estudio mundial sobre servicios de suministro de agua bajo gestión comunitaria en 88 comunidades, otorgar a grupos comunitarios, en concreto a mujeres y población pobre, un mayor control sobre el establecimiento de los servicios de agua los empoderaba para gestionar sus servicios con más eficacia en el futuro (Gross et al., 2001). El uso de los servicios mejorados de modo que se apoye la promoción de la salud también fue más elevado cuando las mujeres participaban en la toma de decisiones.

[53] Considérese que las evaluaciones de impacto en Kenia y Sierra Leona se llevaron a cabo en contextos culturalmente muy distintos de los países de América Latina y el Caribe; por consiguiente, su pertinencia para la región es limitada.

[54] En un análisis contrafáctico de los presupuestos participativos se llega a la conclusión de que éstos aumentaron el flujo de información sobre la gobernanza municipal y crearon nuevos espacios para que la ciudadanía diera a conocer sus demandas y sometiera a escrutinio lo que antes eran procesos decisorios sumamente aislados y discrecionales (Mansuri y Rao, 2013).

[55] Zamboni (2007) llega a la conclusión de que, en promedio, los municipios brasileños donde se han puesto en práctica políticas de presupuesto participativo tienen una mejor gestión y han registrado menos irregularidades que municipios similares que carecen de ellas. Gonçalves (2009) observa que aumentar el gasto en servicios de saneamiento y salud propició una reducción en la mortalidad infantil en los municipios que adoptaron presupuestos participativos. Boulding y Wampler (2010) concluyeron que los municipios brasileños con presupuesto participativo gastan una proporción ligeramente mayor de su presupuesto en programas de salud y educación, pero hay pocas pruebas de que este cambio en las prioridades presupuestarias incida en los resultados medibles.

[56] Investigadores del BID están analizando la base de datos OSIRIS de Bureu Van Dijk para generar un análisis más complejo sobre el vínculo en América Latina entre la presencia de las mujeres en consejos y en la alta gerencia, por un lado, y el desempeño de las empresas, por otro.

[57] Obsérvese que más adelante se aborda otro desafío, a saber, el acceso limitado a servicios fundamentales de infraestructura para pueblos indígenas, para el que no hay un análisis correspondiente en las políticas y programas anteriores. La explicación de esta asimetría es muy simple: aunque se trata de un desafío de desarrollo importante para la región, hay poca información disponible, si acaso, sobre enfoques eficaces para fomentar el acceso de los pueblos indígenas a estos servicios.

[58] El nivel de disponibilidad de información desglosada por raza, etnia y género varía dependiendo del país y del tema al que se esté dando seguimiento. Las diferencias en las definiciones etnorraciales de un país a otro complican aún más la disponibilidad de estadísticas comparables entre países.

[59] Estos cálculos son sensibles a la tasa anual de mayor cobertura utilizada (ya sea para niños indígenas o no indígenas; en el segundo caso los rezagos estimados son mayores).

[60] En Brasil, los adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años tienen 3,4 veces más probabilidades de estar rezagados dos o más años según la secuencia de edad por grado escolar, mientras que en Panamá, Perú y Paraguay el rezago equivale a 2,9, 2,4 y 2,2 años, respectivamente (SITEAL, 2012).

[61] De nuevo, algunas brechas en las tasas de terminación son bastante grandes. La probabilidad de que un indígena termine la escuela secundaria es más de 20 puntos porcentuales inferior en Ecuador, Panamá Paraguay.

[62] Como se observa en la Sección I, ya que la labor del Banco con la población de afrodescendientes se centra en contextos en los que estas poblaciones sufren exclusión a causa de su condición u origen racial o étnico. En general, no ocurre así en el Caribe y, por consiguiente, en esta sección no se abordan los resultados educativos para los afrodescendientes en esa subregión. No obstante, cabe señalar que hay aspectos importantes relacionados con el género en la educación en el Caribe, donde las tasas de deserción escolar de los niños rebasan considerablemente las de las niñas. Se trata de una dificultad seria que se aborda explícitamente como línea de acción en el Documento de Marco Sectorial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano ("invertir en iniciativas que busquen cerrar brechas de género y etnicidad en la educación, tales como la deserción escolar de jóvenes en el Caribe…").

[63] A 2006, las brechas eran de 13 años en Guatemala, 10 años en Panamá y 6 años en México (Haneman, 2006, citado en Naciones Unidas, 2009). Los datos sobre esperanza de vida desglosados por etnia no están disponibles para muchos países ni se dan a conocer periódicamente.

[64] Resulta difícil encontrar datos regionales sobre tasas de mortalidad materna desglosados por raza y etnia. Datos de 2004 para Brasil muestran que las mujeres afrodescendientes tienen tres veces más probabilidades de morir en el parto que las mujeres blancas, en parte por la baja calidad de la atención prenatal (Ministerio de Salud de Brasil, 2004). De acuerdo con datos más antiguos de la costa del Pacífico de Colombia, la tasa de mortalidad materna de las mujeres afrocolombianas cuadruplica con creces el promedio nacional (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 1997). En Ecuador, la ciudad de Esmeraldas, donde el 80% de la población es afrodescendiente, tiene una tasa de mortalidad infantil que es el doble del promedio nacional (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 1997).

[65] Aunque hay varios informes que identifican la brecha en el acceso a servicios entre los pueblos indígenas de América Latina y la sociedad en general, sólo unos cuantos estudios se refieren a las intervenciones más eficaces para salvar esas brechas.

[66] Como ejemplo tenemos los yacimientos de gas de Camisea, Perú, ubicados en el Bajo Urubamba y con una población de 20.000 indígenas amazónicos. El Bajo Urubamba forma parte de un municipio de 45.000 personas; la capital, Echarate, está en el Medio Urubamba. En 2013, Echarate recibió US$175 millones en regalías y desde 2004 ha acumulado US$394 millones en regalías no gastadas. En 2013 Echarate destinó al Bajo Urubamba apenas el 1,9% de la inversión total del municipio para ese año. Fuente: cálculos del BID apoyados en información de la base de datos de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.

[67] Por ejemplo, 146 de los 214 conflictos sociales (68%) registrados en Perú de enero a junio de 2014 tuvieron que ver con pueblos indígenas, y muchos de ellos con asuntos socioambientales.

[68] Aunque el tema de la pérdida de la lengua es importante para la región, es poca la información internacional definitiva que se ha recopilado sobre la eficacia de las intervenciones para reducir la pérdida de lenguas en peligro; por consiguiente, en la Sección II de este documento no se incluyeron datos internacionales sobre protección de lenguas en peligro.

[69] Los factores culturales de "folclorización" y "abandono de la lengua" están ocasionando la pérdida de la lengua en estas poblaciones. La folclorización ocurre cuando una lengua sólo se habla en ciertos ámbitos o en ciertos momentos, y no de manera más generalizada. El abandono de la lengua ocurre cuando sus hablantes ocultan su uso o prefieren que sus hijos no la aprendan.

[70] Por ejemplo, según declaraciones del Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Kyung-wha Kang en 2011 647 mujeres fueron asesinadas en El Salvador y 375 en Guatemala (sitio virtual de las Naciones Unidas, http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/4/femicide-in-latin-america). Esto equivaldría a tasas del 9,8 y el 2,4 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Como estos datos no provienen de una fuente comparable, no aparecen en el Anexo A.10.

[71] Los siete países que cuentan con datos disponibles por raza o etnia en sus encuestas de hogares son Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú (Ñopo, 2012).

[72] Este cálculo se hizo desglosando sectores a un dígito. Un mayor desglose permite identificar con más claridad el nivel de segregación ocupacional.

[73] El 35% comparado con Europa y Asia Central (34%) y África subsahariana (6% al 8%).

[74] La percepción es que las consultas con pueblos indígenas han sido más fructíferas que con las comunidades de afrodescendientes, pues estas últimas se han caracterizado por intensos debates sobre a quién se debe consultar (a la comunidad en general, a consejos comunitarios o a representantes especiales designados por los consejos comunitarios). Fuente: Tianna Paschel, correspondencia privada.

[75] Algunos territorios indígenas fueron reconocidos como entidades administrativas políticas mucho antes de esto. La más antigua en la región es la comarca Kuna Yala en Panamá, que se fundó en 1871 cuando Panamá era aún un departamento de Colombia. La comarca de San Blas (Kuna Yala) obtuvo reconocimiento en la legislación panameña en 1953.

[76] La representación política de la mujer es mayor en el Caribe que en América Latina. En el Caribe, el 32,9% de los parlamentarios eran mujeres en 2014, en comparación con el 25,9% en América Latina.

[77] Cálculos basados en datos de las Naciones Unidas (2014).

[78] Fuentes: parlamentarios y ministros en América Latina y el Caribe (UIP, 2014); alcaldes y miembros de ayuntamientos en América Latina (Schneider et al. 2012); presidentes de comités parlamentarios, presidentes de partido y miembros de comités ejecutivos nacionales en América Latina (Llanos y Roza 2014); jueces en tribunales superiores en América Latina (IAD 2013).

[79] Mujeres que tienen responsabilidades laborales y domésticas.

[80] La Política de Género incluye tanto acciones proactivas (integración transversal de la perspectiva de género e inversión directa en proyectos tendientes a promover la igualdad de género) y acciones preventivas (incluir el tema de género en el conjunto de salvaguardias del Banco).

[81] Después que se escribió este informe, la definición de indicador de resultados de género se ha vuelto más estricta, de tal modo que el simple desglose de beneficiarios por sexo ya no es válido como un resultado de género.

[82] Desde que se presentó el informe de OVE, se han sumado consultores adicionales a la Unidad de Salvaguardias Ambientales (ESG) a fin de apuntalar la capacidad para administrar la salvaguardia de género, además de otras acciones para aumentar su capacidad en general.

[83] Esta segunda categoría se refiere a los préstamos que incluyen al menos un indicador de resultados de género que se apoya en un análisis de temas y acción de género para reducir las brechas en igualdad de género de acuerdo con la lógica vertical del proyecto.

[84] Obsérvese que los préstamos del sector privado no pueden incluirse en este ejercicio pues sus sistemas de seguimiento de la efectividad no son estrictamente comparables. Sin embargo, desde 2012 las ventanillas de efectividad en el desarrollo de las áreas de gestión del sector privado han logrado un avance importante en la integración del tema de género en sus respectivos sistemas y procesos de seguimiento de proyectos y revisión de la calidad para operaciones sin garantía soberana. Por otro lado, con miras a mejorar la coordinación entre las ventanillas del sector privado del BID, en 2014 se creó un Grupo de Trabajo del Sector Privado sobre Género para armonizar definiciones, mejorar el registro de indicadores desglosados por sexo y formular y estandarizar componentes de género dentro de los distintos instrumentos de efectividad en el desarrollo del sector privado.

[85] Estos factores se identificaron en una evaluación externa de los primeros tres años de aplicación de la Política de Género.

[86] Como las directrices de etnoingeniería del Banco (Perafán et al., 2005).

[87] Se aprobó una operación adicional para apoyar a los afrodescendientes y las poblaciones indígenas de Honduras con inversiones en infraestructura y los ámbitos económico, social, cultural y ambiental (Programa de Apoyo a las Comunidades Indígenas y Negras, HO-0193).

[88] Excluidos los préstamos que se están preparando para 2015, el promedio para 2011-2014 es inferior a un proyecto cada dos años.

[89] Cabe señalar que esta lista no incluye varias inversiones de gran escala. Entre las operaciones importantes de financiamiento no reembolsable para inversión figuran los proyectos mesoamericanos en Oaxaca y América Central que giran en torno a la salud materna, en especial en poblaciones indígenas, y tres operaciones de financiamiento no reembolsable para inversión centradas en los pueblos indígenas y el cambio climático (dos en Honduras y una en varios países centroamericanos).

[90] Los cálculos iniciales indican que el trabajo del BID sea quizás excepcional en el tema de la diversidad por su énfasis en operaciones focalizadas y proactivas (independientes) tanto para pueblos indígenas como para afrodescendientes.

[91] En vista de los desafíos cruciales que encaran los pueblos indígenas y los afrodescendientes en la región (descritos en la Sección III) y la falta de conocimientos sobre intervenciones eficaces, al Banco sólo le quedan dos opciones: adoptar un enfoque de aprendizaje en la práctica o no emprender una labor operativa con estas poblaciones. En el presente Documento de Marco Sectorial se propugna el primer enfoque. En una revisión de la cartera relacionada con temas indígenas, OVE observa que los proyectos del Banco sobre estos temas suelen tener un bajo nivel de evaluabilidad (véase el párrafo 4.5). Si bien es difícil evaluar el impacto de proyectos centrados en el desarrollo con identidad (véase la Sección II), el Banco se esforzará especialmente en formular proyectos sobre temas indígenas que sean más evaluables.

[92] Se está llevando a cabo una rigurosa evaluación impacto de Ciudad Mujer, en El Salvador, cuyos resultados estarán listos para divulgación en el primer trimestre de 2015.